

GRANO DE SAL

# DE IGUALA A AYOTZINAPA LA ESCENA Y EL CRIMEN

FERNANDO ESCALANTE GONZALBO  
JULIÁN CANSECO IBARRA



## Fernando Escalante Gonzalbo

Es sociólogo, profesor en El Colegio de México. Se dedica sobre todo a desarrollar una sociología de las representaciones sociales. Entre sus libros están *Ciudadanos imaginarios* (1992), *La mirada de dios* (2000), *El crimen como realidad y representación* (2013) y *Retrato de grupo con credencial de elector* (2018).

## Julián Canseco Ibarra

Estudió relaciones internacionales en El Colegio de México; actualmente prepara su tesis de grado sobre una comunidad chucota en el extremo nororiental de Siberia. Sus intereses académicos se centran en la antropología social y la sociolingüística.





*De Iguala a Ayotzinapa*



# De Iguala a Ayotzinapa

*La escena y el crimen*

**FERNANDO ESCALANTE GONZALBO  
Y JULIÁN CANSECO IBARRA**

 EL COLEGIO  
DE MÉXICO

**GS<sup>o</sup>**

Primera edición, 2019  
D. R. © Fernando Escalante Gonzalbo  
y Julián Canseco Ibarra  
© El Colegio de México

Diseño de portada: León Muñoz Santini  
y Andrea García Flores

D. R. © 2019, Libros Grano de Sal, SA de CV  
Av. Casa de Moneda, edif. 12-B, int. 4, Lomas de Sotelo, 11200,  
Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México  
contacto@granodesal.com  
www.granodesal.com  GranodeSal  LibrosGranodeSal

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra por  
cualquier medio, sin la autorización por escrito del titular  
de los derechos.

ISBN 978-607-98611-4-8

Impreso en México • *Printed in Mexico*

|   |     |
|---|-----|
| Palabras preliminares .....   | 9   |
| 1. El acontecimiento .....  | 15  |
| 2. El transcurso del tiempo .....   | 25  |
| 3. La cultura antagónica .....  | 37  |
| 4. Tlatelolco como modelo .....   | 45  |
| 5. Avatares de la cultura antagónica .....                                  | 57  |
| 6. Las otras versiones .....  | 63  |
| 7. La descontextualización .....  | 83  |
| 8. Nocturno en que nada se oye  <br><i>En lugar de una conclusión</i> ..... | 109 |
| Bibliografía .....  | 127 |
| Notas .....   | 131 |



En el momento en que firmamos estas líneas, en octubre de 2019, se discute todavía muy ásperamente sobre lo que sucedió en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014. En la prensa se dice de muchas maneras que lo que indican los informes publicados hasta ahora es mentira, y el gobierno ha ofrecido una nueva investigación, que debe comenzar “desde cero”. Eso quiere decir que es probable que en el futuro haya información nueva, acaso distinta, y a partir de ella una explicación diferente de los hechos.

Desde luego, es posible que esa nueva información sea bien recibida. Pero parece poco probable que el episodio se llegue a aclarar de modo definitivo, con una explicación que deje conformes a todos. En cualquier caso, la masacre de Iguala es ya un hito en la vida pública mexicana del nuevo siglo, un término de referencia con una enorme carga moral. Mejor dicho, no la masacre de Iguala, sino el acontecimiento que llamamos “Ayotzinapa”. La diferencia no es insignificante: de eso se tratan las páginas que siguen.

Éste no es un libro sobre los sucesos de Iguala. No podemos decir nada nuevo sobre lo que ocurrió esa noche, no sabemos nada más que lo que se ha publicado. Y nos ocupamos sólo de eso, de lo que se ha publicado. Es decir, que no nos referimos a los hechos, sino a la información disponible sobre los hechos, no a lo que sucedió, sino a las interpretaciones acerca de lo que sucedió. No a Iguala, sino a “Ayotzinapa”.

Los hechos de Iguala fueron elaborados en los medios de comunicación, en el espacio público. Y allí adquirieron sentido. Queremos entender cómo sucedió eso. Toda interpretación remite a los hechos, pero siempre va más allá de los hechos, los pone en un contexto particular, que les confiere un significado. No es lo mismo que un episodio se sitúe en el contexto del crimen organizado o que se sitúe en el contexto de la represión política. Y no hay nada automático en esa alternativa.

Más que cualquier otro, este libro es producto de una conversación. Mejor dicho, es una conversación. En primer lugar, por supuesto, una larga, sostenida, apasionante conversación entre quienes firmamos. Pero también la conversación más larga, más amplia de nuestro círculo de Chimalistac; por eso, gracias a María, Esteban, Iván, Rodrigo, Frida, Claudio, Celia, Miguel, Gibrán, Natalia, Héctor, Rainer, Verónica, Rogelio, Estela, Franco, Alejandra, Juan Pedro, Mauricio, Antonio, Julio, María Fernanda, Fiacro, Jorge, Gauri, Marco, y desde luego gracias a Javier.

FERNANDO ESCALANTE GONZALBO  
y JULIÁN CANSECO IBARRA  
Ciudad de México,  
9 de octubre de 2019

El 15 de julio de 1943, en el Parque José Santos Chocano de la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, fue asesinado de 19 puñaladas el boxeador retirado Francisco A. Pérez, conocido como *Mamatoco*. Pérez había sido entrenador deportivo de la Policía Nacional, y era una figura menor de la segunda fila de la política colombiana, editaba el semanario *La Voz del Pueblo*, que sobre todo se ocupaba de asuntos de la policía, y había pasado una temporada en la cárcel por su participación en el proyecto de golpe de Estado del general Eduardo Bonitto, en 1941.

En las semanas siguientes la prensa se hizo eco de numerosos rumores y especulaciones acerca del asesinato de *Mamatoco*. La prensa conservadora, en particular el diario *El Siglo*, de Laureano Gómez, habló de una conspiración y apuntó directamente al presidente de la república, Alfonso López Pumarejo. Se dijo que el presidente había ordenado el asesinato de Pérez para evitar que publicase noticias escandalosas de la familia presidencial; se habló de la relación de uno de los hijos del presidente con la esposa de un diplomático; se dijo también que *Mamatoco* investigaba la muerte de un carabinero que había sido asesinado cuando descubrió a un hijo del presidente en un automóvil, con una mujer de la alta sociedad bogotana. A partir de eso, Laureano Gómez denunció el asesinato como un "crimen de Estado" y decidió que en la primera plana de *El Siglo* apareciese todos los días la misma frase: "¿Quién mató a *Mamatoco*?"

Los rumores no tenían ningún fundamento. No había ninguna relación sentimental que ocultar. El carabinero del que se hablaba había sido baleado por un grupo de asaltantes cuando acudió a prestar ayuda al ciudadano José María Castro Montejo. Pero no hacía falta ninguna prueba para hacer creíble la idea de la conspiración; su verosimilitud dependía de otras cosas. En parte estaba la habilidad retórica de Laureano Gómez, su capacidad para imaginar conspiraciones convincentes,<sup>1</sup> pero eso era sólo una parte.

La investigación judicial descubrió algo mucho más prosaico, menos atractivo, mucho menos escandaloso: el mayor Luis Carlos Soler Hernández, de la Policía Nacional, había ordenado el asesinato para evitar que se hicieran públicos los malos manejos administrativos de los que era responsable. Y se encargaron del asesinato materialmente el subteniente Santiago Silva y los agentes de policía Rubén Bohórquez y Oliverio Ayala. *El Siglo* no se movió un milímetro, siguió preguntando lo mismo, todos los días: “¿Quién mató a Mamatoco?”

Obviamente, la pregunta era una acusación. Los lectores tenían que suponer que ya se sabía quién lo había matado, pero que se ocultaba. Sólo hacía falta eso, repetir la pregunta, para desacreditar la investigación, las pruebas, el juicio, y multiplicar las sospechas con cada día que pasaba: que se diese por resuelto el caso era una prueba más de la conspiración, el hecho de que se señalase tan sólo a unos cuantos policías era una prueba adicional en contra del presidente. Y así, la neutralidad del lenguaje periodístico, el distanciamiento escéptico, se convierte en recurso de denuncia.

En los meses que siguieron, la acusación se mezcló con varias otras, sobre los negocios de otro de los hijos del presidente, Alfonso López Michelsen, sobre los arreglos de la

casa de descanso del presidente, llamada Las Monjas, y con cada nueva imputación pesaba más la sospecha.<sup>2</sup> El asesinato de *Mamatoco* se convirtió en un símbolo de la corrupción y el abuso de poder. Finalmente, López Pumarejo se vio obligado a presentar su dimisión el 25 de junio de 1945.

En sí mismo, el asesinato de *Mamatoco* no tenía mayor importancia, porque Francisco Pérez no era un personaje notable. Se volvió importante por la serie de hechos a que dio lugar el asesinato.<sup>3</sup> Se volvió importante porque sirvió para condensar en una imagen una miríada de acusaciones. Y eso es lo que nos interesa subrayar, porque el caso puede servir como modelo.

Laureano Gómez tenía una especial capacidad retórica para dar resonancias terribles a sus acusaciones e imaginación para fabular elaboradas tramas de corrupción:

La mayoría de los ataques de Gómez eran personales, como su acusación de que López, en la construcción del nuevo conjunto de la Universidad Nacional [...] había especulado con los terrenos. Su especialidad era montar escándalos laberínticos, muchos de ellos, mirados desde ahora, triviales y aun incomprensibles, pero pocas de sus víctimas osaron enfrentarlo en el congreso. Para sus seguidores era un ídolo incorruptible.<sup>4</sup>

Pero la verosimilitud de sus acusaciones no era sólo producto de su imaginación: estaba construida culturalmente. La suspicacia respecto a la versión oficial del homicidio de *Mamatoco*, por ejemplo, y la importancia que adquirió un caso como ése, muy menor, fueron producto de una serie de mediaciones que permitían interpolar lo nacional en lo personal y que convirtieron el hecho en un acontecimiento.

Siendo relativamente insignificante, *Mamatoco* como víctima podía ser todas las víctimas. Inscrito en la lógica de la corrupción, del abuso de poder, su asesinato adquirió un valor simbólico como prueba material, concreta, de la maldad del presidente.

La eficacia de la acusación consistió en remitir el hecho a un espacio oculto, secreto, donde se mueven los poderosos. En los años treinta, dice Herbert Braun, el auge económico, la nueva riqueza, comenzaron a hacer sospechosos los negocios de los políticos: "Lenta pero claramente, los *convivialistas* [liberales y conservadores] comenzaron a retirarse de las plazas públicas. La política se hacía en círculos cerrados, en el Jockey Club o el Club de Tiro, donde podían comentar abierta y francamente sus animosidades públicas."<sup>5</sup> En ese ambiente, las tramas ocultas eran más verosímiles que las explicaciones abiertas, documentadas. La culpa del presidente resultaba creíble precisamente porque no había pruebas. Por eso la luz que podían arrojar la investigación y el procedimiento judicial era inútil, incluso contraproducente, porque aparecía como una nueva pantalla para mantener oculta la verdad.

La historia de *Mamatoco* era una nueva escenificación de una historia muy simple, muy antigua: los poderosos conspiran en secreto para mantener su poder.

## 1. El acontecimiento

En las páginas que siguen nos interesa decir algo no demasiado trivial acerca de la construcción de la masacre de Iguala, del 26 de septiembre de 2014, como acontecimiento, es decir, sobre su incorporación al orden cultural. No nos ocupamos de los sucesos de aquella noche, sino de su elaboración en los medios, en la opinión pública. Lo que nos interesa son las condiciones estructurales mediante las que un episodio concreto adquiere valor simbólico y se convierte en un acontecimiento, cuya sola mención inspira asociaciones y evoca argumentos relativamente complejos —y sobre todo emociones relativamente elaboradas, prefiguradas.

La desaparición de los 43 estudiantes normalistas se convirtió en un símbolo, adquirió un peso y un sentido que no había tenido ninguna de las masacres de la década anterior. Damos por entendido que esa elaboración en los medios es producto de un trabajo intelectual, no una floración espontánea, automática: alguien la piensa, alguien la verbaliza, alguien la repite, pero la elaboración depende de una estructura de sentido que existía antes y que resulta significativa sin necesidad de explicaciones. Su carga simbólica es tal que cuatro años después, entre los gestos con que el nuevo gobierno quiere significar un nuevo comienzo, anunció la formación de una “Comisión presidencial para la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa”.<sup>1</sup> Es elocuente que fuese ese caso en particular, entre los muchos trágicos, dudosos, inexplicados de la década anterior —precisamen-

te el caso sobre el que había más información, una investigación más exhaustiva, más detenidos, incluidos policías, funcionarios, el presidente municipal.<sup>2</sup>

No hace falta decirlo porque se sabe que no fue ésa ni la única masacre de esos años, ni la mayor tampoco. No obstante, en la representación colectiva ha opacado a todas las otras y ha adquirido un significado muy distinto: nadie recuerda de modo parecido, nadie ha asignado un sentido político identificable a ningún otro hecho similar de los últimos años. Nos interesa preguntar por qué, y sobre todo preguntar cómo: cómo ese episodio en particular se convirtió en un acontecimiento, cómo se produjo la transformación de los hechos concretos en un icono de la violencia estatal.

Más allá de sus profundas reverberaciones en la opinión pública, el acontecimiento es en muchos sentidos inusual. Adelantemos un ejemplo, para darnos a entender. En uno de los primeros libros en que se menciona el caso, Sergio Aguayo destaca la importancia de que vinieran a México expertos independientes a “elaborar un informe sobre lo que había sucedido en Ayotzinapa”.<sup>3</sup> Leída sin mayor detenimiento, la frase no tiene ningún interés, no dice nada de particular, pero si se piensa un poco hay en ella algo enormemente llamativo: que en Ayotzinapa no sucedió nada.<sup>4</sup>

El hecho de que sea Ayotzinapa —y no Iguala— el nombre con que se ha bautizado el acontecimiento no es un asunto trivial, y volveremos a él. Pero por ahora, nos interesa señalar justamente eso: el hecho de que pueda escribirse, publicarse y leerse un enunciado así sin que llame la atención, sin que resulte problemático. Todos sabemos a qué se refiere. En otras palabras, lo que nos interesa es el proceso de elaboración cultural mediante el cual los sucesos de

Iguala del 26 de septiembre de 2014 se convirtieron en el acontecimiento “Ayotzinapa”.

Resumido en una frase, nuestro argumento es que la construcción del acontecimiento consistió en hacer de los hechos de Iguala una nueva escenificación de la masacre de Tlatelolco, del 2 de octubre de 1968. Éste es el origen del enorme peso simbólico que tuvo el caso en la opinión pública y también la razón por la cual el acontecimiento adoptó los rasgos concretos que tiene hoy. Nos apresuramos a matizar la afirmación: existen otros intentos de definir el episodio, para empezar el intento de situar la masacre como acontecimiento en la guerra contra el crimen organizado —hablaremos de ello. Pero lo que nos interesa es explorar el orden cultural que hizo posible (y al final, casi obvio) que se viese en el suceso de Iguala una reiteración de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas.<sup>5</sup>

Basta ver algunas de las fotografías de la manifestación para conmemorar los 50 años de Tlatelolco, en la Ciudad de México —el 2 de octubre de 2018. En algunos de los carteles de los manifestantes hay referencias a una serie más o menos larga de hechos de violencia, en la mayoría hay la identificación explícita de Tlatelolco con Ayotzinapa.<sup>6</sup> En una imagen, un hombre muestra lo que parece ser un volante impreso en que se lee: “1968, Acteal, 49 niños, CNTE, 43, Ni una más.” En otra, un grupo de jóvenes lleva una manta en que se ven el emblema de la Olimpiada de 1968, el de la ENAH y el de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa. En otra más, una manta con las siglas UACM tiene el rostro de Gustavo Díaz Ordaz y el perfil de un soldado sobre el que aparecen los números 68 y 43. Otra imagen: la base del asta bandera del Zócalo, con un grafiti apresurado, dos números: 68 y 43.

Ese mismo día, el 2 de octubre de 2018, una de las caricaturas de *La Jornada*, firmada por Rocha, era un rostro compuesto, la mitad la imagen de Díaz Ordaz, la otra mitad la de Enrique Peña Nieto, el monstruo llevaba en las solapas del traje dos palabras: *Tlatelolco, Ayotzinapa*. Y el comentario editorial de la última página del periódico era como sigue: “Del 2 de octubre a los 43 de Ayotzinapa, este país es otro. Pero la exigencia es la misma: luz, transparencia, justicia.” Ese mismo día, el portal *Aristegui Noticias* publicó un texto de Laura Castellanos titulado “El camino del 68 a Ayotzinapa”, un recuento de movimientos de protesta sobre todo de Guerrero, de los años sesenta en adelante; en sus últimos párrafos se lee:

El caso Ayotzinapa *tampoco debe verse* como un hecho policiaco entre un alcalde, policías y criminales contra un grupo de normalistas. El caso Ayotzinapa es la acumulación de crímenes de lesa humanidad ocurridos en Guerrero y en el resto del país en los últimos 50 años [...] En el siglo XX la masacre del 68 significó el punto de inflexión de las luchas sociales del México moderno. El caso Ayotzinapa es ya el punto de inflexión del joven siglo XXI.<sup>7</sup>

En los días previos se habían publicado numerosos textos con los mismos motivos. *La Crónica* dio noticia de una conferencia de Juan Villoro: “Ayotzinapa y Tlatelolco, casos emblemáticos por saldar: Juan Villoro”; según el texto, en su conferencia (“1968: el pasado de una ilusión”) Villoro “resaltó la importancia de relacionar las deudas pendientes del pasado con las más recientes, como la de Ayotzinapa, porque se trata ‘y hay que recordarlo siempre, de casos emblemáticos’”.<sup>8</sup> En una entrevista para la Agencia EFE, Elena Po-

niatowska puso la masacre de Iguala en el mismo contexto: “Es muchísimo peor que el 68 porque fueron 43 jóvenes normalistas que desaparecieron en una noche y no hubo después ninguna respuesta del gobierno.”<sup>9</sup> La asociación de los dos episodios es un lugar común, que no necesita ninguna explicación: nos interesa entender cómo sucede eso.<sup>10</sup>

Anotemos de paso que un año más tarde, en la manifestación del 2 de octubre de 2019, la identificación de los dos acontecimientos era una convención aceptada de manera natural. En el templete de los oradores, al terminar la marcha, hubo representantes del Comité del 68 y de los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que estuvieron también en la primera fila.<sup>11</sup> Ese mismo día, en entrevista para *El Universal*, Ignacio Carrillo Prieto identificaba también los dos acontecimientos como expresiones de un mismo fenómeno: “¿Cómo vamos a ir a Ayotzinapa sin cerrar 68? ¿Cómo vamos a ir a Ayotzinapa sin entender el permiso que se dio para matar, con la impunidad de los delincuentes?”<sup>12</sup> Y desde Polonia, Maciek Wisniewski escribía para *La Jornada*: “¿De veras hay quienes piensan que no se puede trazar una línea directa entre Tlatelolco (1968) —la masacre del PRI-nacionalista— e Iguala (2014) —la masacre del PRI-neoliberal— [...]?”<sup>13</sup> Días más tarde hubo una especie de consagración oficial de la identidad entre los dos acontecimientos, en la Cámara de Diputados, en un foro convocado para proponer la reforma del artículo 21 de la Constitución (para reconocer la jurisdicción de la Corte Penal Internacional) con el título Foro por la Paz: “Nunca más Tlatelolco, nunca más Iguala”.<sup>14</sup>

Acaso conviene repetirlo: no tenemos nada nuevo que decir sobre lo que sucedió aquella tarde, aquella noche, en Iguala. No nos hacemos cargo de establecer los hechos, por-

que no podemos, ni tenemos una interpretación concreta de los detalles. Conocemos las tres versiones completas que existen: la de la Procuraduría General de la República (PGR), la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) y la de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), y conocemos también numerosas versiones periodísticas, y entre ellas hay discrepancias que en algunos aspectos son muy notables. Para nuestro propósito es innecesario escoger entre ellas. Es claro que algunas de las versiones son más razonables, más verosímiles, están mejor documentadas, y hay algunas que carecen de todo fundamento, y a veces será necesario llamar la atención sobre eso. Pero es irrelevante para nuestro argumento que fuese verdad o mentira lo que se dijo, porque lo que nos interesa es que se haya dicho —y que se haya dicho en esos términos. Nos interesa el modo en que la masacre apareció en los medios, el modo en que se habló de ella, el proceso por el cual adquirió el significado que conocemos, y que la identifica con la masacre de Tlatelolco.

Aclaremos también de entrada que éste no es un estudio de opinión. No podemos saber si una versión en particular es admitida por la mayoría de la población, no sabemos qué porcentaje de gente piensa una cosa u otra. En general, las encuestas suelen decir que la gente desconfía de las autoridades, desconfía mucho de la PGR, duda de la versión oficial en éste como en casi cualquier otro asunto. Pero no es eso lo que nos preocupa. No el peso de ninguna opinión en particular, sino el modo como se forman, el lenguaje en que adquieren sentido. Es claro que ese clima de opinión de, digamos, desconfianza difusa es propicio para determinada elaboración cultural de los hechos —tratamos de entender cómo sucede eso. El fundamento es algo más y me-

nos que una opinión, un clima, es decir, una predisposición generalizada, eso sugieren las encuestas. Desconfianza difusa, porque no depende de ninguna información alternativa, no se refiere a nada concreto: sencillamente, las autoridades no son confiables.

En cualquier caso, lo importante es que la identificación de Ayotzinapa y Tlatelolco es lo bastante significativa para un grupo apreciable de la población, y en general no parece absurda, no necesita mayores explicaciones, de modo que sirve de referencia para una caricatura política, por ejemplo, para el título de un libro o para las mantas en una manifestación de protesta, donde bastan los números: 68, 43. La asociación dice que en Iguala hubo una masacre de estudiantes perpetrada por el Estado, igual que en Tlatelolco, y por ese motivo forma parte de una larga historia represiva, que se cuenta entre los crímenes del régimen.

Un acontecimiento, en el sentido que queremos darle a la palabra, es un suceso significativo, que marca una diferencia: un acontecimiento es un episodio memorable, digno de ser recordado y susceptible de ser recordado porque tiene sentido, de modo que no sólo evoca un conjunto concreto de hechos, sino una interpretación de su significado, una idea.<sup>15</sup> En realidad, no hace ninguna falta conocer los hechos para saber lo que significan la batalla de Waterloo, la caída del Muro de Berlín, el *Bloody Sunday* o la noche de Tlatelolco, el Abrazo de Acatempan, la expropiación petrolera. El acontecimiento siempre es producto de una estructura, que es la que le confiere significado y dice qué sucedió, de modo que resulte identificable no en sus detalles, sino en su sentido.<sup>16</sup>

Eso quiere decir que los acontecimientos sólo existen por la actualización de un conjunto de categorías cultura-

les, integradas en una estructura de sentido. Un acontecimiento es siempre un fenómeno complejo en que se articulan el orden cultural, las acciones y los intereses y las estrategias de los actores que participan, y la estructura de la coyuntura, es decir, el sistema de oposiciones mediante el que se puede entender el presente. Y no se puede separar lo que materialmente sucedió del significado que eso tiene para quienes lo interpretan —sea que lo hayan vivido personalmente, o que lo reciban como historia. No es lo mismo padecer una agresión criminal que ser víctima de la represión política, la misma violencia se experimenta de un modo distinto en uno y otro caso. Y son cosas que corresponden a modelos distintos.

En el acontecimiento se sintetiza una trayectoria histórica. Es una situación concreta en la que se despliega una estructura de orden superior, de modo que los hechos son vistos como manifestaciones de entidades significativas, cuyas acciones son trascendentes —y así, esto no es sólo un enfrentamiento entre dos pandillas, esto no es sólo la llegada de unos viajeros, esto no es sólo un asesinato. La singularidad perfectamente prosaica de los actores y los contextos concretos desaparece, subsumida en el significado abstracto que se les atribuye. En su forma más simple, el acontecimiento reproduce un arquetipo: esto que sucede hoy es sólo una versión, una nueva manifestación de lo que ya sucedió. Esto —por ejemplo, que asesinaron a un boxeador jubilado— es una conspiración de los poderosos para mantenerse en el poder. Y en toda sociedad hay relatos que sirven de modelo para explicar las cosas.

La historia se proyecta en el suceso y lo transforma, lo convierte en acontecimiento, que por eso tiene sentido, y tiene consecuencias. Así, Ayotzinapa como análogo de Tla-

telolco se convierte en el episodio emblemático para juzgar al gobierno: no es otro episodio de violencia, sino un nuevo episodio de la historia patria —una reiteración de los anteriores.

En uno de sus textos, Marshall Sahlins describe la mecánica de esa elaboración como un proceso que sigue tres pasos.<sup>17</sup> En un primer momento, algunos individuos son investidos con categorías culturales que los convierten en personajes representativos; es lo que llama la “instanciación”: los individuos aparecen como representantes de un linaje, una nación, un credo, una idea. En un segundo momento están los hechos, las acciones concretas de esos individuos representativos, el episodio en que agreden, son agredidos, abrazan, saludan, destruyen, lo que sea. Y en un tercer momento se produce la “totalización” de las consecuencias de lo que ha sucedido: el hecho concreto es reincorporado en el sistema cuando se atribuye al incidente particular un significado general, reconocible, y se convierte en acontecimiento. Sin embargo, advierte Sahlins, no deben entenderse estos momentos como una secuencia cronológica, sino como componentes de un proceso complejo, cuya distinción es útil analíticamente.

Los acontecimientos normalmente reflejan la estructura cultural en la que adquieren sentido: sus consecuencias son asimiladas e interpretadas dentro del orden.<sup>18</sup> Pero también pueden modificarlo. Las categorías del orden cultural establecen supuestos de comportamiento, dicen lo que se puede esperar de cada uno de los actores y de cada situación. Y puede suceder que la realidad no se acomode a esos supuestos, que los actores representativos no se comporten como deberían haberse comportado, y que el acontecimiento transforme el orden cultural y se vuelva, en pa-

labras de Sahlins, histórico.<sup>19</sup> Estamos en la idea de que la masacre de Tlatelolco fue un acontecimiento así: confirmó en sus rasgos básicos la estructura cultural del régimen revolucionario, y al mismo tiempo transformó de manera definitiva sus implicaciones.<sup>20</sup> Pero de eso hablaremos un poco más adelante.

En resumen, el significado de un acontecimiento no es un dato, no es indiscutible, porque depende de las categorías culturales con las que se elabora. Y eso es un asunto político. Con esto llegamos a lo que nos interesa: la masacre de Iguala se construyó en el espacio público como análogo de Tlatelolco, pero eso no es un dato, sino un hecho político.

## 2. El transcurso del tiempo

El acontecimiento no aparece de inmediato como tal. Es una construcción cultural, un producto colectivo, que no depende de la imaginación de un individuo, sino de una conversación en que se actualiza el repertorio de significados con el que se puede interpretar. El acontecimiento cristaliza con el tiempo.

En el caso concreto de Iguala, en los primeros días no está claro de qué se trata ni qué significa. Los protagonistas no son sujetos representativos, con un peso simbólico propio, no ocupan un lugar que confiera a sus acciones un efecto sistémico: ni los normalistas, ni los policías, ni el alcalde, ni los asesinos.<sup>1</sup> Es un episodio de violencia extrema, pero muy similar a otros varios de los años anteriores, asimilados sin que hubiese duda al relato de la lucha contra el crimen organizado. Los periódicos de los días siguientes, por ejemplo, resaltan sobre todo los muertos, el enfrentamiento, la balacera.<sup>2</sup> Es decir, en principio no había nada que ofreciese una clave de interpretación indiscutible, una explicación palmaria. La imagen de un acto de violencia del Estado, y más tarde de un acto de violencia con un significado político, tal como aparece en las manifestaciones de 2018, cristaliza a partir de una serie de hechos cuyo sentido se construye progresivamente.

En un primer momento, cuando la información es todavía muy confusa, cuando aún no está claro ni el número de víctimas ni lo que ha sucedido esa tarde, se señala a la poli-

cía de Iguala como responsable de la masacre,<sup>3</sup> y la indignación se dirige hacia las autoridades locales. La versión que circula en los medios en esos días es que los normalistas se manifestaban contra el presidente municipal y que pretendían boicotear un acto público de su esposa (que aspiraba a ser también presidente municipal).<sup>4</sup> Desde el primer momento escandaliza, esto es una conjetura nuestra, escandaliza la desproporción, la frivolidad criminal de las autoridades que persiguen, asesinan a unos manifestantes para que no interrumpen su fiesta. Esa asociación entre la fiesta y la muerte, el contraste dramático entre las personas que están siendo asesinadas mientras los culpables siguen bailando, imprime un carácter monstruoso a los sucesos desde el principio.

Conforme pasan los días, el énfasis de los reportajes se desplaza hacia los desaparecidos. La diferencia más notable con respecto a todas las demás masacres de los años anteriores es que no se hayan encontrado los cadáveres. En todos los otros casos, o casi todos, la noticia era la aparición de los cuerpos. La mayoría de las veces no se publicaban ni siquiera los nombres, si acaso se llegaban a conocer; en la prensa no había nada salvo indicaciones imprecisas que asociaban a las víctimas con una banda u otra; pero estaban los cadáveres, de modo que eran asuntos cerrados, criminales muertos por criminales, aunque quedasen la mayoría de las veces sin una verdadera explicación. En Iguala, los jóvenes estaban desaparecidos, y verdaderamente en los primeros días, en las primeras semanas, nadie tenía ni idea de lo que había sido de ellos. Eso añadió un dramatismo, una ansiedad particular y continua a las noticias, porque había la expectativa de encontrarlos con vida. En consecuencia, aunque no resultaban inmediatamente comprensibles, los

sucesos en Iguala pudieron adquirir un peso extraordinario en los medios.

En esas circunstancias se produce el primer episodio en la serie que va a construir el acontecimiento: la atracción del caso por parte de las autoridades federales,<sup>5</sup> y a renglón seguido la implicación directa, personal, del procurador general de la república, Jesús Murillo Karam. Ese hecho, y la atención que le prestan los medios, saca el incidente del contexto local y lo pone definitivamente en la esfera de discusión nacional. A partir de entonces la atención está puesta en las autoridades federales. La detención del alcalde de Iguala, de su jefe de policía, y la renuncia del gobernador de Guerrero poco después, tienen relativamente poca importancia, y más bien tienen el efecto de concentrar aún más la atención sobre el gobierno federal.

La participación directa del procurador general hace que se le asocie no sólo con la investigación, sino fundamentalmente con el crimen.<sup>6</sup> Eso significa que para la opinión pública desaparecen las mediaciones locales, y el episodio se convierte en un acontecimiento nacional. Poca gente, aparte de los directamente interesados, podría tener una opinión formada sobre el sistema político de Iguala, sobre las formas de representación política en Guerrero, o las relaciones del PRD con la clase política del estado, pero cualquiera puede tener una opinión sobre el presidente de la república. Iguala como suceso de Guerrero es ininteligible fuera de la esfera de discusión local; Iguala como acontecimiento del ámbito nacional puede entenderse de inmediato —y puede adquirir valor simbólico.

El 7 de noviembre, en el curso de una rueda de prensa, el procurador general Murillo Karam les reprocha a los periodistas su insistencia en preguntas que ya le han hecho, y

que ponen en duda sus investigaciones.<sup>8</sup> El exabrupto, reducido a la frase “Ya me cansé”, se convierte en indicador del ánimo del gobierno, de su actitud hacia el caso. Las caricaturas de los periódicos insisten en ello abundantemente. Se hace que la frase signifique “me da flojera”, que viene a decir que la procuraduría ya no quiere continuar con la investigación por pereza —que por supuesto implica indiferencia.

El siguiente episodio, igualmente importante, es la convocatoria de las primeras manifestaciones de protesta en todo el país, en noviembre de 2014, que culminan con una marcha en la capital el 20 de noviembre, aniversario de la Revolución. Son importantes en sí mismas, por la extraordinaria capacidad de convocatoria que tiene el motivo de las marchas, por la intensidad afectiva que se manifiesta en todas ellas, que contribuye a cargar emotivamente el suceso, pero sobre todo porque allí se articula por primera vez la denuncia en los términos que van a configurar el acontecimiento: “Fue el Estado.”<sup>9</sup>

Para entonces están ya detenidos, y sometidos a proceso, más de 20 agentes de la policía municipal de Iguala, y hay orden de captura contra el presidente municipal José Luis Abarca.<sup>10</sup> En ese contexto, señalar al Estado podría significar que el crimen fue obra del orden institucional de Iguala, como indican de manera explícita las investigaciones de la PGR; pero la frase se emplea para implicar igualmente a las autoridades federales. La ambigüedad de la palabra *Estado*<sup>11</sup> admite que se entienda en más de un sentido, y en la práctica sirve para producir un desplazamiento análogo a la atracción jurídica del caso por la PGR: el foco de atención se aparta del gobierno municipal y gravita hacia el gobierno federal. A partir de ese momento, la frase “Fue el Estado”

equivale a señalar al presidente de la república, con lo cual el episodio sale de la “guerra contra las drogas”, ya no es consecuencia de un conflicto entre organizaciones criminales, sino un asunto político —y de la política nacional.

Desde ese momento, quien está en el centro de atención es el presidente: como responsable de la investigación, pero poco a poco, por una asociación impensada, cada vez más, como responsable de los hechos. En ese sentido apuntaba Andrés Manuel López Obrador desde fines de octubre: “El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador consideró que el presidente Enrique Peña Nieto ya sabe qué sucedió con los estudiantes de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, pero no le conviene decir la verdad”; y siguió: dijo que “el gobierno le está apostando a que el pueblo de México olvide el horrendo crimen contra los jóvenes, ‘como siempre lo hacen’, sólo que este hecho es un asunto muy grave”.<sup>12</sup> Las frases ponen en funcionamiento el mismo mecanismo que la pregunta de Laureano Gómez. Porque dicen que hay una verdad oculta, que esa verdad oculta resulta amenazadora para el presidente, y por eso se esconde. No hace falta ningún dato que confirme eso, ni siquiera que justifique la sospecha: la acusación busca el refrendo del sentido común haciendo que el suceso forme parte de una serie: es “lo que siempre hacen”. El acontecimiento es una reiteración: es algo único, memorable, y al mismo tiempo es “lo mismo de siempre”.

La imagen moral de las autoridades se acabó de perfilar a principios de diciembre, cuando el presidente Enrique Peña Nieto viajó al estado de Guerrero y leyó un discurso con el que intentaba llamar a la unidad. Dijo que los hechos del 26 de septiembre marcaban “un hito”, que obligaban “a una revisión introspectiva de por qué ocurrieron

estos hechos, que no deben repetirse”, y pidió a la sociedad que se comprometiera “para que vayamos hacia delante y podamos superar este momento de dolor”.<sup>13</sup> En las redes sociales se modificó el sentido de la frase, de modo que quedó convertida en muestra de insensibilidad y desprecio: “¡Ya supérenlo!” Por supuesto, es una interpretación malintencionada, partidista, pero hizo fortuna. Nos interesa subrayar el fondo cultural en que se apoya, la imagen de un presidente ajeno, distante, indiferente, que encuentra ridículo el dolor de la gente.

Ese mismo mes resultaría crítico para la credibilidad de la investigación de la PGR. La segunda semana de diciembre el laboratorio austriaco al que habían sido enviados los restos descubiertos durante las indagaciones confirmó que uno de ellos correspondía a Alexander Mora, uno de los 43 normalistas desaparecidos. El hallazgo fue inmediatamente puesto en tela de juicio por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que había colaborado con la procuraduría en las pesquisas. En un comunicado sucinto, el EAAF explicó que “no estuvo presente en el momento en que buzos y peritos de PGR recuperaron dicha bolsa ni participó en el hallazgo de dicho fragmento”.<sup>14</sup> A partir de entonces, la que tendría que haber sido la prueba científica más importante de todo el caso estuvo siempre teñida por la duda y la sospecha, no servía para confirmar la versión oficial, sino para desacreditarla.

Unos cuantos días después, a este episodio se añadió otro, también de índole científica. Dos físicos de la UNAM y la UAM, Jorge Montemayor Aldrete y Pablo Ugalde Vélez, presentaron un documento en que, en sus propios términos, desmentían la versión de la PGR sobre el caso.<sup>15</sup> Su análisis se refería exclusivamente a la posibilidad de que hu-

biesen sido incinerados los 43 normalistas en el basurero municipal de Cocula, como indicaba la investigación oficial, y concluía que era imposible.<sup>16</sup> La prensa lo reportó como una refutación consumada a la teoría de la procuraduría sobre el destino último de los normalistas.<sup>17</sup>

A partir de entonces están completos los rasgos mínimos del acontecimiento: la masacre es un asunto nacional, responsabilidad directa del presidente de la república, y tiene una significación inmediatamente política. La investigación de la PGR es mentira. En adelante, sólo se confirman, o se acentúan esos rasgos.

El 27 de enero de 2015, en rueda de prensa, el procurador Murillo Karam dio una larga explicación para salir al paso de las especulaciones que circulaban en los medios; hizo una reconstrucción de los hechos a partir de testimonios, confesiones, peritajes, y concluyó: “Ésta es la verdad histórica de los hechos, basada en las pruebas aportadas por la ciencia, como se muestra en el expediente, y que ha permitido ejercitar acción penal contra los 99 involucrados que han sido detenidos hasta hoy.”<sup>18</sup> Era una manera particularmente enfática de decir que eso era lo que podía demostrarse. Ese énfasis hizo que la declaración resultase vulnerable: era una afirmación demasiado categórica, que de inmediato se puso en duda precisamente por eso, porque se entendió como el intento de imponer una versión, y descartar cualquier otra interpretación posible.<sup>19</sup>

Así que la explicación oficial vino a quedar como una versión más, vista con la desconfianza con que habitualmente se recibe cualquier comunicación del gobierno; pero además hubo a partir de ese momento una etiqueta para las explicaciones de las autoridades: la “verdad histórica”, que adquirió una connotación obviamente sarcástica —en

los medios, decir que algo era la “verdad histórica” (siempre entre comillas) significaba decir que era mentira. El procurador Murillo Karam dejó su cargo el mes siguiente.<sup>20</sup>

De ahí en adelante, conforme se hacen públicos detalles de lo que pasó en Iguala, aparecen versiones, la mayoría puramente especulativas, sin fuentes ni datos contrastables, que subrayan sobre todo la complicidad de la clase política, más allá del alcalde de Iguala; en las primeras semanas se apunta al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, al senador Lázaro Mazón, y progresivamente el episodio sale del contexto del crimen organizado, se lleva a niveles superiores, y se convierte en un hecho político.

Otros dos episodios, dos iniciativas del gobierno tienen importancia para la fabricación del acontecimiento: la decisión de hacer público el expediente completo de la investigación de la PGR y la invitación al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes para que revisara el caso. Las dos son exhibiciones de transparencia con las que se quiere dar legitimidad a la explicación oficial, y que dicen que las autoridades federales se sentían muy seguras de las conclusiones de su investigación. Las dos resultaron contraproducentes por muchas razones, pero para empezar porque es muy difícil presentar una imagen clara de un proceso de esa complejidad, y desde luego siempre se pueden oponer reparos, siempre habrá errores, deslices, interpretaciones discutibles. En un clima de opinión como el que se había generado en torno al caso, cualquier duda era grave, y todas ellas se convirtieron en argumentos políticos para descalificar el conjunto del expediente, la “verdad histórica”.

En octubre de 2015, la PGR hizo público un primer tramo del expediente de Iguala: 85 tomos con 13 anexos, más

de 50 mil páginas.<sup>21</sup> Seis meses después publicó un segundo tramo, otros 69 tomos con 14 anexos, y dos meses más tarde, un tercero, con 47 tomos (el expediente seguiría aumentando en los años siguientes, hasta sumar más de 400 tomos). Eran decenas de miles de páginas de escritura farragosa, reiterativa, en el lenguaje técnico de los funcionarios del ministerio público, es decir, algo no muy a propósito para inspirar confianza. La prensa aprovechó sobre todo los aspectos más dramáticos de las declaraciones de los acusados, y desde luego las inconsistencias, los defectos que no podía más que haber; por ejemplo, en la primera entrega, en el tomo 82, un peritaje que dice que uno de los testigos pudo haber sido víctima de torturas.<sup>22</sup>

En el ambiente de suspicacia que había, la transparencia misma resultaba sospechosa: había la convicción de que se ocultaba algo; de hecho, había la convicción de que se ocultaba lo importante, de modo que los cientos de tomos de la investigación eran irrelevantes. O peor, como en el caso del asesinato de *Mamatoco*, se entendía que la investigación en sí misma era una pantalla para ocultar lo que verdaderamente había sucedido.

La invitación al GIEI también resultó contraproducente para el gobierno: como era previsible, el informe que presentaron los expertos en septiembre de 2015 arrojó algunas dudas sobre la versión oficial: cabos sueltos, inconsistencias, interrogatorios pendientes, denuncias de tortura. La polémica entre el grupo y las autoridades contribuyó a aumentar su significación. Los peritajes contradictorios sobre el fuego en el basurero de Cocula fueron especialmente importantes, porque no se habían encontrado los cadáveres;<sup>23</sup> el informe del GIEI apuntaba en sentido contrario a las conclusiones de la PGR, y resultaba verosímil porque se apoya-

ba sobre el informe anterior de Montemayor y Ugalde, y se hacía eco de las dudas que habían planteado.

En lo fundamental, en el relato de los hechos el informe del GIEI coincide con la versión de la PGR, no sugiere una interpretación diferente —salvo en lo que se refiere a la incineración en el basurero de Cocula. Dice que algunos testigos han señalado a militares, o antiguos militares o parientes de militares, como colaboradores del grupo delictivo que secuestró a los estudiantes (“obran en el expediente diversas declaraciones ministeriales que hacen referencia a algunos miembros del ejército relacionados en parentesco con líderes del crimen organizado”), y dice que habría que profundizar la investigación en esa dirección.<sup>24</sup> El informe sólo señala que hay dudas, pero, en la interpretación que se hace en los medios, la sospecha de que pudiera haber algún militar cómplice se convierte en una acusación contra el ejército,<sup>25</sup> y el hecho de que fundamentase dudas sobre la versión oficial se tomó como un desmentido, una enmienda a la totalidad, y por lo tanto una legitimación de las demás versiones —o cualquier otra versión. Para que quede claro, el informe abre la posibilidad de que hubiese militares implicados, pero sin sacar el episodio del contexto del crimen organizado.

A lo largo de todo este proceso influyó también la circulación de la noticia fuera del país. En la esfera de discusión internacional, sobre todo para la prensa europea y estadounidense, era incomprensible que pudieran desaparecer 43 estudiantes: sin el contexto de Guerrero, de la sociedad de Iguala, imposible de resumir en una nota de periódico, el hecho resultaba absurdo.<sup>26</sup> En cambio, el término de referencia que podía emplearse para que la historia tuviese sentido era el de las dictaduras latinoamericanas de los años

setenta y ochenta, que hacían desaparecer a sus opositores —es decir, era más creíble la desaparición como hecho político. En todo caso, la versión oficial resulta inverosímil fuera de México, y las agencias de prensa, los principales medios, se hicieron eco de las críticas del GIEI, de las denuncias de la asociación de familiares de los estudiantes, porque señalaban los defectos de la investigación, aunque no pudieran ofrecer una explicación alternativa.<sup>27</sup> Eso significaba que la verdad permanecía oculta, con cuya idea se confirma la sospecha de que hubiese sido un atentado político.<sup>28</sup>

Así, para cuando se conmemoró el primer aniversario de la masacre de Iguala, el acontecimiento ya había cristalizado como expresión de la violencia del Estado contra sus críticos, particularmente contra los jóvenes, con la participación del ejército.



### 3. La cultura antagónica

En el espacio público mexicano cristalizó la masacre de Iguala como reproducción de Tlatelolco, y por eso como un episodio más de una larga cadena represiva, una serie de sucesos emblemáticos por su magnitud —que son los que se repiten en las caricaturas, en las manifestaciones de protesta: Tlatelolco, Acteal, Aguas Blancas, Atenco, Iguala. La comparación de la noche de Iguala con el 2 de octubre fue el bajo continuo sobre el que se desarrollaron las elaboraciones del acontecimiento, y fue así desde muy temprano. Elena Poniatowska, por ejemplo, precisamente en un coloquio sobre el 68 en la Universidad Iberoamericana, hiló sin mucho detalle y sin que hicieran falta mayores explicaciones una serie de actos violentos ocurridos en fechas cercanas a la muerte del activista Raúl Álvarez Garín: “Murió hace unos días. En los días del asesinato de 22 personas en Tlatlaya, y otros 22 muertos en Chihuahua. Muere en el momento en que aparecen cinco normalistas muertos en Ayotzinapa.”<sup>1</sup>

Era 2 de octubre de 2014, es decir, sólo cinco días después de la masacre. Por eso Poniatowska se equivoca respecto al número de muertos y el lugar de los hechos. No podía ser de otro modo: en ese momento todavía no se sabía nada, desde luego nada con seguridad. Por otra parte, la coincidencia cronológica es un factor que facilita la agrupación de masacres que no tienen otra conexión entre sí. Cada 2 de octubre se trata de mantener viva la memoria, y hacerla relevante

para la sociedad mexicana de ese momento; por eso se buscan paralelismos, similitudes, se evocan los sucesos cercanos para acercar los del 68, y a la vez, la evocación de Tlatelolco como término de referencia sirve para dramatizar los acontecimientos del día.

Al día siguiente, el 3 de octubre de 2014, apareció en la prensa nacional la primera comparación explícita de los hechos de Iguala con la matanza de Tlatelolco, en un artículo de *La Jornada*. El texto, firmado por Abel Barrera, dice que “entre un hecho y el otro pueden trazarse paralelos”, y señala la impunidad de delitos violentos de fechas anteriores, el hecho de la desaparición, y la indiferencia de las autoridades.<sup>2</sup> Es una analogía muy laxa (atribuye el crimen a “la delincuencia organizada”), basada sobre todo en el hecho que sugiere de inmediato la conexión con Tlatelolco: las víctimas son estudiantes.

Unos cuantos días después, en la Feria Internacional del Libro en el Zócalo, Lorenzo Meyer describió los sucesos de Iguala como “un pequeño 68 más brutal que el 68”<sup>3</sup> y poco después José Miguel Vivanco, director para América Latina de Human Rights Watch, se refirió al tema en los siguientes términos: “No conozco de un hecho similar al que estamos lamentando en Iguala. Creo que tenemos que remontarnos, lamentablemente, a Tlatelolco.”<sup>4</sup> El 17 de octubre, en una cápsula audiovisual, Sergio Aguayo se propuso comparar las dos masacres, y señaló que “ambos casos fueron actos de barbarie criminal en los cuales estuvieron involucrados agentes del Estado”.<sup>5</sup> En resumidas cuentas, para mediados de octubre, es decir, unas cuantas semanas después de los sucesos, la equiparación entre ambos acontecimientos ya estaba completamente asentada: aquellos estudiantes, estos estudiantes.

Más que la sorprendente velocidad con que se cimentó la comparación entre las dos masacres, llama la atención la naturalidad con que ocurrió, el hecho de que no fuese necesaria ninguna justificación ni conocimiento preciso de los hechos. En otras palabras, lo llamativo es que el contexto en que se elaboró la asociación la hacía parecer obvia, de sentido común. Ese contexto es una de las claves. Para decirlo brevemente, el acontecimiento de Iguala como análogo de Tlatelolco tiene sentido sólo en un espacio que queremos llamar, sin mayor pretensión conceptual, la "cultura antagónica".

Empleamos la expresión sobre todo por comodidad. Llamamos "cultura antagónica" a un sistema de signos, prejuicios, valoraciones, sobreentendidos, automatismos del sentido común formado durante el régimen revolucionario, una veta de discurso derivada del relato de la historia patria tal como se enseñó durante el siglo XX. No es la cultura política de México, sino una de las posibilidades en el repertorio cultural mexicano. En las décadas del cambio de siglo, durante los últimos sexenios de hegemonía priista, era uno de los lenguajes básicos de la oposición, asociado convencionalmente a la izquierda, pero que en estricto sentido no es de izquierda, porque no representa ninguna idea política sustantiva. El supuesto implícito indispensable de la cultura antagónica es la fundamental ilegitimidad del gobierno y, correlativamente, la fundamental legitimidad de cualquier forma de protesta o resistencia —llegado el caso, incluso la rebelión.

La cultura antagónica es un conjunto de automatismos favorable de antemano, por sistema, a la oposición, y que inspira una actitud de desconfianza hacia cualquier autoridad. Es una forma imprecisa de antiautoritarismo, una

predisposición a favor de la protesta, y un registro moral con el que se puede contar, que hace que cualquier público sea inmediatamente receptivo cuando se critica al gobierno.

Para nuestro argumento no tiene importancia qué porcentaje de gente participa o participaba de esa actitud, ni en qué momentos concretos. Nos interesa la formación de ese lenguaje, ese conjunto de entendidos, y el hecho de que fuese lo bastante generalizado, porque los elementos de la cultura antagónica son familiares para cualquiera en México. Las encuestas sobre valores confirman constantemente, desde hace mucho, el descrédito de la autoridad pública, las instituciones representativas, los partidos, el gobierno, sobre todo en comparación con otras formas de autoridad, como la iglesia católica o la familia. Sin duda hay muchos motivos para eso, la inclinación viene de lejos. A principios de los años setenta, Rafael Segovia había visto un despunte de esa disposición en las pautas de socialización política de los niños mexicanos:

La ley y el orden, sin embargo, no se les antoja una sola y la misma cosa. La obediencia a la ley, someterse a ella en cualquier caso y en cualquier circunstancia, tiene un llamado decisivo en la primaria: las dos terceras partes de quienes se encuentran en primaria están por obedecerla siempre. Esta actitud de sumisión a la legalidad va perdiendo rápidamente terreno y al llegar a 3º de secundaria menos de la mitad comparte esta actitud, mientras los demás —algo más de la mitad— manifiestan ya sean actitudes de resistencia (desobedecerla si es injusta) ya actitudes reveladoras de efectividad política (modificar la ley).<sup>6</sup>

Ahora bien. Si miramos el repertorio simbólico con que se manifiesta la cultura antagónica: en caricaturas políticas, pintas, consignas y mantas en las manifestaciones, en el lenguaje de la protesta, lo más significativo es que se trata de exactamente los mismos personajes, los mismos héroes, los mismos lemas y los mismos motivos de los discursos oficiales. No es casualidad.

Los mecanismos básicos de la cultura antagónica tienen su origen en la retórica del régimen revolucionario, y en particular en el esquema de la historia patria que le servía como recurso de legitimación, que en lo fundamental era la historia de las luchas del pueblo contra las formas injustas de la autoridad. Allí los héroes, los personajes representativos, aparecen siempre luchando contra un gobierno impuesto, contra un gobierno injusto: contra el dominio español, contra la dictadura de Santa Anna, contra el gobierno de Maximiliano, contra la dictadura de Porfirio Díaz. Y lo que ese relato encuentra encomiable es la lucha, mucho más que la victoria. Normalmente, se aprecia sobre todo a los héroes derrotados, a los que fueron víctimas del poder: Hidalgo, Morelos, Madero, Villa, Zapata ("Zapata vive, la lucha sigue"), mucho más que a los gobernantes; en comparación, Guadalupe Victoria es casi insignificante, igual que Valentín Gómez Farías o Ignacio Comonfort, y siendo héroes, tienen un lugar mucho más ambiguo Carranza, Obregón o Calles.

El caso más interesante, porque es una especie de bisagra, y sin duda el símbolo máximo, es el de Juárez: el que se recuerda, el que se celebra es el que lucha contra Santa Anna, el que lucha contra los conservadores con motivo de las Leyes de Reforma, el que lucha contra los franceses, pero no el gobernador de Oaxaca, no el presidente de la Su-

prema Corte, no el creador de los rurales ni el de las leyes contra bandidos, no el Juárez gobernante —en todo caso, no son sus virtudes de gobierno las que se consideran admirables.<sup>7</sup>

Pero ése es sólo un fondo casi decorativo, que ofrece un léxico, un sistema de referencias y adjetivos, estereotipos del heroísmo, de la iniquidad o de la traición.

Lo importante es que los gobiernos revolucionarios eran parte de esa historia. La moraleja central de la historia patria así contada es que el gobierno es con frecuencia abusivo, y que el pueblo tiene que rebelarse, y luchar contra él. Un efecto bastante obvio, pero que puede pasar inadvertido, de ese recelo hacia la autoridad es que la sociedad aparece como buena, virtuosa, porque es un reflejo invertido del Estado, y nunca se manifiesta tan claramente su virtud como en el momento en que se rebela contra él.

Anotemos de paso que la estructura del relato de la historia patria no es original. La mitología nacional de las sociedades occidentales, como dice José Álvarez Junco, tiene con frecuencia esa forma de tríada: Paraíso-Caída-Redención, y en los nacionalismos románticos el pueblo suele ser una figura "crística", el justo sufriente, portador de la pureza, de la virtud, que "sufre en su propia carne la indefensión y la esclavitud [y por eso] legítima para ejercer la violencia", y no está contaminada por la malignidad de los poderosos, "no es de este mundo".<sup>8</sup>

Pero volvamos al argumento. Esa historia patria servía como recurso de legitimación porque los gobiernos de la revolución eran el pueblo en armas, porque la acción de gobernar podía representarse como lucha contra los poderosos: la revolución institucionalizada. Otra vez, hablando de los niños de los setenta, dice Segovia: "Además de la omni-

presencia del mito revolucionario, su aceptación casi universal no deja de sorprender [...]. Otro punto interesante, claramente conectado con el anterior, es la idea de la Revolución como fenómeno histórico abierto hacia el futuro, de infinita vigencia, perfectible e insustituible.<sup>9</sup> Es claro que esa legitimación historicista, por llamarla de algún modo, pasó progresivamente a un segundo plano, conforme avanzaba la institucionalización del régimen, y se hacía posible una legitimidad apoyada en la economía. Nunca se abandonó del todo.

Desde temprano, desde los años cincuenta por lo menos, hay en la cultura popular una actitud por lo menos de reserva, si no de desconfianza. La retórica revolucionaria, siempre alusiva, ambigua, empezó a sonar a hueco porque era evidente que los gobiernos de la revolución eran gobierno, pero no en absoluto revolucionarios. Es el mundo de simulación que aparece en las caricaturas de Abel Quezada, por ejemplo, o de Rius, el de las novelas de Luis Spota o Jorge Ibarguengoitia. Para lo que nos interesa ahora, lo importante es que no se desacredita el discurso, sino la práctica, no se abandona el relato de la historia patria ni se cambia de héroes: lo que se reprocha a los gobiernos es que hayan abandonado o traicionado los ideales de la Revolución.<sup>10</sup> Es significativo que la imagen de Porfirio Díaz sea todavía uno de los motivos principales en los conflictos simbólicos, y que *porfirista* sirva todavía popularmente como descalificación: no se pone en duda el peso moral de la historia, la idea del curso ascendente de la historia mediante la insurgencia ni la legitimidad de quienes se rebelaron contra los gobiernos injustos, tan sólo se cambia el reparto de papeles de modo que el gobierno ya no es la Revolución, sino el Porfiriato —el arquetipo de los gobiernos ilegítimos.



## 4. Tlatelolco como modelo

Nos interesa ese pequeño rodeo porque el momento clave en la evolución de la cultura antagónica es precisamente la masacre de Tlatelolco, aunque el cambio, en lo sustantivo, había comenzado mucho antes. En el lenguaje oficial hay un cambio de registro muy notable en los años sesenta. Se puede mostrar en dos trazos.

En su último informe de gobierno, el 1 de septiembre de 1964, el presidente López Mateos comienza evocando “los caminos de la historia”, las “luchas seculares” del pueblo, y sentencia: “El pueblo halló en su revolución social —la Revolución mexicana—, con la síntesis de la Independencia y la Reforma, su camino, el claro camino de su quehacer”, y termina, en el último párrafo, acogiéndose a “la doctrina de nuestra Revolución”.<sup>1</sup> *Revolución* o *revolucionario* aparecen en el texto 25 veces. En su discurso de toma de posesión, el 1 de diciembre de 1964, el presidente Gustavo Díaz Ordaz comienza haciendo elogio de la continuidad, que significa que cada presidente “deja puestas las bases para continuar la siguiente etapa”, llama a conservar “lo que con el esfuerzo de tantos años hemos conseguido”, y sobre todo insiste en el valor de la democracia, las leyes, las instituciones, y en la necesidad de “conservar la estabilidad económica y la tranquilidad política”. La palabra *revolución* aparece sólo tres veces, y la mención más sustantiva es como sigue: “Por la vía de la Revolución mexicana llegamos al objetivo del desarrollo económico y este origen nos marca con toda claridad los

fines que con él perseguimos y los medios a que podemos recurrir.”<sup>2</sup> Son muchos los factores que explican el cambio de tono, pero el sentido es evidente.

En ese contexto surge el movimiento estudiantil, y la masacre del 2 de octubre. Hemos dicho que la construcción del acontecimiento “Ayotzinapa” consiste en asimilarlo a la masacre de Tlatelolco, pero conviene ser más precisos: consiste en asimilarlo al acontecimiento “Tlatelolco”, es decir, a una construcción tan elaborada culturalmente como la primera (si no es que más). No vamos a explorar en profundidad esa elaboración, pero nos interesa identificar su contorno en términos generales, sus rasgos básicos, porque es lo que sirvió para configurar la cultura antagónica.

El reparto de papeles es breve y conocido. No hace falta dar muchas vueltas para explicar cómo se construye la representación cultural del Estado. La misma estructura piramidal del gobierno favorece que se identifique a quienes están en la cúspide como símbolos de la institución como totalidad, y más aún en un sistema político donde el ejecutivo concentraba enormes prerrogativas —o, dicho más exactamente, donde se estaba en la creencia de que el presidente lo podía todo. Es decir, que en el centro está siempre la figura de Gustavo Díaz Ordaz: los granaderos, el ejército o cualquier otra institución pueden aparecer como manifestaciones de la voluntad del Estado, que no es sino la voluntad del Presidente —así, con mayúscula.

El caso de los estudiantes es más ambiguo. Hoy es indisputable que los jóvenes tienen su sitio entre los héroes que se oponen al mal gobierno, sobre todo después (y a causa) de la masacre de Tlatelolco.<sup>3</sup> Pero es difícil ver en el arquetipo del estudiante una encarnación del Pueblo, con mayúscula, y era más difícil todavía a fines de los años sesenta.

Aunque la fe en la educación como fuerza transformadora y la posibilidad de movilidad social estuviesen vertidas en la figura del estudiante, no poseía la carga simbólica de, por ejemplo, el campesino, históricamente agraviado, redimido por la Revolución.

Muchos de los testimonios, muchos estudios del movimiento estudiantil se esfuerzan reiteradamente por demostrar que el movimiento era popular, que los jóvenes, aunque distintos, eran esencialmente afines a los trabajadores. Y ése es el punto: la identificación requiere esfuerzo, exige una justificación. Ramón Ramírez, en *El movimiento estudiantil de México*, señala que la abrumadora mayoría de los alumnos de la Universidad Nacional proviene de lo que él llama “la pequeña, mediana o alta burguesía”,<sup>4</sup> pero dedica las siguientes páginas a explicar que, a pesar de ello,

las relaciones entre el estudiantado y la clase obrera no pueden ser planteadas en términos de rivalidad o de subordinación, sino en planos colaterales en los que el movimiento obrero y el movimiento estudiantil sean parte de una sola unidad, y, dicho sea de paso, no contradictoria.<sup>5</sup>

Las observaciones de los dirigentes del movimiento siguen la misma veta. Roberta Avendaño afirma que “junto con los estudiantes una parte muy importante del pueblo se lanza a apoyar el movimiento”;<sup>6</sup> Sócrates Campos Lemus puede ver la distancia, se lamenta de ella: “nuestras madres fueron grandes solidarias y no así los obreros y los campesinos, porque nosotros no teníamos un planteamiento que los atrajera”.<sup>7</sup>

En el testimonio familiar del 68 recogido por Greco Hernández Ramírez, su hermano Cutberto, que estuvo en Tla-

telolco el 2 de octubre, sostiene que el movimiento “también fue social, no sólo estudiantil, pues la gente participó de diferentes maneras [...] aportaba a las escuelas papeles, cartulinas, comida y hasta gasolina para que se hicieran las bombas molotov”<sup>8</sup> y que “gran cantidad de gente fue al mitin [el 2 de octubre], mucha de la cual no era estudiante, era pueblo”.<sup>9</sup>

El razonamiento sobrevive hasta hoy, por cierto. En un artículo en la *Revista Mexicana de Sociología*, de la UNAM, como conmemoración del movimiento estudiantil del 68, José Manuel Valenzuela Arce argumenta que “la composición político-ideológica de los actuantes en el movimiento estudiantil-popular de 1968 hizo [...] que buscaran construir lenguajes y discursos comunes con el pueblo”.<sup>10</sup> El supuesto subyacente es obvio: entre los estudiantes y el Pueblo hay una brecha, y para franquearla hace falta un argumento.

Exitoso o no el esfuerzo por identificar al movimiento estudiantil con las protestas de obreros y campesinos, lo que nos importa es que sea necesario hacerlo. Y nos importa porque significa que cuando soldados y manifestantes se concentraron sobre la Plaza de las Tres Culturas aquella noche de 1968, sólo el ejército representaba innegablemente una categoría cultural. Lo que convirtió a los estudiantes en actores con peso simbólico propio e indiscutible, lo que Sahllins llamaría individuos sociohistóricos, fue precisamente lo que sucedió ahí, es decir, el haber sido víctimas de la violencia del Estado.<sup>11</sup>

El haber sido masacrados confiere a los jóvenes un sitio entre los mártires de la historia patria, cuyos actos, por lo tanto, se trascienden a sí mismos, de tal suerte que quienes murieron ahí ya no son meramente unos estudiantes,

sino reencarnaciones del Pueblo agraviado, que es siempre el mismo pueblo. Simultáneamente, se confirma que el Estado ya no es la Revolución en el poder, sino el gobierno tiránico, que es siempre el mismo gobierno. Y más: la violencia que ejerce el gobierno resulta inevitablemente política, porque se trata de reprimir a quienes se manifiestan públicamente, pacíficamente en contra de la autoridad —y de reprimirlos *precisamente* porque protestan, reclaman, critican al Estado. Así, el episodio entero se convierte en una escena simbólica, legible, que se entiende de inmediato; es lo que Sahlins llama instanciación.

Pero el acontecimiento está todavía incompleto. La última fase en la elaboración consistió en elevar los sucesos del 2 de octubre, lo que concretamente hicieron y padecieron aquella tarde esos actores cargados de peso simbólico, a la altura abstracta del orden cultural (lo que Sahlins llamaría totalización). En otras palabras, el significado de la masacre de Tlatelolco no se constriñó a la fecha ni el lugar en que sucedió, se generalizó —como una noche que se expande, subsumiendo en su oscuridad al movimiento estudiantil, al año entero de 1968 y al sistema político mexicano en su totalidad. Y se convirtió así en la caracterización fundamental del país.<sup>12</sup>

Es por ello que los vaivenes y las complejidades de los meses anteriores palidecen frente a la imagen dramática de los muertos sobre la Plaza de Tlatelolco. Las demandas de los estudiantes quedan en segundo plano; lo que importa es que hayan sido aplastadas. La frase emblemática para recordar el 68 lo delata con claridad: lo que “no se olvida” es el 2 de octubre —no el movimiento estudiantil, ni el pliego petitorio, ni ninguna otra cosa.

Muchos de quienes participaron en el movimiento, mu-

chos de quienes lo recuerdan, insisten en eso, en que la masacre asimiló todos los turbulentos meses anteriores, y normalmente lo lamentan. Carlos Monsiváis, por ejemplo, escribe que “el movimiento estudiantil de 68 fue muchas cosas pero hoy parece reducido a la multitud inerme en Tlatelolco”.<sup>13</sup> Sócrates Campos Lemus siente que tiene que aclarar que “el 68 no es el 2 de octubre”.<sup>14</sup> A Marcelino Perelló le preocupa “que se quiera confundir lo que pasó en Tlatelolco con el movimiento: el movimiento no tiene nada que ver con eso”.<sup>15</sup> Y Luis Tomás Cervantes Cabeza de Vaca, con una franqueza muy característica, dice: “Yo no conmemoro el 2 de octubre, que me duele y me encabrona, yo conmemoro los 146 días del movimiento del 68 y así deberíamos hacerlo todos.”<sup>16</sup>

Resulta irónico que esa reducción del movimiento estudiantil al 2 de octubre es precisamente la fuente de su inmensa proyección como acontecimiento. De nuevo Perelló: “Efectivamente el 68 debe gran parte de su persistencia al 2 de octubre, no a su lucha, no a las reivindicaciones, no a los ideales, sino a la muerte, a la represión.”<sup>17</sup> Se sacrifica la singularidad del movimiento para incorporarlo al gran relato nacional, donde los jóvenes estudiantes son una encarnación más del Pueblo reprimido por el Estado. Y con el paso del tiempo, esa interpretación de Tlatelolco se convirtió en juicio histórico asentado, y su carácter como alegoría del país entero pasó a ser de sentido común; o sea, la cristalización de lo que hemos llamado la cultura antagónica.<sup>18</sup>

Un ejemplo. En aquella cápsula audiovisual en que Sergio Aguayo compara las masacres de Tlatelolco e Iguala, señala que “en 1968, murieron, según Kate Doyle, la que ha hecho la investigación más rigurosa, 44 jóvenes”.<sup>19</sup> Bien; es verdad que la investigación de Doyle concluyó que hubo 44

víctimas fatales, como consecuencia de lo sucedido en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, el problema es que no todas eran jóvenes;<sup>20</sup> tampoco, como habría que suponer si no hay otra aclaración, tampoco esos jóvenes eran todos estudiantes: algunos eran profesionistas, otros soldados.<sup>21</sup>

Insistimos: nos interesa llamar la atención no sobre la complejidad de lo que sucedió concretamente esa noche, sino sobre la elaboración cultural a partir de ello. En particular, es revelador que pueda decirse que el 2 de octubre murieron jóvenes, así, sin ninguna otra precisión, y que como cosa de sentido común, intuitivamente se entienda que fueron jóvenes estudiantes, que es lo que en parte pasó aquella tarde. Y es así porque lo que a primera vista podría parecer una simple imprecisión fáctica, confundir las víctimas simbólicas con las reales, es en realidad la consciente participación en cierta interpretación de los sucesos, de un acontecimiento en el cual el Estado mató jóvenes —así, sin mayor precisión.

Acaso sea obvio a estas alturas, pero vale la pena formularlo explícitamente: un sistema de interpretación como el de la cultura antagónica es necesariamente maniqueo, porque impone la lógica de la lucha: de victoria o derrota, de buenos y malos —que son así porque está en su naturaleza serlo. El sistema interpreta la vida pública y en especial los conflictos en términos de víctimas y victimarios, y asigna valor moral a cada uno.

Para empezar, el Estado aparece demonizado, como aparecen Santa Anna o Porfirio Díaz en el relato de la historia patria: no sólo es criminal, sino que lo es de manera consciente, deliberada, porque está movido por intenciones perversas. En el caso del gobierno de Díaz Ordaz en 1968, la

caracterización más frecuente lo asimila a una bestia, a un depredador. A veces se recurre al folclore, como cuando Marcelino Perelló explica los límites de la protesta social diciendo que “no puede uno jalarle los bigotes al tigre indefinidamente sin que acabe por soltar un zarpazo”.<sup>22</sup> Otras veces la representación es más siniestra. Greco Hernández, por ejemplo, escribe que “la tarde y la noche del 2 de octubre de 1968, el Estado mexicano saldría de su cloaca con su faz verdadera para bramar su maldad y descuartizar alevosamente a su prole”.<sup>23</sup> Su hermano Cutberto describe a los soldados en Tlatelolco como “perros de presa que venían en jauría, enloquecidos y sin cadena” y, más adelante, al gobierno todo como “una bestia enorme y con ojos desorbitados, [que] daba zarpazos, y en su festín macabro hería la noche y asesinaba a sus hijos”.<sup>24</sup> Sergio Aguayo considera que el 2 de octubre la “Plaza de las Tres Culturas [fue] utilizada en los sacrificios rituales hechos para honrar al Señor Presidente” y que “el régimen se quitó la máscara para exhibir a un gobierno despiadado, capaz de asesinar a sangre fría a opositores desarmados”.<sup>25</sup>

Importa reparar en lo siguiente: se supone que esta faceta bestial, la manifestación más violenta del Estado, es su verdadero rostro. No es trivial porque eso implica lógicamente que todo lo demás es simulación —y por lo tanto sospechoso. La representación dice que la verdadera intención está siempre escondida porque es inconfesable; y en particular insinúa que la represión está siempre a punto de ocurrir, porque está en la naturaleza del Estado, irremediablemente. El resultado es la paradójica situación de que la “verdad” siempre esté oculta, fuera del alcance, y, al mismo tiempo, sea perfectamente sabida. Así, la sospecha se viste de certeza porque llena los vacíos que produce la incer-

tidumbre, de tal modo que la pregunta “¿Quién mató a *Mamatoco*?” se vuelve sensata y pertinente, y además se conoce la respuesta. Volveremos a ello.

Las caricaturas sobre el 68 emplean básicamente ese mismo repertorio. La portada de *La imaginación y el poder* de Jorge Volpi es absolutamente típica: un gorila furioso, con casco militar, exhibiendo los dientes, golpea con la culata del fusil a un joven postrado e inerme —que levanta en la mano un libro. La imagen del soldado como simio es doblemente útil, porque alude simultáneamente a la institución del Estado, específicamente al ejército,<sup>26</sup> y a la apariencia del presidente Díaz Ordaz, que ha venido a quedar convertido en el arquetipo del presidente vil, cruel, cínico.

Pero la imagen del joven también tiene su interés: está en el piso, postrado e inerme. Ya dijimos que el estudiante se convirtió en representante del Pueblo agraviado en Tlatelolco, pero la caricatura revela algo más: es un arquetipo muy concreto. Al invertirse en el reflejo del Estado perverso, el estudiante emerge como mártir, es decir canonizado, reducido al estereotipo positivo, abstracto, de un joven alumno: idealista, inocente, estudioso, trabajador, pacifista, absolutamente ajeno a la violencia —contra la agresión del fusil, levanta un libro.<sup>27</sup> Es una representación que en la mitología patria tiene una resonancia en el martirio de los “Niños Héroe” —niños y por eso inocentes, devueltos a la infancia, despojados de su cualidad militar. Además, como dice Rodrigo Salido, tiene un atractivo adicional: la condición de estudiante es temporal, y por eso puede funcionar como un espejo, todos hemos sido, nuestros hijos son, van a ser estudiantes.

Importa reparar en ello porque hay otro estereotipo del estudiante universitario: desordenado, pendenciero, a ve-

ces agresivamente militante, revoltoso, incluso amenazador, una imagen que puede inspirar miedo.<sup>28</sup> Y estaba presente en el movimiento estudiantil de 1968. Otro hermano de la familia Hernández Ramírez cuenta que, “en la prensa sobre todo, nos trataban de hacer creer que los estudiantes eran vagos, delincuentes, revoltosos y malos, y que nada más andaban echando desmadre, algo que, de hecho, mucha gente común sí creía”.<sup>29</sup> Una carta de Francisco Lanz Duret, director de relaciones públicas de *El Universal*, dirigida al secretario de Gobernación Luis Echeverría, se refería a los incidentes de fines de julio de 1968 básicamente en esos términos: “Me atrevo a asegurar a usted, que desde el principio estuve de acuerdo con las autoridades, cuando pensé que eran agitadores profesionales, vándalos y rateros los que mezclándose entre verdaderos estudiantes, condujeron a éstos a actos completamente indebidos.”<sup>30</sup>

Es un intento de justificar la acción de la policía, por supuesto: si son delincuentes, la intervención de la fuerza pública resulta comprensible. Pero lo que nos interesa es la lógica detrás del argumento, el hecho de que el estudiante y el vándalo sean categorías culturales mutuamente excluyentes. Si un estudiante incurre en actos ilícitos, se convierte en otra cosa (se vuelve “falso”). Puesto en otros términos, un “verdadero estudiante” no sólo no es un criminal, sino que es imposible que lo sea. Y por lo tanto, cualquier intento por describirlo como delincuente —por “criminalizarlo”— es siempre una acusación muy seria, porque no sólo pone en duda su probidad moral, sino que amenaza con despojarlo de su misma esencia, dice que no es estudiante.

Adelantemos un ejemplo. Durante las manifestaciones multitudinarias de noviembre de 2014 para protestar por la masacre de Iguala, en la Ciudad de México, algunos mani-

festantes provocaron daños en edificios y negocios. No era en ningún sentido algo inusitado en la ciudad, pero un empleado de una pizzería sobre Avenida Reforma decidió expresar su repudio hacia los actos vandálicos en la cuenta de Twitter de la empresa: "si los 'estudiantes' de Ayotzinapa hubiesen sido estudiantes ejemplares seguirían con vida y estudiando".<sup>31</sup> El asunto circuló en la prensa nacional. Se criticó la frase en todos los tonos, se señaló en particular la desvergüenza, la falta de sensibilidad del comentario, las reacciones que había provocado. Previsiblemente, la compañía despidió al empleado que tenía acceso a la cuenta, y emitió un comunicado solidarizándose con las familias de los 43.

Nos interesa resaltar el lenguaje que se emplea en el mensaje, porque es el de 1968. Las comillas sirven para expresar lo mismo que la fórmula "verdaderos estudiantes", es decir, personas que roban camiones y provocan destrozos son vándalos, no estudiantes, y por lo tanto no merecen simpatía. Y si los normalistas no son estudiantes de verdad, el acontecimiento se convierte en otra cosa.

En suma, Tlatelolco es el acontecimiento mediante el que se renueva el arquetipo de la lucha del Pueblo contra la opresión: el gobierno del PRI es trasunto de los gobiernos opresores, del Porfiriato, y la oposición automáticamente se identifica con los héroes, todos los héroes, los insurgentes, que son siempre el mismo héroe —y en particular, los mártires: los Niños Héroes. La transferencia simbólica que se produce con esa interpretación de Tlatelolco confirma la estructura moral de la historia patria, reproduce el escenario en que el gobierno es fundamentalmente ilegítimo y la oposición está justificada de antemano.<sup>32</sup> Sin cambiar el relato ni el sentido del relato, transforma el orden político. O mejor dicho, confirma en el plano simbólico la transfor-

mación del orden político, y por ello se vuelve un acontecimiento histórico.

Por supuesto, la cultura antagónica es el sustrato en que se sostiene una especie de escepticismo insuperable con respecto al gobierno, un ánimo predispuesto siempre a descubrir en sus representantes la mezquindad, la doblez, las malas intenciones, y que puede expresarse con mayor o menor vehemencia. Pero en términos más concretos, la cultura antagónica es la estructura que permite interpretar los conflictos políticos. Y nunca se expresa con tanta fuerza y claridad como cuando ocurre una masacre —la encarnación concreta de los principios abstractos de la cultura antagónica: el Estado asesina al Pueblo.

Algunos episodios, filtrados por esa estructura de sentido, se convierten en hitos de la insurgencia popular, y forman una serie que reitera el orden moral —la fundamental ilegitimidad del gobierno. Tienen en común que son masacres cuya responsabilidad no es del todo clara, o bien casos que no se cierran o que permiten sospechar que los responsables (los verdaderos responsables) hayan quedado impunes. Y como en el caso de Tlatelolco, las demandas, los intereses específicos en juego en cada una son lo de menos; lo que importa para su elaboración simbólica es que hayan sido violentamente reprimidas. La primera, la del Jueves de Corpus, el 10 de junio de 1971, que es la que convierte definitivamente a Tlatelolco en arquetipo, porque es la repetición —estudiantes asesinados en una manifestación pacífica— la que lo convierte en modelo. Ningún otro episodio de la serie es igual de claro, y según el momento se añaden o se quitan acontecimientos: Tlatelolco, Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Iguala. En conjunto, la serie confirma la vigencia de la cultura antagónica como sistema de interpretación.

## 5. Avatares de la cultura antagonica

Aunque sea sólo de paso, vale la pena anotar dos hechos que presentan obstáculos para la cultura antagonica. El primero, la elección presidencial del año 2000. Los gobiernos anteriores eran equivalentes del Porfiriato también porque suponían una forma de reelección. Desaparecido el tema del fraude electoral, desaparecido el PRI eterno, desaparece también la idea de una ilegitimidad de origen. Según la pauta de interpretación general de esos años, la victoria del PAN significa que finalmente el pueblo ha vencido, y por lo tanto el pueblo está en el gobierno —o en todo caso, ha puesto al gobierno. Sin embargo, eso no produce la legitimidad de las instituciones, continúan las formas habituales de protesta, de resistencia, en las lindes de la legalidad, y en muy poco tiempo, el conflicto en Atenco, con motivo del proyecto fallido del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, permite actualizar de nuevo el lenguaje de la cultura antagonica.<sup>1</sup> Y de hecho, una de las intervenciones de la policía hace que “Atenco” cristalice como acontecimiento, y se incorpore a la serie represiva de Tlatelolco.

El motivo del fraude electoral volvería a ser parte del repertorio de la cultura antagonica a partir de 2006, y mediante una nueva elaboración simbólica, para identificar al PRI y el PAN, resultaría insignificante la transición del año 2000, de modo que es posible a partir de entonces imaginar un “largo Porfiriato”.<sup>2</sup> Los responsables institucionales de la transición con frecuencia lamentan desde entonces el es-

caso reconocimiento que se concede a las transformaciones de fines de siglo. José Woldenberg ha escrito en la prensa para lamentar “la supresión de etapas importantes y productivas” de la historia de México, en especial “la transición democrática que vivió el país entre 1977 y 1997 y a los primeros años de una democracia naciente”.<sup>3</sup> No cuesta trabajo comprenderlo; lo que está haciendo no es sino describir la cultura antagónica desde la perspectiva de un (ex) funcionario público:

hay algo que México construyó en las últimas décadas que me temo no se aprecia con suficiencia, en buena medida por el mal humor público alimentado por las patologías enunciadas y algunas más. Existe un malestar tan grande por la vida política que genera un desdén por todo y por todos. No hay paciencia para distinguir. Se igualan instituciones (las que funcionan bien y las que lo hacen mal), se lanzan al viento descalificaciones genéricas y totalizantes, se compite por ver quién es más radical en las reprobaciones y no más exacto en el juicio.<sup>4</sup>

El segundo hecho presenta mayores complicaciones, es lo que se ha llamado “guerra contra las drogas”, “guerra contra el crimen organizado”, de 2007 en adelante. En la práctica significa una mucho mayor presencia del ejército, y obligatoriamente un cambio fundamental en la retórica: por primera vez hay en el país un discurso de mano dura, ley y orden, tolerancia cero, que justifica la acción de la fuerza pública como nunca antes. Eso en el discurso oficial, pero también en el de la oposición, y en buena parte de la prensa. No son pocas las masacres en enfrentamientos con el ejército o con la marina, episodios con más de diez y más de veinte

víctimas mortales, de los que se informa en comunicados de la Secretaría de la Defensa.<sup>5</sup> No obstante, ninguna de ellas se incorpora a la serie represiva, porque siempre se supone que se trata de delincuentes armados, es decir, que nada de eso cuenta como represión. Lo interesante para nuestro argumento es que la guerra contra el crimen organizado, por los niveles de violencia que alcanzó, por la presencia sistemática del ejército en todo el país y sobre todo por la eficacia del discurso de ley y orden, abrió una veta para renovar la legitimidad del Estado, y la legitimidad del uso de la fuerza por parte del Estado: puesto en el contexto del crimen organizado, cualquier episodio de violencia estaba justificado.

(Anotemos de todos modos, aunque sea entre paréntesis, que la antinomia no es definitiva. Según en qué contexto, organizaciones políticas, de autodefensa, de policía comunitaria, pueden con facilidad pasar de un registro a otro, de la denuncia del crimen organizado a la denuncia de la represión del ejército. Y en ocasiones no está claro qué cuenta como violencia criminal, qué cuenta como violencia política.)

La victoria del PRI en las elecciones de 2012 permitió que volviesen muchos de los tópicos anteriores, empezando por el del fraude electoral: era otra vez el PRI, que es siempre el PRI, y los estereotipos con que se le puede entender son los de siempre.<sup>6</sup> Adquiere entonces nueva vigencia la cultura antagónica, con la carga simbólica de los años de la transición democrática. Y por eso la masacre de Iguala puede pasar a ser parte de la historia del antiguo régimen, y se integra naturalmente en la serie represiva.

Por cierto que el otro lenguaje, el de la guerra contra el crimen, conserva su credibilidad íntegramente. Otros episodios en los que están implicados el ejército, la marina o

la policía federal, masacres en las que se puede presumir al menos un uso excesivo de la fuerza, si no ejecuciones extrajudiciales, como los casos de Tlatlaya o Tlanahuato, no ingresan a la serie represiva y no despiertan indignación generalizada, porque se mantienen en el contexto del crimen organizado. Incluir episodios así en la misma serie de "Ayotzinapa" significaría manchar el episodio, moverlo al contexto de la guerra contra el crimen.<sup>7</sup> Sólo en las primeras semanas hay quienes, Elena Poniatowska o Lorenzo Meyer, ponen Tlatlaya e Iguala en la misma frase, en la misma denuncia, pero eso pronto resulta impensable.<sup>8</sup>

Aparte de los otros factores que contribuyeron a que cristalizase el acontecimiento de Ayotzinapa, también tiene importancia el hecho de que la masacre pudo incorporarse además a otra serie de episodios que en el espacio público significaban un presunto antagonismo entre el presidente y los estudiantes universitarios: había desde la campaña electoral la idea de que existía una muy intensa hostilidad entre el presidente Peña Nieto y los estudiantes, particularmente los estudiantes universitarios.

En realidad, en el orden imaginario de la cultura antagónica *tenía que existir* esa hostilidad, de modo que era lógico que se pensase que Iguala había sido sólo una manifestación extrema del odio. Aclaremos. En la cultura antagónica, sobre todo a partir de Tlatelolco, los estudiantes ocupan un lugar especial como modelo, vanguardia, incluso epítome de la oposición, representantes auténticos del pueblo, y por definición "críticos" (donde *crítico* quiere decir opositor al gobierno). Y con el retorno del PRI, los estudiantes de 2012 volvieron a ser otra vez los estudiantes de 1968, y se suponía que su relación con el gobierno era la misma —tenía que ser la misma.

En la serie para explicar esa relación de hostilidad, el primer episodio, muy menor, ocurrió en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en diciembre de 2011: un periodista preguntó al candidato Enrique Peña Nieto por los tres libros que habían marcado su vida; el candidato dudó, tardó en responder, mencionó después la Biblia.<sup>9</sup> En los medios, en el contexto de la campaña, la escena contribuyó a la imagen de un candidato ajeno por completo al mundo de la cultura —que no podía recordar tres títulos. Días después, en un acto de propaganda, estudiantes de la UNAM, la UAM y el IPN llevaron a la sede del PRI una carta para recomendar libros al candidato (“que no ha leído más de tres libros en su vida”).<sup>10</sup> Es significativo que lo que los autorizaba para la exhibición propagandística era el hecho de ser estudiantes.

El segundo episodio de la serie, ejemplo de ese antagonismo, es la secuela de la visita del candidato Enrique Peña Nieto a la Universidad Iberoamericana, el 11 de mayo de 2012. El incidente tuvo un origen bastante trivial: un intercambio entre el candidato y un grupo de estudiantes, con motivo precisamente de los sucesos de Atenco, ocasionó un tumulto, descalificaciones por parte de dirigentes del PRI y del Partido Verde, y una reacción de los estudiantes que dio origen al movimiento #YoSoy132. No es fácil estimar qué tanta importancia pudo tener para la elección, pero sí tuvo mucha visibilidad —sobre todo gracias a los nuevos medios de comunicación y las redes sociales.<sup>11</sup>

El día de la toma de posesión, el 1 de diciembre de 2012, hubo en la Ciudad de México una protesta organizada por el movimiento #YoSoy132 y una Convención Nacional contra la Imposición: jóvenes armados con palos, piedras, bombas molotov, provocaron destrozos en el centro de la ciudad, y la policía los enfrentó con gases lacrimógenos y

balas de goma.<sup>12</sup> En realidad, fueron al menos dos manifestaciones distintas, de grupos distintos, con resultado distinto,<sup>13</sup> pero la imagen que quedó en los medios fue la de la policía persiguiendo y golpeando a los jóvenes: una imagen que en México siempre remite al arquetipo de Tlatelolco.

No hubo nada deliberado en la secuencia, sencillamente sucedió así. Los episodios se fueron sumando para perfilar la imagen pública del presidente (cuyo crédito recibió un nuevo golpe cuando un reportaje de Carmen Aristegui denunció, en uno de los momentos más críticos de la investigación del caso Iguala, un posible conflicto de interés en torno a la conocida “casa blanca”: era muestra de una frivolidad inadmisibles).<sup>14</sup> El mismo repertorio se puso en juego más tarde, en 2016, cuando se denunció el plagio en su tesis de licenciatura.<sup>15</sup> En conjunto, todo eso se añadía a la hostilidad imaginaria entre el PRI y los universitarios, y le daba densidad personal a la confrontación, de tal suerte que una frase como “¡Ya supérenlo!” resultaba verosímil, incluso si el presidente jamás la había pronunciado.

## 6. Las otras versiones

Retomemos el hilo. Existen tres versiones completas, públicas, documentadas con seriedad, contrastables, de los sucesos de Iguala del 26 de septiembre de 2014: las de la PGR, el GIEI y la CNDH. Son tres interpretaciones de los hechos, lo que se podría llamar la versión forense de los hechos. Las tres coinciden en los trazos generales del relato, señalan como responsables al alcalde, su jefe de policía, la policía municipal y la organización Guerreros Unidos, los tres ponen la masacre en el contexto de un conflicto entre bandas criminales.

Las diferencias más serias que hay entre ellas se refieren en lo fundamental al proceso de investigación, las omisiones, los defectos, los cabos sueltos, las sospechas de tortura de varios de los detenidos, las investigaciones e interrogatorios pendientes, y el destino final de los estudiantes. El GIEI señala en particular la importancia de interrogar de nuevo a algunos militares del 27 Batallón. El informe de la CNDH advierte que varios de los acusados fueron víctimas de malos tratos, se refiere a un personaje no claramente identificado al que los criminales llaman “el patrón”, pero sobre todo abre el contexto, y pone atención en la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos: las autoridades, la organización estudiantil, las condiciones de la vida cotidiana en el centro.

Ninguna de las tres versiones forenses indica que pudiera haber una responsabilidad directa de las autoridades fe-

derales ni sugiere de ningún modo que pudiera haber sido un acto deliberado de represión política que tuviese como objetivo a los normalistas. Sin embargo, en la construcción del acontecimiento “Ayotzinapa”, el orden cultural asignó peso y significado muy distintos a cada una de estas tres versiones. Eso es lo que nos interesa explorar.

La actividad de la procuraduría en el caso Iguala fue singular, inusualmente atenta, cuidadosa, preocupada por documentar cada detalle (a diferencia de lo habitual, en cientos de masacres anteriores), pero en la opinión pública se recibió con enorme suspicacia desde el inicio. Una encuesta nacional de Buendía y Laredo del 8 de noviembre de 2014 (es decir, un día después de la primera conferencia informativa de la PGR) reportó que tres cuartas partes de quienes conocían del caso no creían en la versión dada por las autoridades.<sup>1</sup> Se debía en parte a una constante en la percepción pública: el dato básico para la opinión mexicana, que confirman todas las encuestas, es una radical desconfianza hacia la Procuraduría General de la República. Pero había más.

El filtro de la cultura antagónica hace que cualquier matanza remita automáticamente a Tlatelolco, como modelo. Y en el caso específico de la masacre de Iguala, la manera en que apareció la noticia en los medios (en aquellos primeros días después de los sucesos, cuando todavía no se sabía nada) permitía entrever, conjeturar de forma abstracta el mismo reparto de papeles del 2 de octubre, de tal suerte que la asociación entre matanzas pudo transformarse en franca equiparación.

Por eso la conexión se hizo de inmediato, en cuestión de días, sin necesidad de que se conociesen los detalles del caso. La clave del asunto, por supuesto, que sugiere de in-

mediato la equivalencia con Tlatelolco, es el hecho de que las víctimas fuesen estudiantes. Siempre hay, en México como en todas partes, un valor simbólico de la juventud, especialmente bajo la figura del estudiante, que además evoca desde 1968 un ánimo contestatario, rebelde, de “seamos realistas, pidamos lo imposible”. La cultura antagonica los convirtió en los estudiantes por antonomasia, los estudiantes con los que se han identificado tres generaciones de mexicanos, es decir, los del movimiento del 68, los de la masacre de Tlatelolco. Ése es el automatismo que impone la cultura antagonica: estos estudiantes son (como) aquellos estudiantes, y la prueba está en que (también) han sido asesinados.

Admitido ese nexo, el modelo de Tlatelolco dirige la atención hacia el Estado, al que señala como responsable, lo cual significa que el esfuerzo por identificar a los culpables se concentra, por encima de cualquier otra consideración, sobre el gobierno. Por eso las autoridades permanecen en el centro de atención: primero las municipales, por supuesto, pero después las federales, conforme el acontecimiento sale del ámbito local y se inserta en el nacional. En consecuencia, las autoridades se vieron en la complicada situación de ofrecer explicaciones públicas de la investigación de un caso en el que eran el principal sospechoso, y su credibilidad, de por sí limitada, se redujo a la que puedan tener quienes investigan sus propios crímenes.

De ahí que la investigación pudiese ser puesta en duda, de todo a todo. Durante los primeros meses de las averiguaciones, por ejemplo, la crítica en los medios insistía sobre todo en la falta de resultados, en la lentitud con que se presentaban hallazgos. A mediados de noviembre de 2014, Juan Villoro lamentaba que “la respuesta judicial no ha es-

tado a la altura de la desesperación de la gente” y le llamaba la atención “la lentitud con que se dio a conocer el fatal desenlace [de los normalistas]”.<sup>2</sup> Una semana después, los padres de familia de los 43 se quejaban también de los “nulos avances” de las pesquisas de la PGR.<sup>3</sup>

En contraste, para enero de 2015, cuando el procurador Murillo Karam reveló las conclusiones finales de las averiguaciones, la crítica era igualmente exigente, pero el criterio era prácticamente el opuesto: los padres de los normalistas acusaron al gobierno de querer “dar carpetazo” al caso, y su abogado atribuyó a las autoridades federales “tener prisa por cerrar una investigación que no es concluyente”.<sup>4</sup> Carlos Martín Beristain, uno de los cinco miembros del GIEI, expresaría las mismas preocupaciones en un libro en que relata su experiencia en el caso Iguala: “Desconfío de los guiones que tratan de darlo todo por cerrado. Las explicaciones parece que consideran concluido un caso que tiene visos de ser complejo.”<sup>5</sup>

Otro ejemplo. En ese libro, *El tiempo de Ayotzinapa*, Beristain desestima la identificación genética de Alexander Mora con el argumento de que “la cadena de custodia de esa bolsa no tiene nombre, sólo una firma, y no están claras las circunstancias en las que fue encontrada”.<sup>6</sup> Y más adelante: “El hecho de haber hallado ahí el resto de Alexander Mora confirmaría toda la historia expuesta por el anterior procurador, basada en las confesiones de los supuestos asesinos, que sabemos tienen serios signos de probables torturas.”<sup>7</sup> En otras palabras, lo que resultaba sospechoso era precisamente que el hallazgo permitía corroborar la versión de la procuraduría.

La cultura antagónica explica el descrédito de la PGR, pero permite además que la sola duda se convierta en acu-

sación. De antemano se supone que el Estado está detrás de la masacre, de manera que el escepticismo (que de entrada sería una disposición neutra) se convierte en una manera de insinuar casi indisimuladamente la culpabilidad. El mecanismo se puede ilustrar con un texto de Lorenzo Meyer: la masacre fue perpetrada por “el alcalde [...] con el crimen organizado y aún no sabemos si alguien más”.<sup>8</sup> No dice nada concreto, salvo que “no sabemos”, pero con eso hace del silencio, de lo oculto, lo no sabido, el centro de atención. En el contexto, aparte del alcalde, su policía y el crimen organizado, ese “alguien más” sólo pueden ser las fuerzas federales: la policía federal y el ejército. O sea, que el guiño escéptico es en realidad una acusación. La eficacia de la expresión deriva de que explota la suspicacia: “no sabemos si alguien más” quiere dar a entender que sabemos perfectamente que hubo alguien más —pero no se puede decir en voz alta.<sup>9</sup> La información disponible no indicaba nada de eso. Pero no hace falta ningún indicio concreto ni menos una prueba que sugiera la existencia de ese “alguien más”. La frase funciona como la pregunta retórica de Laureano Gómez: “¿Quién mató a *Mamatoco*?” Que supone que ya sabemos quién lo mató, o quién lo mandó matar, pero no se puede decir. Y una vez admitido que los responsables (los verdaderos, se entiende) están escondidos, la idea se vuelve irrefutable.<sup>10</sup>

Beristain recurre al mismo mecanismo. Se pregunta por qué la PGR no esperó más tiempo para informar sobre el hallazgo de la bolsa de basura que contenía los restos de Alexander Mora: “habríamos hecho todo de consenso y eso les hubiera ayudado a tener una mayor legitimidad. O al menos no se entiende si no hay algo más.”<sup>11</sup> El recurso es diáfano. En el contexto de la cultura antagónica, el vacío de

la duda se llena automáticamente con la certeza de una imputación. Lo que las frases dicen en realidad es: hay algo más, y el gobierno lo está ocultando.

El conjunto de acusaciones, dudas y críticas de que fue objeto la versión de la PGR terminó por despojarla de credibilidad para la opinión pública, hasta que se concluyó que la “verdad histórica” era sencillamente falsa, y que por lo tanto era necesario desechar el expediente entero. Consecuencia lógica de eso fue que todo aquello que corroborase la versión oficial, todo aquel que la defendiera en algo, resultaba inmediatamente sospechoso —por el simple hecho de respaldarla. Lo confirmaba Ángela María Buitrago, otro miembro del GIEI, al referirse a quienes sostienen la “verdad histórica” en los siguientes términos: “no saben que, al defender lo que defienden, ya perdieron la credibilidad”.<sup>12</sup>

El corolario paradójico de esa desconfianza radical hacia la investigación de la PGR fue que cualquier versión que desmintiera la versión oficial podía adquirir verosimilitud —por el simple hecho de contradecirla. Y el vacío que quedaba al descartar el expediente de la procuraduría produjo un ambiente fértil para la especulación, en el que germinó una serie de versiones alternativas de los hechos. Lo importante es que esas otras versiones resultaban creíbles de antemano; contenían casi todas acusaciones más o menos veladas, más o menos graves, cuya verosimilitud derivaba de la cultura antagónica —eran *sospechas fundadas*.

Esas otras versiones, que aparecen en libros, reportajes de prensa, documentales, no ofrecen una explicación alternativa, o mejor dicho: no ofrecen un relato alternativo. Proponen lecturas distintas, que sobre todo se apoyan en conjeturas *a partir de lo que no se sabe*.

Por supuesto, hay muchas cosas que no pueden saber-

se con seguridad o bien porque no se investigó, o bien porque la investigación no condujo a nada, y desde luego hay otras, unas más, otras menos relevantes, de las que no se sabe nada o casi nada. Para empezar, no se sabe con absoluta certeza cuál haya sido el destino de los cuerpos. Y eso que no se sabe sirve para socavar la verosimilitud de lo que sí se sabe. Todo lo que se desconoce contribuye a hacer plástico el suceso, porque sugiere que las cosas podrían haber ocurrido de un modo distinto.

Las explicaciones más abstractas atribuyen el crimen al “odio de las clases dominantes contra la educación pública en general”,<sup>13</sup> o en particular a la voluntad del gobierno de “destruir las escuelas normales rurales”;<sup>14</sup> alguna abre el panorama para incluir en el episodio a agentes de fuerzas de seguridad de Estados Unidos, aunque no está claro el propósito.<sup>15</sup>

En las versiones “políticas” se supone implícitamente que todos los actores sabían lo que estaba sucediendo. De ahí la importancia que se atribuye a las comunicaciones del sistema de seguridad y a las labores de inteligencia del ejército. En diciembre de 2014, en un reportaje firmado por Anabel Hernández y Steve Fisher, en la revista *Proceso*, se acusa directamente a la Policía Federal y a los militares, aunque no se explica el motivo por el que habrían asesinado a los estudiantes.<sup>16</sup> En la hipótesis de que nadie sabía realmente lo que estaba pasando, caben diferentes grados de ineptitud, negligencia, desinterés, dejación o indiferencia, pero, si se sabía que se preparaba una masacre de estudiantes, entonces adquiere un cariz muy distinto todo lo que se hizo y sobre todo lo que no se hizo aquella noche. A eso llegan varios de los textos: ¿por qué el ejército no hizo nada para impedirlo? Y por supuesto, en la pregunta está

implícita la respuesta, y la acusación: “¿Quién mató a *Matatoco*?”

Mucho de lo que se publica es puramente especulativo, sin más fundamento que una conjetura. Téморis Grecko, por ejemplo:

“Lo que nosotros estamos entendiendo, y lo que nos están, se está descubriendo, es que fue la participación del ejército. Nunca fueron entregados a la *maña*, fueron entregados al ejército”, me dice Mario González Contreras, padre del estudiante desaparecido César Manuel González Hernández. Ésta es una de las fuertes sospechas entre los familiares de las víctimas, y el ejército estaría interesado en disiparla abriendo sus puertas, si no tuviera motivos más fuertes para mantenerlas cerradas.<sup>17</sup>

La convicción de que algo se oculta es ubicua. Beristain insiste en ello: “Nuestro mandato [...] supone trabajar al lado de las instituciones para empujar su trabajo hacia una realidad que profundice en lo que se oculta.”<sup>18</sup> Otra vez, hacia el final de su libro: “la convicción de que algo se esconde, algo que aún no hemos descubierto, está más presente que nunca.”<sup>19</sup> El subtítulo del libro de Anabel Hernández sobre el caso Iguala, por tomar otro ejemplo, es “La historia que el gobierno trató de ocultar”.<sup>20</sup> Es un reflejo forzoso de la cultura antagónica: si sabemos de antemano que el Estado es el responsable, pero resulta difícil (o imposible) demostrarlo, la conclusión lógica es que la verdad ha sido disimulada, que está en otra parte.

Por eso la mayor parte de estas versiones alternativas se describen a sí mismas en esos términos, como esfuerzos para revelar “la verdad” o “lo que realmente pasó”. Es

llamativo que esas verdades sean diferentes unas de otras, pero es más llamativo aún que esas inconsistencias no resulten problemáticas, ni para cada versión aislada, porque no se ponen en contraste, ni para la construcción del acontecimiento en su conjunto. Importan no por otra cosa, sino porque arrojan dudas.

El artículo de Pedro Miguel, de 2016, titulado “43 preguntas” emplea el recurso de una manera particularmente eficaz.<sup>21</sup> Varias de sus preguntas se refieren a asuntos que ya habían sido respondidos por la investigación (“¿Quién ordenó el ataque y quién lo ejecutó y coordinó? ¿Para qué? ¿A dónde llevaron a los muchachos? ¿Qué les hicieron? ¿Están realmente involucrados en los hechos del 26 de septiembre José Luis Abarca y María de los Ángeles Pineda Villa?”); preguntar cuando ya se ha dado una respuesta significa descartar de entrada la investigación, y decir sin decirlo que hay otra respuesta —que obviamente se está ocultando. Otras son acusaciones indisimuladas pero que planteadas así, como preguntas, no necesitan apoyarse en nada (“¿De dónde sacó Tomás Zerón Lucio el fragmento óseo perteneciente a Alexander Zamora Venancio? ¿Quién colocó, y para qué, 41 casquillos en el basurero de Cocula? ¿Fueron también sembrados los otros fragmentos óseos que la PGR presentó a los integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense? ¿Qué ha estado ocultando el gobierno a lo largo de estos dos años?”). Y otras más son insinuaciones que apuntan hacia una o varias diferentes posibles conspiraciones (“¿Posee Zerón Lucio información comprometedora para Peña Nieto? ¿Sobreviviría el régimen si decidiera revelar la verdad sobre lo sucedido en Iguala el 26 de septiembre de 2014? ¿Qué saben las cúpulas empresariales sobre el ataque contra los normalistas?”); no hay motivo para

suponer que algo de eso tenga sentido, es decir, algo que justifique las preguntas, pero en un clima de desconfianza como el que se había formado, las preguntas se justifican solas —y sólo por plantearse resultan pertinentes. Todo se vuelve dudas.

Volvamos al argumento. Importa tener presente que las otras versiones, aparte de ser contradictorias entre sí, carecían de fundamento aparte de algún testimonio y alguna conjetura, porque eso indica que su verosimilitud dependía de otra cosa: no de ningún hecho, sino del contexto. Aunque no hubiese ninguna prueba que lo indicase, resultaban creíbles. La responsabilidad del ejército, el crimen de Estado, no es un dato, sino una idea, o más exactamente una pauta cultural a partir de la cual se interpretan los hechos. En una frase, las versiones alternativas dependían del mecanismo de la sospecha, el cual permitía, por un lado, transformar la falta de pruebas en evidencia del encubrimiento de la verdad y, por otro, dejar los hechos del caso sin esclarecer, porque la duda, la incertidumbre, automáticamente adquirirían el cariz sólido de una acusación.

Por eso también las noticias que más circulan, las que más resonancia tienen en la opinión pública, son las que más rotundamente contradicen la versión oficial. El modo en que se reportó el primer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes en septiembre de 2015 es ejemplar: la prensa recogió las críticas del reporte sobre el procedimiento de la procuraduría, las debilidades de la investigación y, en general, todo aquello en que las investigaciones de la PGR y del GIEI diferían, pero básicamente pasó por alto todo aquello en lo que coincidían.<sup>22</sup> El aspecto del informe que más proyección tuvo se reducía a una oración, la conclusión final de su descripción de los hechos: “Por to-

dos estos antecedentes y con base en el informe evacuado por el Dr. Torero [quien elaboró el reporte pericial], el GIEI se ha formado la convicción que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula.”<sup>23</sup>

El peritaje al que se refería el informe era incompatible con este aspecto concreto de la “verdad histórica”, pero se interpretó como refutación de la investigación de la procuraduría en su totalidad. Un texto en *Animal Político*, firmado por Paris Martínez, sostenía que el GIEI “no sólo puso en duda las conclusiones de la autoridad, sino que demostró su falsedad con pruebas científicas”.<sup>24</sup> Juan Villoro describió el informe como “una narrativa más completa de los sucesos”<sup>25</sup> y los padres de familia de los 43 aseguraron que “la verdad ya está escrita en el informe del GIEI”.<sup>26</sup> Como era de esperarse, la prensa internacional fue aún más categórica en su juicio: “En sólo seis meses de trabajo, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) publicó un informe que hace trizas la investigación oficial y da un paso clave para que los familiares de las víctimas estén más cerca de la verdad y la justicia.”<sup>27</sup>

Llama la atención la insistencia con que se dice que el informe contenía la verdad del caso porque en realidad no ofrecía una explicación alternativa de los hechos ni decía nada sobre el paradero de los 43 normalistas;<sup>28</sup> lo único que aseguraba era lo que a juicio del GIEI *no* había sucedido. Y eso es lo que nos importa anotar, que no hacía falta hacer explícita una interpretación diferente de los hechos para que la versión adquiriese verosimilitud e importancia en la opinión pública —como desmentido del relato oficial (que en lo fundamental no desmentía). No era necesario por el contexto: el mero hecho de descartar la versión oficial era en sí mismo el fundamento de la imputación, la prueba de

que las autoridades habían intentado ocultar la verdad, lo cual demostraba ya su culpabilidad.

Por lo demás, en términos concretos, el informe simplemente planteaba la necesidad de profundizar, de explorar aspectos descuidados de la investigación: recomendaba volver a interrogar a miembros del ejército del 27 Batallón, y esclarecer las denuncias de tortura de varios detenidos en las averiguaciones oficiales. Proponía también, de modo especulativo, una hipótesis sobre el móvil de la agresión contra los normalistas. Según el GIEI, la procuraduría había ocultado la existencia de uno de los camiones involucrados en los sucesos de Iguala (el "quinto autobús"); su hipótesis era que ese autobús, que no figuraba en el expediente, podría haber sido usado por una red internacional de distribución de droga, de modo que la violencia de aquella noche podría haber sido para proteger o para recuperar un cargamento.<sup>29</sup>

Las recomendaciones del grupo de expertos sólo planteaban dudas, unas más graves que otras, pero filtradas a través de la cultura antagónica se convirtieron en otros tantos motivos para sospechar de la procuraduría y del ejército, de la investigación entera, para suponer que se había desmentido puntualmente, y para acusar al gobierno de ocultar la verdad. Y así quedó asentada la idea de que los defectos de la versión oficial eran producto no de la ineptitud sino de la deshonestidad —no eran errores sino intentos deliberados de engañar.

El desarrollo posterior de la investigación no modificó en nada esa idea básica. A raíz de la controversia sobre el incendio en Cocula, por ejemplo, la PGR y el GIEI comisionaron un nuevo peritaje a un Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego. El reporte que entregaron sus seis

miembros en abril de 2016 apoyaba las primeras conclusiones de la procuraduría: afirmaba que al menos 17 personas habían sido quemadas en el basurero municipal.<sup>30</sup> No tuvo mayor trascendencia, desde luego nada comparable a la proyección que tuvo en su momento el peritaje del GIEI.

La noticia sobre todo se reportó en términos de la polémica que produjo,<sup>31</sup> porque el GIEI pronto desestimó los contenidos del reporte, y la discusión pública continuó casi como si el nuevo peritaje jamás hubiese ocurrido. Denise Dresser, por ejemplo, se refería unas cuantas semanas después a la “‘verdad histórica’ [...] ya desmentida por todas las instancias internacionales involucradas de que los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula”.<sup>32</sup> En un simposio de la Asociación de Estudios Latinoamericanos en mayo de 2016, es decir, un mes después de la entrega del documento del Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego, Carlos Martín Beristain afirmó que “nosotros [el GIEI] comisionamos un estudio a un experto en materia de fuego que demostró la imposibilidad científica de que los estudiantes hubiesen sido incinerados en el basurero de Cocula, como alegaba el gobierno”.<sup>33</sup>

Insistimos: lo que nos interesa subrayar no es la posible exactitud o inexactitud del reporte de los expertos en fuego, sino el hecho de que ni siquiera se haga mención de él, que Beristain no considerase que hiciera falta.<sup>34</sup> Así, quedó asentada en la opinión pública la convicción de que la versión oficial había sido refutada definitivamente, y la labor del GIEI vino a quedar como el desmentido de la “verdad histórica”.

El modo como se recibió la investigación de la CNDH en la opinión pública fue menos entusiasta. De alguna manera, se recibió como si estuviese en un punto intermedio en-

tre el expediente de la PGR y el informe del GIEI. Señalaba deficiencias graves, pero no era un desmentido rotundo. Conviene detenerse en ella porque ilustra con claridad los mecanismos con que el acontecimiento “Ayotzinapa” se incorporó al orden cultural.

El primer reporte de la comisión sobre el caso Iguala se publicó a mediados de 2015. El documento básicamente reúne una serie de críticas, sobre todo técnicas, de la investigación de la procuraduría.<sup>35</sup> En los medios, la noticia se presentó como una nueva refutación de la versión oficial, y el vocero de los padres de familia de los 43 declaró que “con el más reciente informe de la CNDH” se confirma que “la supuesta verdad histórica de la PGR es en realidad una salida política”.<sup>36</sup>

El informe final de la CNDH, en cambio, publicado en noviembre de 2018, recibió el trato opuesto. En un primer momento, la *Recomendación n.15VG/2018* —un documento de más de dos mil páginas, incomparablemente más detallado y extenso que todos los otros que había emitido la comisión— parecía ser un nuevo desmentido de la versión oficial: la prensa inicialmente subrayó los errores detectados en la investigación de la PGR, la idea de que hubiera sido posible hacer algo para prevenir la desaparición de los normalistas, la colusión entre funcionarios públicos y el crimen organizado.<sup>37</sup>

Sin embargo, el reporte incluía un nuevo peritaje que afirmaba que habían sido incineradas en el basurero municipal de Cocula por lo menos 19 personas —no necesariamente los normalistas desaparecidos, aclaraba.<sup>38</sup> Eso sólo hizo que el informe entero fuese descrito como un intento por “revivir” la “verdad histórica”.<sup>39</sup> El Equipo Argentino de Antropología Forense, que había trabajado el caso duran-

te los primeros meses, y que rechazaba la teoría del fuego en el basurero, rápidamente expresó su desacuerdo con las conclusiones de la CNDH, acusándola de incurrir “en graves omisiones, especulaciones, sesgos y errores”.<sup>40</sup> Los padres de familia de los 43 marcharon en Chilpancingo para protestar contra del reporte de la comisión. Uno de ellos “reprochó que el organismo reafirme la ‘verdad histórica’ del ex procurador Jesús Murillo Karam” y añadió que “es un informe que no nos convence”.<sup>41</sup>

La noticia entonces dio un giro, y comenzó a discutirse básicamente en términos de qué tan sesgada estaba la investigación y qué tan confiables, o poco confiables eran sus fuentes.<sup>42</sup> Probablemente el aspecto más original de la investigación de la CNDH, y el más controvertido, fue su reporte acerca del funcionamiento de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos, que incluía comentarios sobre el consumo y tráfico de droga en la escuela, y sobre la organización política de los estudiantes, y su dominio del plantel. No obstante, esas observaciones pasaron a segundo plano; cuando llegaron a discutirse en la prensa, fue sobre todo para poner en duda el panorama que describía, porque resultaba denigratorio para las escuelas normales.<sup>43</sup>

La recomendación final de la comisión, entre otras cosas, se hacía cargo de la hipótesis del “quinto autobús” que había propuesto el GIEI en sus informes. Describía la afirmación de que la PGR había ocultado la existencia del camión como un “supuesto inexacto”<sup>44</sup> y sostenía que “no existen elementos en todo lo relacionado con [este autobús] para suponer que haya sido la motivación que generó las agresiones en contra de los normalistas”.<sup>45</sup> A diferencia de lo que había sucedido con el informe del grupo de expertos, la conclusión de la CNDH no encontró eco alguno en

los medios, y el tema continuó siendo discutido en los mismos términos que antes. En un artículo de *Proceso* de julio de 2019, Chrístel Rosales escribía que “sólo a través de su trabajo [del GIEI] fue posible conocer [...] la existencia de un quinto autobús”.<sup>46</sup>

Lo que llama la atención en lo que se refiere a las investigaciones de la comisión es la selección que se hizo de ellas en los medios: mientras ciertos documentos eran criticados, otros eran celebrados. El criterio no tiene nada de enigmático. Cuando la comisión contradecía la versión de la PGR, sus hallazgos se consideraban demoledores; cuando se asemejaban a la “verdad histórica”, resultaban infundados —y había que suprimirlos. A raíz de la *Recomendación n.15VG/2018*, por ejemplo, los familiares de los 43 pidieron que no se invitara a la CNDH a la inauguración de la comisión presidencial para la verdad y acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa que instaló el nuevo gobierno.<sup>47</sup>

Un último ejemplo, delicado pero revelador. El cuerpo de Julio César Mondragón, uno de los normalistas que murió en Iguala el 26 de septiembre de 2014, fue hallado al día siguiente severamente golpeado y con el rostro desollado. La imagen conmovió a la opinión pública en México y fuera de México por su brutalidad, y se interpretó en un principio como indicio de la crueldad con que se había atacado a los normalistas, es decir, se asumió que alguien había infligido esa violencia gratuita deliberadamente.<sup>48</sup> Francisco Goldman, por ejemplo, escribió en *The New Yorker* que ésta era “la firma de un asesinato del crimen organizado mexicano”.<sup>49</sup> Una ilustración de Norberto Hernández muestra un cadáver, mutilado y sin piel en el rostro, con una leyenda que dice: “Me quitaron el rostro pero hoy los que marchan son mi nueva cara.”<sup>50</sup>

La CNDH publicó en julio de 2016 un reporte sobre el caso de Mondragón, basado en una segunda necropsia practicada por sus propios peritos forenses. Sus conclusiones indicaban que, aunque la causa de la muerte del normalista había sido traumatismo craneoencefálico, “la pérdida de tejido de la cara y cuello fue producto de la intrusión de la fauna depredadora del lugar [...] en una etapa *post mortem*”.<sup>51</sup> La afirmación contradecía el uso simbólico que se había hecho de la muerte de Mondragón, pero no tuvo ningún efecto, y la imagen perduró en el repertorio con que se discutía el caso. Jorge Volpi, por ejemplo, un año y medio después de la publicación de ese reporte de la CNDH, escribía que “el caso de Julio César Mondragón se torna el más atroz símbolo de la barbarie y la sinrazón que nos rodean, de esa violencia extrema, inaudita, incontenible, que casi resulta imposible de exponer o explicar con palabras”.<sup>52</sup>

A estas alturas, debe ser obvia la pauta de interpretación que queremos mostrar, pero conviene señalar sus implicaciones, porque son trascendentales.

Una vez admitido que el Estado está detrás de la masacre, es perfectamente lógico que su investigación del caso resulte sospechosa. Ésa es la piedra de toque. Por lo tanto, todo aquello que podría corroborar la versión oficial se antoja improbable, dudoso, y en el contexto de la cultura antagonica, esa sospecha se transforma automáticamente en una acusación: la verdad se esconde porque alguien (el Estado, o sea el presidente) tiene razones para esconderla —y eso demuestra ya su culpabilidad. Y se confirma lo que ya se sabía. Por otra parte, todo aquello que pueda desmentir la versión oficial es automáticamente digno de crédito, es importante; el resto: el sustento empírico, la consistencia del relato, son asuntos secundarios, porque es al menos un in-

tento de llegar a la verdad. En la práctica, eso significa también que incluso si la PGR, el GIEI y la CNDH coinciden en la mayor parte de los hechos, el resultado de las averiguaciones es una profunda incertidumbre. El resultado inevitable es un sistema interpretativo completamente hermético, que no puede sino concluir repitiendo su propia premisa: "Fue el Estado".

Ésos son los mecanismos retóricos, simbólicos, mediante los que la cultura antagónica valora y decide la credibilidad de las noticias, las declaraciones, los peritajes, los informes, y de la información en general en torno al caso. Pero eso no es suficiente para construir un acontecimiento. La versión de la matanza criminal, tal como se describe en la investigación de la PGR, el GIEI o la CNDH supone una secuencia de confusiones, errores, inercias, un escenario de debilidad absoluta del Estado, aparte de una inextricable trama de corrupción criminal de las autoridades y las policías locales, y la costumbre de una violencia de una magnitud casi inverosímil: el estado de Guerrero.

Ahora bien, para elaborar un relato coherente en el que el gobierno de Enrique Peña Nieto sea un duplicado del de Gustavo Díaz Ordaz, donde los normalistas de Ayotzinapa sean los estudiantes del 68, para que los sucesos de Iguala puedan aparecer como reiteración de la lucha épica entre el Pueblo y el Estado, y el episodio se integre a la serie represiva, hace falta algo más. No sólo crear ese vacío, esa situación en que nada se sabe, sino elaborar los hechos de modo que puedan efectivamente asimilarse al modelo de Tlatelolco.

Al cabo de cinco años, digámoslo en un aparte, circulan numerosas versiones, la mayoría puramente especulativas. No hay información nueva, pero se ha creado un clima en que todo parece posible, todo resulta dudoso: incluso aque-

llo en lo que están de acuerdo las tres investigaciones completas que se conocen (PGR, GIEI, CNDH). Se puede decir y se dice que todo lo que se ha publicado oficialmente es mentira, y se repiten los motivos más llamativos: el basurero de Cocula, el “quinto autobús”.<sup>53</sup> En la oscuridad que se produce de ese modo cabe cualquier conjetura. Y las proporciones del acontecimiento aumentan con el tiempo. Ricardo Raphael, por ejemplo, señala una “red criminal responsable” de la masacre: “una maraña que vincula a las autoridades de varios municipios, al gobierno estatal, a funcionarios federales, al ejército, a empresas transportistas privadas, a funcionarios de la Procuraduría General de la República, a muchos periodistas, a líderes de opinión, a una organización criminal cuyo mando radicaba en los Estados Unidos y también a agentes del gobierno de ese país”; y dice que “hay evidencia sobre cada tramo perteneciente a esta extensa conspiración criminal”.<sup>54</sup>



## 7. La descontextualización

La elaboración de un acontecimiento para hacerlo inteligible supone asimilar los hechos a ciertas categorías, mediante las cuales se les atribuye un sentido. Eso quiere decir que se escogen determinados rasgos en los sucesos, se destacan unos, se omiten otros o se les resta importancia, para que el conjunto tenga un significado inmediatamente identificable, que no ofrezca dudas. Por supuesto, el proceso puede ser casi inconsciente, porque los hechos se experimentan así, a partir de la estructura cultural que hace ver algunas cosas y oculta otras. La masacre de Tlatelolco es un ejemplo clásico: los soldados no son sólo soldados, ni los estudiantes sólo estudiantes; son encarnaciones de las categorías culturales del Estado y el Pueblo, de tal forma que la violencia concreta que ejerce uno sobre otro se torna abstracta, y sirve para decir algo sobre la naturaleza del país.

El caso de Iguala es mucho menos nítido. De entrada, no hay sujetos representativos: todos los actores pertenecen a categorías relativamente menores, no muy a propósito para encarnar el drama de la insurgencia contra la opresión. La violencia brutal de la policía es indudable, el resto es mucho más oscuro. Los sucesos en sí mismos, según lo que podemos saber de ellos, son muy confusos —sólo se vuelven significativos con el paso del tiempo. Para interpretar la masacre como reproducción de Tlatelolco es necesario filtrar lo que se sabe de los hechos, obviar los rasgos que más osten-

siblemente los distinguen del arquetipo, es decir, es necesario descontextualizar el episodio.<sup>1</sup>

El procedimiento no es una novedad. Para formar la secuencia represiva de la que venimos hablando, a partir del arquetipo de Tlatelolco, hace falta eliminar o hacer insignificantes las particularidades de cada uno de los incidentes, porque son todos muy distintos. Las causas, los escenarios, los intereses en juego, los actores, son siempre diferentes: la serie que forman Tlatelolco, Jueves de Corpus, Aguas Blancas, Acteal, Atenco, Iguala, no tiene ningún sentido, salvo que se supriman las circunstancias concretas por las que se puede explicar cada uno de los casos —de manera que lo que quede pueda proponerse como común denominador.

En pocas palabras, el proceso por el que la desaparición de los normalistas se convierte en un episodio más de la serie represiva, y que por lo tanto convierte al presidente Peña Nieto en trasunto de Gustavo Díaz Ordaz y a los normalistas en calca de los estudiantes del 68, tiene que hacer desaparecer muchas de las características concretas del suceso, y a fin de cuentas eliminar la realidad de Iguala, hacerla insignificante.

El paso más importante de esa descontextualización, indispensable de hecho, consiste en sacar el episodio del contexto de la criminalidad, de la “guerra entre los cárteles”, en que se había interpretado la violencia de los años anteriores, y situarlo en el de la violencia política. Y aclaremos que la distinción entre esos dos contextos es un hecho cultural.<sup>2</sup>

Desde luego, la desaparición, el asesinato de 43 personas es un hecho aterrador, espantoso, pero en México en 2014 no era algo único ni mucho menos: había habido noticias de matanzas parecidas con relativa frecuencia en los

años anteriores. Todas de una crueldad pavorosa. Puestas en el contexto de la “guerra contra el crimen organizado”, como resultado de los pleitos entre los “cárteles”, las masacres se convirtieron casi en asunto de rutina, escasamente significativas: sería difícil recordar en qué consistió casi cualquiera de esos episodios, imposible saber por qué motivo se produjo ni qué consecuencias tuvo por ejemplo la masacre de Boca del Río el 20 de septiembre de 2011, con 35 víctimas, la de los Arcos del Milenio en Guadalajara el 24 de noviembre de 2011, con 26 víctimas, o la de Cadereyta el 13 de mayo de 2012, con 49 víctimas.<sup>3</sup> En ese contexto, la matanza de Iguala hubiera sido una más.

Bien: en esos términos puso los hechos la investigación de la Procuraduría General de la República, como una más de las masacres del crimen organizado. La averiguación del caso fue incomparablemente más intensa, detallada, más cuidadosa que la de cualquiera de los otros casos. Pero sin una diferencia sustantiva en las conclusiones, aparte de haber señalado directa e inmediatamente al alcalde y su policía. Según el expediente, entre los estudiantes había infiltrados, o los asesinos creyeron que había infiltrados de un grupo criminal diferente, Los Rojos, con el que estaban en guerra por controlar los mercados ilegales de Iguala, y que por eso decidieron el secuestro y el asesinato de los jóvenes, con el apoyo de la policía municipal. O sea, que era un capítulo más en la guerra de los cárteles, como Boca del Río, Cadereyta o Guadalajara.

La resistencia a admitir cualquier aspecto de esa versión por parte de los familiares de las víctimas, y sus representantes, obedece sobre todo a eso: las masacres del “narco”, comoquiera que se produzcan, no inspiran una reacción moral, no despiertan ninguna simpatía, y en Méxi-

co en esos años desde luego no pueden producir un acontecimiento.

Pero había algo más. El hecho de que los estudiantes hubiesen desaparecido contribuyó también a facilitar el nexo político, porque la idea de los desaparecidos, la sola palabra, evoca de inmediato las prácticas habituales de las dictaduras de los años setenta, también la “guerra sucia” de México. En las manifestaciones de condena por Ayotzinapa se generaliza el uso de la frase consagrada en las protestas contra la dictadura argentina: “Vivos los llevarón, vivos los queremos”. La asociación hace de la masacre de Iguala un crimen político, y del gobierno un parangón de los gobiernos priistas de Gustavo Díaz Ordaz o Luis Echeverría.

Vale la pena tener presente este esfuerzo por recontextualizar los sucesos de Iguala como episodio de la violencia política, porque sirvió como motivo, como fondo permanente sobre el cual se configuraron todos los demás elementos que despojaron de sus características específicas a los sucesos de Iguala. Pero vamos por partes, para no enredarnos.

El primer elemento de la descontextualización es quizá el más obvio, pero también el más sutil: en la imaginación de la gente, inadvertidamente, comienza a identificarse el suceso con Ayotzinapa, y no con Iguala.

La asociación no sólo sirve para poner nombre al acontecimiento (a diferencia de todas las otras masacres, nombradas invariablemente en función del lugar en que ocurrieron), sino que consigue distorsionar la geografía de los sucesos. Observábamos al inicio de estas páginas que resulta natural hablar de lo que sucedió “en Ayotzinapa” —a pesar de que ahí no sucedió nada. Sergio Aguayo y Elena Po-

niatowska se refieren a la masacre en esos términos, pero la fórmula es empleada por doquier.

Enrique Krauze afirmaba a inicios de noviembre de 2014 que “esto que ha pasado en Ayotzinapa —aunque en un nivel local y estatal—, [...] ha pasado, va a pasar a la historia mexicana de la infamia junto con Tlatelolco. Es un Tlatelolco en Guerrero.”<sup>4</sup> El mismo mes, en la inauguración de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, dijo Raúl Padilla que “es insoslayable hacer mención a lo ocurrido en Ayotzinapa que tanto dolor e indignación ha generado”<sup>5</sup> En diciembre, Oxfam ofreció su apoyo a los padres de los normalistas desaparecidos: “Desde Oxfam México sumamos nuestra voz en solidaridad con las víctimas y sus familias, compañeras y compañeros de los acontecimientos en Ayotzinapa.”<sup>6</sup> En uno de los primeros libros que discutían el tema, *Ayotzinapa: un grito desde la humanidad*, sus autores emplean repetidamente la frase: “cuando se dio la masacre de los estudiantes en Ayotzinapa...”<sup>7</sup> o “los jóvenes normalistas que fueron asesinados y desaparecidos en Ayotzinapa el 26 y 27 de septiembre de 2014...”<sup>8</sup> Amnistía Internacional critica en su portal de noticias el desempeño del gobierno respecto al “caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa”.<sup>9</sup> En la página oficial de la Organización de Estados Americanos, se explica que pudieron enviar al GIEI a México gracias a “un acuerdo firmado en noviembre de 2014 por la CIDH, el Estado mexicano y representantes de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa”.<sup>10</sup>

El tiempo dejó la expresión inalterada. A cuatro años de la masacre, Gina Zabudovsky se refería a “los padres de los jóvenes asesinados en Ayotzinapa”.<sup>11</sup> Por las mismas fechas, Denise Dresser escribía sobre la importancia de compartir “testimonios, grabaciones, videos de lo que ocurrió aque-

lla noche en Ayotzinapa”<sup>12</sup> y John Gibler, quien recabó una serie de testimonios de primera mano sobre los sucesos de Iguala, afirmaba que “en cualquiera de las dos especulaciones que se elijan [sean culpables los grupos criminales o el gobierno] para explicar lo que pasó en Ayotzinapa, se ve que ya se han fusionado las prácticas del Estado con la supuesta guerra del narco”.<sup>13</sup> La prensa internacional —a estas alturas no sorprenderá— adoptó la frase con la misma comodidad. Un artículo de *El País* reporta, por tomar un ejemplo, la creación “de una Comisión de la Verdad para el caso Iguala —la desaparición de 43 estudiantes en Ayotzinapa.”<sup>14</sup> No Iguala.

Aclaremos que el uso va más allá de las posiciones partidistas. Jorge Fernández Menéndez, quien sostiene que la versión de la PGR es fundamentalmente correcta,<sup>15</sup> también emplea la expresión.<sup>16</sup> Lo que nos interesa no es la frecuencia con que se sitúa la masacre *en Ayotzinapa*, sino que no despierta ningún reparo en el sentido común, y que eso tiene consecuencias para la construcción del acontecimiento. No son triviales.

Para buena parte de los mexicanos, Iguala es un lugar conocido. Para empezar, por el Plan de Iguala y la bandera nacional, pero también porque estaba en la ruta de la carretera federal entre la Ciudad de México y Acapulco, era una escala casi obligatoria hasta mediados de los años noventa, de modo que es un referente más o menos familiar, urbano sin duda, y que se ubica claramente en Guerrero. Ayotzinapa, en cambio, tiene una sonoridad exótica, indígena, del México profundo, remite a una localidad minúscula, desconocida, un pequeño pueblo campesino, que por eso puede ser cualquier pueblo campesino —y por metonimia es la nación mexicana. No es sólo un cambio de nombre, es un

cambio de escala, que contribuye de manera decisiva a la descontextualización.<sup>17</sup>

Sobre todo, y como reflejo de la distancia que hay literalmente entre ambos lugares, el cambio sirve para producir distancia respecto a los sucesos de aquella noche. Para los lectores de prensa, Ayotzinapa no es más que la Escuela Normal Rural; Iguala, en cambio, inevitablemente evoca todas las condiciones locales en que se dieron los hechos: la policía municipal, los negocios del alcalde, el control de los mercados informales, el sistema de extorsión, las bandas organizadas de delincuencia, los conflictos dentro del PRD y entre las varias organizaciones y movimientos de protesta en Guerrero.

En este sentido, resulta sumamente significativa la denominación que se eligió para las tres investigaciones principales del caso: mientras que las de la PGR y la CNDH se titulan “Caso Iguala”, la del GIEI se llama “Informe Ayotzinapa” —en su portada figura la imagen de una tortuga, en alusión al significado de la palabra en náhuatl y al escudo de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. El hecho de que a partir de sus títulos se pueda deducir el destino de cada investigación en la opinión pública no es coincidencia, y delata los mecanismos básicos de la construcción del acontecimiento.

Acomodado el escenario, aparecen los personajes. Para asimilar los sucesos de Iguala al modelo de Tlatelolco, es necesaria la descontextualización de los normalistas, para presentarlos como las víctimas de la represión estatal —y nada más. El mecanismo clave para ese movimiento consiste en que se vea a las víctimas como estudiantes y sólo estudiantes, sin ninguna clase de vínculo con el mundo de las drogas ni mucho menos del crimen organizado, y que por otra parte su desaparición pueda haber tenido, o se pueda

sugerir que tuvo una motivación política, y que se les mató porque eran estudiantes.

Antes que nada, la descontextualización implica convertir a los estudiantes en las víctimas principales del acontecimiento e inclusive, llegado el caso, en las únicas víctimas posibles. El saldo final de los sucesos del 26 de septiembre de 2014 fue de seis muertos, 43 desaparecidos y más de cuatro decenas de heridos.<sup>18</sup> Lo que llama la atención es el distinto modo en que se les asignó significado en la construcción del acontecimiento.

Los desaparecidos indiscutiblemente concentraron la mayor parte del peso simbólico, como víctimas. No hacen falta demostraciones elaboradas, lo confirma la consigna principal que abanderó las protestas: "Nos faltan 43." Se debió parcialmente a esa angustia de las primeras semanas posteriores a la masacre, cuando había la esperanza de encontrar con vida a los normalistas. Pero después, conforme transcurrían las semanas, los meses, el hecho mismo de que no aparecieran los 43 (vivos o muertos) le otorgó al acontecimiento una especie de vigencia perpetua, porque el caso podía interpretarse siempre como inconcluso.<sup>19</sup> Más aún: podía interpretarse como dudoso, extraño, y, por lo tanto, daba cabida a la sospecha —y a las acusaciones que automáticamente se derivaban de ella. Y en el fondo de todo eso, resonaba el nexo de la desaparición con la violencia política, lo cual desvinculaba el caso de la "guerra contra el crimen organizado" (y lo aproximaba en cambio a la "guerra sucia" de los años setenta).

Ahora bien, a pesar de que los 43 normalistas desaparecidos opacaron a todas las otras víctimas de los sucesos de Iguala, a quienes murieron esa noche también les fue concedido significado en función del modelo de Tlatelol-

co —aunque confinados a un segundo plano. Los autores que contribuyeron al libro *Ayotzinapa, un grito desde la humanidad* ofrecen ejemplos diáfanos. Ana Colchero se pregunta: “¿Tenía el Estado que llegar a tanto: a desaparecer a 43 y asesinar a 3 para mandar su mensaje?”<sup>20</sup> Miguel Concha celebra las “acciones nacionales e internacionales [...] que tienen como epicentro la exigencia de presentación con vida de los jóvenes normalistas, así como la justicia para los casos de los tres jóvenes ejecutados arbitrariamente”.<sup>21</sup> Lo llamativo es que ambos omiten a la mitad de las víctimas fatales, reduciendo la lista para incluir solamente a los normalistas fallecidos. No es un asunto menor.

Un texto de Josefina Morales es aún más revelador: “la desaparición forzada se consumó después del asesinato de 3 estudiantes, uno de ellos desollado, el asesinato de un adolescente de un equipo de futbol y otras 3 personas”.<sup>22</sup> Aparte de que haya en el relato una víctima más de la cuenta, llaman la atención las aclaraciones que decide hacer: destaca que algunos son estudiantes y adolescentes, pero decide agrupar al resto simplemente como “personas”. Paris Martínez sintetiza con claridad el criterio de la clasificación. Las víctimas que no son normalistas, cuando aparecen, son incidentales, literalmente un paréntesis: “la Policía Municipal de Iguala, Guerrero, asesinó a tres normalistas (así como a tres transeúntes)”.<sup>23</sup>

Otro ejemplo: la ceremonia en que el nuevo gobierno instaló la comisión para la verdad y acceso a la justicia en el caso Ayotzinapa. Santiago Aguirre, subdirector del grupo de derechos humanos que lleva el caso de los familiares de los normalistas, concluyó su intervención recitando los nombres de los 43 desaparecidos, a los que añadió los de los tres estudiantes que murieron esa noche en Iguala. Amplió

la lista para incorporar a dos más que habían sido heridos de gravedad: Aldo Gutiérrez (que quedó en estado de coma) y Édgar Andrés Vargas (que recibió un tiro en la quijada). No mencionó a ninguna de las otras tres personas que murieron.<sup>24</sup>

La misma omisión se repite fielmente en la muestra sobre la masacre de Iguala en el Museo Universitario Arte Contemporáneo. Según Cuauhtémoc Medina, curador de la exposición, el artista y activista Ai Weiwei “se propuso generar un monumento visual a las víctimas mismas [de los sucesos en Iguala]”. La obra consta de 46 retratos enormes hechos de LEGO: los 43 desaparecidos y los tres normalistas muertos el 26 de septiembre de 2014. Nuevamente, las otras tres víctimas fatales no figuran entre los retratos —a pesar de que sí son mencionadas en la cronología del caso que se extiende a lo largo de las paredes de la sala. La decisión de excluir a la mitad de los fallecidos se antoja especialmente significativa, considerando que el título de la exposición es “Restablecer memorias”.<sup>25</sup> El juicio es diáfano: las víctimas que no son normalistas forman parte de los sucesos, no del acontecimiento.

El resultado de la descontextualización no tiene misterio, y cristaliza en afirmaciones como ésta, de Juan Villoro: “La espiral de violencia alcanzó un grado superior el 26 de septiembre con el asesinato de seis jóvenes y el secuestro posterior de 43 estudiantes normalistas en Ayotzinapa”.<sup>26</sup> El escritor incurre en la distorsión geográfica que hemos mencionado y, más significativamente, sumerge a todas las víctimas mortales en la categoría de la juventud, cuando solamente cuatro pertenecían a ella —los tres normalistas (Daniel Solís, Julio César Ramírez y Julio César Mondragón) y David Josué García, jugador del equipo de fútbol Los

Avispones. El hecho de que ni Víctor Manuel Lugo ni Blanca Montiel fuesen jóvenes se vuelve absolutamente irrelevante,<sup>27</sup> y reincidiendo en la confusión entre las víctimas simbólicas y las reales, Villoro termina por calcar el acontecimiento Tlatelolco “en Ayotzinapa”.

El mismo nombre del acontecimiento contribuye a la insignificancia de las otras víctimas, porque concentra la atención sobre los normalistas, sobre la escuela,<sup>28</sup> pero el modelo de Tlatelolco requiere más que simplemente identificar a los estudiantes como las únicas víctimas: hace falta que encajen en cierto arquetipo del estudiante.

Un grupo de periodistas se propuso elaborar perfiles biográficos de cada uno de los 43 normalistas, lo que había sido su vida antes de su desaparición.<sup>29</sup> Para eso, viajaron a las comunidades de las que eran originarios, entrevistaron a familiares, vecinos, amigos, y compusieron un retrato de cada uno de ellos: sus aficiones, sus afectos.

Llama la atención que todas las historias son la misma historia. Los rasgos se repiten, casi con las mismas frases. A juzgar por lo que dicen los textos, casi todos parecen haber sido un poco retraídos: “éste era tímido”, “él era tranquilo, no salía ni a la cancha”, “un joven alegre pero tímido”, “era un hombre serio, puntual, reservado”, “un joven callado, tímido, poco relajiento, respetuoso”, “se caracterizó por ser callado”, “su timidez poco empata con su destreza en el estudio”, “es un joven callado, sereno”. Todos eran estudiosos: iba con los amigos “para hacer trabajos escolares”, “siempre entregó buenas calificaciones, todos dicen que es un estudiante de excelencia”, “siempre fue muy trabajador”, “todos los días sacaba sus cuadernos y pasaba horas ‘quebrándose la cabeza’ para resolver problemas o escribir reportes”, “entregado a sus estudios”. Eran altruistas, y casi

todos querían sobre todo ayudar a su familia: “Quería ayudar a sus papás”, “anhelaba convertirse en maestro”, “yo la voy a ayudar, la voy a apoyar para que no tenga que trabajar tanto, le dije a su madre”, “quería estudiar para conseguir un buen empleo, para sacar de trabajar a sus padres”, “prometí a su mamá ayudarla económicamente una vez que se recibiera de maestro”, “desea ser maestro por vocación de ayuda”, “quería terminar una carrera para ayudar a su familia”, “ayudaba a su familia, pero con una carrera profesional ayudaría más”, quería “ayudar al progreso de las personas de esa zona montañosa”, “a veces se ponía a decir, yo quiero ponerme a estudiar para ayudarles a ustedes”. Alguno además era alegre, alguno era especialmente bromista, pero ninguno tuvo nunca problemas ni era aficionado a las fiestas: “no se le daban las bromas”, “no salía mucho, no le gustaba salir”, “no le gustaba el desmadre”, “siempre risueño, con fe en dios”, “respetuoso y nada agresivo”, “nunca manejó malas palabras con sus compañeros”.<sup>30</sup>

En el libro hay sólo dos alusiones al mundo de la delincuencia.<sup>31</sup> Es notable que ninguno de ellos, jóvenes estudiantes mexicanos en el siglo XXI, en Guerrero, haya tenido problemas con la policía, ni inquietudes políticas ni curiosidad por la guerrilla, nada que ver con las drogas ni con el alcohol; sólo de uno de ellos se dice: “Una que otra ocasión don Aristeo lo llegó a regañar ‘porque ya empezaba a echarse sus cheves’.”<sup>32</sup>

Desde luego, es muy posible que todos ellos fuesen así, y que dijeran esas cosas. En todo caso, lo que importa es que con esos rasgos los retratan sus familiares, sus amigos, y más todavía, con esos rasgos los retratan los periodistas: son los que recuperan de su investigación, de sus entrevistas, los que les parecen significativos, que dan una me-

por idea de quiénes eran. No se trata sólo de dar una buena imagen de los estudiantes, cosa perfectamente lógica, sino que están todos, acaso inadvertidamente, escogiendo los rasgos que permiten reproducir el estereotipo cultural positivo del estudiante: tímido, estudioso, serio, trabajador, generoso, hogareño, alegre.<sup>33</sup>

Eso es importante sobre todo para dejar asentado que no eran vándalos ni pandilleros, lo cual implicaría que no eran “verdaderos estudiantes”, y convertiría el acontecimiento en otra cosa. Y el modelo de Tlatelolco necesita que las víctimas sean por completo inocentes, que sean mártires, exige la imagen de aquel estudiante de 1968 —que contra la violencia del fusil levanta un libro. Enrique Krauze ya lo ejemplificaba con claridad en noviembre de 2014, a escasas semanas de los sucesos de Iguala:

La masacre de 43 estudiantes de una escuela normal en Ayotzinapa ha horrorizado a México. La indignación social ha alcanzado su punto más álgido en protestas a lo largo y ancho del país. Las manifestaciones son naturales y están justificadas —y ciertamente no tienen precedente en décadas recientes. Todos saben que los estudiantes no tenían nada que ver con los criminales o el tráfico de droga. Todos saben que ésta fue verdaderamente una Masacre de los Inocentes.<sup>34</sup>

Una consecuencia de esta especie de canonización (que acaso pasa desapercibida como tal) es que se vuelve imposible sugerir que los normalistas puedan incurrir en transgresiones o atropellos, que puedan hacer cualquier cosa ajena al estereotipo positivo del estudiante. Insinuar que al menos algunos de ellos no fuesen estudiantes (o que no fue-

sen sólo estudiantes) significa desacreditarlos, "criminalizarlos", culpar a las víctimas, que por supuesto resulta inaceptable.

El reflejo obedece a la vigencia del discurso de ley y orden, de mano dura, producido por la guerra contra el crimen organizado, que prácticamente justifica los asesinatos si se puede asociar de alguna manera a las víctimas con el mercado de la droga, pero también se articula a partir de la dicotomía ontológica a la que aludíamos hace algunas páginas: acusar a un joven de vandalismo significa negar que sea un "verdadero estudiante".<sup>35</sup>

El problema, por supuesto, es que el arquetipo es un estándar imposible, al que los hechos, las personas no pueden ajustarse. Por lo tanto, se vuelve crucial separar el suceso de la historia en que se produjo, dejarlo reducido a esa tarde y esa noche. Porque la historia siempre añade complejidad, impone matices. En particular, importa separar a los estudiantes de las formas de organización y las prácticas habituales de los normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, dejar fuera de foco tanto el funcionamiento cotidiano de la escuela como, sobre todo, el del Comité de la Base Estudiantil Ricardo Flores Magón, que forma parte de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), que controla la vida cotidiana de las normales rurales en todo el país, desde la admisión de estudiantes hasta las acciones de protesta, los contenidos de los currículos, la actividad política y el secuestro de autobuses.<sup>36</sup>

Cuando llega a discutirse el contexto de la normal rural de Ayotzinapa, en los libros, en la prensa, es usualmente para resaltar la precariedad de sus condiciones: la escasez de recursos, las carencias de la escuela, los orígenes humil-

des de sus alumnos. Y aunado al hecho de que las normales rurales son escuelas públicas, esa precariedad sirve como premisa para justificar cualquier acción de los normalistas, porque pueden interpretarse todas como expresión de la necesidad, de la falta de apoyo del Estado. Pero además, la premisa contribuye sutilmente a la construcción del acontecimiento, porque permite franquear la brecha que señalamos páginas atrás: si los normalistas provienen de familias campesinas, a diferencia de los estudiantes de 1968, significa que indudablemente pertenecen a la categoría cultural del Pueblo, lo cual permite investirlos directamente con el prestigio simbólico del campesino como encarnación del mexicano.<sup>37</sup>

Es en aras de preservar esa misma canonización que sus amigos, sus compañeros, los periodistas, muchos de los que han escrito sobre el caso, emplean eufemismos para describir sus acciones el 26 de septiembre de 2014: estaban haciendo una colecta, iban a reunir unos autobuses, es decir, nada que pueda sugerir violencia, ni siquiera nada ilegal, nada que pueda resultar amenazador (y que por lo tanto pudiera haber justificado una intervención de la policía). Un normalista de Ayotzinapa relata que “el día 26 en la tarde nosotros estábamos en la escuela. Ya sabíamos que nuestros compañeros habían salido hacia Iguala a realizar una colecta.”<sup>38</sup> Manuel Aguilar Mora y Claudio Albertani emplean el mismo lenguaje: “policías municipales [de Iguala] agredieron y ametrallaron a un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, mientras realizaban una colecta”.<sup>39</sup>

En particular, el robo de autobuses, y el secuestro de los choferes, que está en el centro de los sucesos de Iguala, se presenta en los textos no sólo como algo rutinario, algo

“tradicional”, sino acordado con los dueños de las empresas, para que no haya duda de que no estaban haciendo nada fuera de lo común.<sup>40</sup> Otra vez Aguilar Mora y Albertani: “es necesario precisar que la ‘toma’ de camiones es una práctica relativamente común que los estudiantes suelen realizar de manera pacífica”.<sup>41</sup> Es importante porque eso significa que la violencia de la policía fue absolutamente inmotivada o, más exactamente, que no estuvo motivada por consideraciones justificables.

Ahora bien, para que el acontecimiento pueda formar parte de la serie represiva es necesario que haya al menos un fondo político. La confusión, el conflicto entre las pandillas, el tráfico de droga, no sirven porque mantienen el caso en el contexto criminal, aunque se señale directamente al alcalde y su jefe de policía. Y por eso hace falta establecer mediante conjeturas la motivación de las policías, y sobre todo la del ejército. La identificación con Tlatelolco ofrece la clave de interpretación, porque explica claramente lo que sucedió: fue una protesta estudiantil reprimida por el gobierno —se entiende que el gobierno federal, según el esquema consagrado que reduce el Estado a la voluntad del presidente. Para eso, era necesario que los estudiantes estuviesen manifestándose contra las autoridades federales.

Por eso en los relatos se subraya el carácter “combatiivo” de las normales, que están siempre “en lucha” contra el Estado —por eso también la FECSM se define a sí misma como una organización “semi-clandestina”.<sup>42</sup> Dicen Aguilar Mora y Albertani, parafraseando a Roberto González Villarreal, que, “al desaparecer a los normalistas, el Estado intentó desconocer su lucha, las condiciones de su existencia y las razones de sus batallas”.<sup>43</sup> Fabiano Bianchini cambia un poco el registro: “no es un secreto para nadie que los normalis-

tas no ven con buenos ojos la explotación minera”.<sup>44</sup> César Navarro elabora una confrontación larga: “en forma permanente se ha perseguido a los estudiantes socialistas de Ayotzinapa... [y se utilizan] grupos criminales para reprimir la movilización social-estudiantil”.<sup>45</sup> De modo parecido, escribe Témoris Grecko: “El gobierno está decidido a destruir las escuelas normales rurales porque chocan con su proyecto de país [...] en 1941 inició el proceso para dismantelarlas, tan largo y difícil que 75 años después no ha concluido”.<sup>46</sup>

Más específicamente, se describen las acciones de los normalistas en Iguala el 26 de septiembre como pasos necesarios para poder participar en la marcha en conmemoración de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas. Un alumno de Ayotzinapa explica que “también es necesario lo de tener camiones para la marcha. Lo que pasa es que llevamos muchísimo tiempo pidiendo al gobierno estatal camiones para movernos.”<sup>47</sup> Carlos Martín Beristain aclara que “tomar autobuses” es parte de “una cosa que se llama poner las condiciones”, lo cual es indispensable para que los normalistas pudiesen viajar a la capital a conmemorar Tlatelolco.<sup>48</sup> Miguel Ángel Hernández, hermano de uno de los 43, explica que “la tarea encomendada” el 26 de septiembre de 2014 era “la retención de 25 camiones para asistir a la marcha del aniversario de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, en la Ciudad de México”.<sup>49</sup>

Otro ejemplo, de la prensa internacional. Un artículo de *El País*, titulado “De Ayotzinapa a Tlatelolco”, cuenta que estudiantes de las normales rurales de todo México se reunieron a mediados de septiembre de 2014 en la escuela Emiliano Zapata de Amilcingo, en Morelos. Entre otras cosas, decidieron “desde qué Normal saldrían para viajar al DF a conmemorar la masacre de Tlatelolco”. La nota explica que

“eligieron como punto de partida la Normal de Ayotzinapa por su cercanía con la Ciudad de México”.<sup>50</sup> Sin más información sobre el contexto, la frase resulta engañosa. Para empezar porque la Normal Rural Raúl Isidro Burgos no es la más cercana a la capital: la Lázaro Cárdenas en el Estado de México, la Benito Juárez en Tlaxcala y la Emiliano Zapata en Morelos (donde parecen haber elegido la normal de Guerrero como punto de partida) están todas a menos de la mitad de la distancia que separa la escuela de Ayotzinapa de la Ciudad de México (unos 300 kilómetros).<sup>51</sup>

Para que tenga sentido el texto, hace falta suponer que el autor aludía al primer informe del GIEI,<sup>52</sup> en el cual se indica que, según algunos normalistas, la decisión de reunirse en Ayotzinapa se tomó porque se encuentra en proximidad a la capital del país —relativo a la mayoría de las normales rurales.<sup>53</sup> Lo que llama la atención es que el informe reporta ésa como una entre varias razones para elegir la normal de Ayotzinapa como punto de reunión; se escogió, además, “por ser una normal de hombres y porque políticamente estaba mejor preparada, además de que las otras normales ya habían sido sedes anteriormente”.<sup>54</sup> Y eso es lo que nos interesa: que tal como se reporta, la decisión de partir desde Ayotzinapa, que a fin de cuentas sería la razón por la cual los normalistas estaban buscando autobuses en Iguala esa noche, queda despojada de cualquier lógica local, de cualquier referencia al funcionamiento concreto de la normal o la FECSM, y se reduce a un asunto de logística, significativo solamente por su conexión con la marcha por Tlatelolco. La eligieron para mejor llegar a la Ciudad de México para conmemorar el 2 de octubre, nada más.

En su expresión más radical, esta simplificación consigue descontextualizar el episodio de Iguala a tal grado que

la presencia de los normalistas en la ciudad resulta ser un asunto incidental, accesorio, que nada tiene que ver con lo que sucedió. Kate Doyle, por ejemplo, al resumir el caso, simplemente omite el hecho de que los normalistas habían ido a secuestrar autobuses y sostiene, en cambio, que estaban ahí literalmente de paso:

los jóvenes habían salido de su escuela normal en Ayotzinapa y viajaban en camiones que planeaban usar en algunos días para ir a la Ciudad de México y participar en la manifestación anual conmemorativa de la masacre estudiantil de 1968 en Tlatelolco. Cuando los autobuses *pasaban por la ciudad* de Iguala, la policía local y miembros del grupo criminal Guerreros Unidos detuvo los vehículos y salvajemente atacó a los estudiantes.<sup>55</sup>

David Huerta, en un libro titulado *La violencia en México*, escrito para un público español, incurre en la misma distorsión. Para explicar el contexto de la masacre de Iguala, el poeta relata que:

A fines de septiembre de 2014, los jóvenes de la normal de Ayotzinapa organizaron un viaje a la ciudad de Chilpancingo [...] para manifestarse en la conmemoración de la matanza de estudiantes el 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas [...] Los estudiantes de Ayotzinapa “secuestraron” algunos autobuses y se dirigieron a Iguala para organizar su protesta.<sup>56</sup>

Todo esto hace del episodio de Iguala una manifestación de protesta en defensa de la educación pública, y con eso remite todo a su condición de estudiantes. La insistencia en la

marcha del 2 de octubre como objetivo último de la toma de autobuses y la necesidad de secuestrarlos como consecuencia del escaso apoyo gubernamental ayudan a recontextualizar las acciones de los normalistas como manifestación del antagonismo con el Estado, y consiguen transformar el robo de autobuses en una forma de protesta política en contra del gobierno —que les ha forzado a ello, porque no les proporciona recursos. Por lo tanto, los esfuerzos que pudieran hacer las autoridades por impedirselo serían arbitrarios e injustos. Y más: serían una forma de represión, es decir violencia política, porque se trataría de someter a los críticos del gobierno.

Eso nos conduce a la otra mitad del reparto de papeles. El modelo de Tlatelolco requiere también de la descontextualización del Estado, para interpretar a sus representantes exclusivamente como victimarios de la masacre y, en el caso extremo, como los únicos victimarios posibles. Nuevamente, las consignas de las protestas *por Ayotzinapa* lo sintetizan con claridad: la condena, en su expresión mínima, es “Fue el Estado”. La oración sólo tiene un sujeto.

El modo en que apareció la noticia en los medios en septiembre de 2014 sin duda contribuyó a la identificación de las autoridades como culpables, porque se señaló a los policías municipales de Iguala como autores de la matanza. Pero tuvo un efecto impensado: los autores habían sido policías, no la delincuencia. De modo que, conforme se desarrollaba la investigación, y se señalaba la probable responsabilidad de grupos criminales, la versión oficial comenzó a resultar dudosa, porque podía parecer un intento del gobierno por exculparse. Ya se expresaba en ese sentido un normalista de Ayotzinapa en octubre de 2014, días después de la masacre: “Nosotros vimos que los policías se los lle-

varon. No puede ser posible que fueron los del crimen organizado [...] Se están queriendo lavar las manos diciendo que fue el crimen organizado.”<sup>57</sup> Y tenemos que repetirlo: lo fundamental consistía en poner o no el episodio en el contexto de la “guerra contra el crimen organizado”.

Para que el Estado pueda ser el responsable de la masacre, hace falta, antes que nada, reducir la importancia de los grupos criminales locales en los sucesos. En su versión más radical, la reducción implica negar la existencia misma de los delincuentes. En entrevista, la madre de uno de los normalistas desaparecidos explica que, “más que nada, no hay Guerreros Unidos. Yo lo que siento y lo que pienso y por todos los datos y las investigaciones que tenemos, aquí no hay más que gobierno.”<sup>58</sup> En el otro extremo, el mecanismo más laxo para responsabilizar al Estado consiste en acusarlo de omiso, es decir, precisamente de no participar en los hechos. La crítica se articula a partir del lenguaje de los derechos humanos, y sirve para alejar el foco de atención de los criminales y desplazarlo hacia las autoridades. A este recurso apelaba Javier Sicilia cuando argumentaba que Ayo-tzinapa “es un crimen de Estado”. Su razonamiento: “estamos ante la inoperancia de Estado porque permitió esto”.<sup>59</sup>

Otro género de planteamientos supone que la diferencia entre el Estado y los grupos delincuenciales es tan insignificante que puede descartarse. Bien sea porque el gobierno controla a los criminales, como sostiene la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad: el “crimen organizado [...] en realidad constituye la cara clandestina de un gobierno mafioso y delincencial”.<sup>60</sup> O bien sea porque los criminales controlan al gobierno, como insinúa Anabel Hernández al conjeturar el origen de la agresión contra los normalistas del modo si-

guiente: "el capo [que supuestamente controla la plaza de Iguala] habría hecho una llamada al coronel de infantería José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón, para pedirle que recuperara la mercancía [en uno de los autobuses tomados] a como diera lugar".<sup>61</sup> Las rutas y los razonamientos son distintos, a menudo incompatibles, pero lo que importa es que conducen todos al mismo destino: se identifica al Estado como principal responsable de los sucesos de Iguala —ya sea por lo que hizo, ya sea por lo que dejó de hacer.

Pero el modelo de Tlatelolco ofrece más que la identificación del culpable: propone un diagnóstico de su naturaleza, de sus motivaciones. En contraposición al estudiante martirizado, emerge el Estado demonizado, deliberadamente criminal. Porque la clave del acontecimiento, para que sea un hecho político, es que la masacre haya sido premeditada, incluso planeada. Es decir, que se haya querido asesinar precisamente a esos estudiantes, y asesinarlos por eso, porque eran estudiantes y *por lo tanto* críticos, opositores, insurgentes. En uno de los libros más radicales, una serie de dibujos dice exactamente eso: en uno, un joven siendo asesinado, y la leyenda: "Pienso, luego me desaparecen"; en otro, la imagen de un simio con las siglas de la Policía Federal Preventiva, y la frase: "En México te asesinan por ser estudiante".<sup>62</sup>

Es la imagen del Estado de la masacre de 1968, por supuesto: el gorila furioso, armado, que asesina personas arrodilladas e inermes; por eso en los libros que tratan el tema reaparecen las caracterizaciones del gobierno de Díaz Ordaz. Al describir el contexto en que ocurrió la noche de Iguala, por ejemplo, Carlos Martín Beristain escribe (haciéndose eco de las caracterizaciones del Estado como de-

predador) que “la Policía Federal *acecha* y no deja que [los normalistas] tomen buses”.<sup>63</sup> Anabel Hernández acude a aquel repertorio que entiende la violencia como desenmascaramiento del Estado, y escribe que la masacre de Iguala se convirtió en “un parteaguas que [...] exhibiría el rostro del gobierno de Enrique Peña Nieto”.<sup>64</sup> Y José Miguel Candia concluye que “la respuesta del Gobierno Federal al reclamo de aparición con vida [de los 43 normalistas] tiene el tono y los argumentos de una burla cruel”.<sup>65</sup>

Sin embargo, los funcionarios públicos, los agentes del Estado no pueden ajustarse perfectamente al arquetipo, así que hace falta descontextualizar sus actos y sus dichos, para que reflejen más fielmente la imagen del gobernante cínico, cruel. Ése es el origen de las frases emblemáticas de las autoridades en torno al caso: “Ya me cansé” o “¡Ya supérenlo!” No importa que ése no haya sido el sentido original de las expresiones (ni siquiera, en el caso de la segunda, que ésas no hayan sido las palabras que se pronunciaron), porque quien está hablando no es el procurador Murillo Karam o el presidente Peña Nieto como individuos concretos, quien está hablando es el estereotipo del representante del Estado que propone la cultura antagónica.

Y la descontextualización continúa: para que resulte inteligible el acontecimiento como episodio de represión política, para que tenga sentido decir “Fue el Estado”, y que se entienda que fue el presidente de la república, se debe construir al Estado como una institución unificada, coordinada, monolítica, para que sus actos y omisiones puedan leerse como parte de una estrategia dirigida verticalmente, y no como tropiezos o debilidades o fallas de comunicación, ineptitud, negligencia, corrupción.

De ello deriva la insistencia en describir los sucesos

como acciones concertadas, como un "operativo". Beristain, de nuevo: "Los dos ataques [a grupos separados de normalistas] son simultáneos, lo que te muestra el nivel del operativo".<sup>66</sup> Sergio González Rodríguez amplía el panorama, y sostiene que, "en su fase operativa, la acción policial-criminal de la masacre de Iguala fue eficaz, sincronizada, coordinada e integrada, como ordena la *Guía de procedimientos y estándares tácticos y operativos del ejército estadounidense*".<sup>67</sup> Anabel Hernández repite la idea: "No obstante, al contrario de lo que han dicho los gobiernos de Guerrero y federal, contra los estudiantes no sólo actuaron patrullas de la policía municipal de Iguala sino que se trató de un amplio operativo."<sup>68</sup> Varias páginas antes, Hernández construye la unidad del gobierno mediante la suma de sus partes:

descubrí la existencia del Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C4) de Iguala, por medio del cual actuaban coordinadamente el Ejército, la Policía Federal, la policía estatal y ministerial de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil de Iguala. Por medio del C4, el gobierno supo en todo momento de la embestida contra los estudiantes...<sup>69</sup>

Era previsible. Porque en última instancia, para el crimen de Estado es necesario que el responsable sea el ejército, que remite automáticamente al presidente, quien puede entonces entenderse como autor intelectual. Sólo así adquiere pleno sentido la identificación con Tlatelolco. Pero además, la policía no sirve, la policía municipal tiene muy escaso valor simbólico, nadie pensaría que es empleada por el presidente, no cuenta casi como agente represivo: de hecho, la intervención de la policía municipal equivale en rea-

lidad a poner los hechos en el contexto del crimen organizado, enturbia la claridad del modelo, que reclama la imagen del ejército.

Un ejemplo. A inicios de 2019, *Proceso* publicó un reportaje sobre Julio César López Patolzin, uno de los 43 normalistas desaparecidos, quien era además (ésta era la noticia) un soldado que trabajaba como agente encubierto en la normal de Ayotzinapa. La historia obviamente obligaba a plantear preguntas incómodas a quienes sostienen que el ejército desapareció a los normalistas, pero la revista no se enfocaba en eso, sino en el hecho de que el gobierno espía a los normalistas. Los padres de familia de los estudiantes dijeron que en la normal se había ratificado que “ninguno de los desaparecidos pudo ser militar o estar relacionado con el Ejército”. A renglón seguido, sostuvieron que “la revelación de la Sedena sólo confirma que el Ejército desapareció a sus hijos, porque sabía dónde estaban”.<sup>70</sup>

Y así, la historia se repite: es el mismo Estado, el mismo ejército, la misma represión. Ayotzinapa es parte de una cadena histórica a la que se pueden sumar muchas otras masacres. En aquel artículo de la *Revista Mexicana de Sociología*, José Manuel Valenzuela dice que el movimiento #YoSoy132 o la reacción a la desaparición de los 43 estudiantes de Iguala son “elementos centrales que desafían la capacidad del Estado para imponer sus *verdades históricas*”, dice que Enrique Peña Nieto reaccionó en la Universidad Iberoamericana “con talante diazordacista”, hilvana el 2 de octubre con el 10 de junio, como “parte de la necropolítica impulsada por el Estado mexicano”, y repite la serie, en la que ahora están Aguas Blancas, Acteal e incluso Tlatlaya y San Fernando.<sup>71</sup>



## 8. Nocturno en que nada se oye

*En lugar de una conclusión*

Recapitulemos. Normalmente, los acontecimientos, es decir, los hechos que adquieren un significado memorable, son efectos sistémicos, obra de sujetos representativos (aquellos individuos sociohistóricos de Sahlins) que personifican una colectividad y por eso incorporan en sus acciones un registro superior; puede ser un jefe de Estado, el representante de un linaje, una iglesia, de modo que en un incidente personal se pueda proyectar una trayectoria de larga duración. Los sujetos representativos condensan o personifican una fuerza mayor, sus actos trascienden, significan en otro orden, de modo que un breve incidente del presente viene a ser desembocadura de un largo pasado o la expresión de una colectividad.

Según el modelo que propone Marshall Sahlins, la construcción de un acontecimiento es un proceso en tres tiempos: un primer momento, de "instanciación", en que se inviste a sujetos específicos para que encarnen categorías culturales; un segundo momento en que están los incidentes, la acción concreta de esos individuos representativos; y finalmente, el momento de la "totalización" de las consecuencias de lo que ha sucedido, por la que el suceso recibe un significado general, de modo que el hecho concreto es asimilado por el sistema, y su significado se entiende en los términos abstractos del sistema.

A primera vista, “Ayotzinapa” ejemplifica la forma más simple del acontecimiento, es decir la reproducción del arquetipo: esto que ocurre ahora (la masacre de Iguala) no es más que una nueva versión de esto otro que ya pasó (la masacre de Tlatelolco). Y en los dos casos sucede lo mismo, el Estado asesina al Pueblo. No estamos diciendo nada nuevo. Es básicamente lo que plantean las pancartas de las protestas, las caricaturas en los periódicos, mucho de lo que se ha escrito en la prensa, en los libros sobre el caso —por eso resultaba familiar, “emblemático”. La asociación que identifica a una matanza como reiteración de la otra es obvia, por supuesto, porque es el desenlace, la forma acabada de la construcción del acontecimiento, como hecho cultural. Ahora bien, si el acontecimiento “Ayotzinapa” se parece al acontecimiento “Tlatelolco” es porque *Tlatelolco* ha sido el patrón, el modelo para la elaboración cultural de *Ayotzinapa*.

En estas páginas nos hemos ocupado básicamente del procedimiento mediante el cual sucedió eso, es decir, la operación de los recursos retóricos y simbólicos que hicieron que los sucesos de Iguala del 26 de septiembre de 2014 se transformaran en el acontecimiento que llamamos “Ayotzinapa”. Hemos tratado de analizar el orden cultural que dio sentido a los hechos, e hizo que el episodio resultase significativo.

Así es la construcción simbólica de cualquier acontecimiento. No obstante, en este caso hay algo singular. El proceso de elaboración cultural del acontecimiento “Ayotzinapa” no sólo es fundamentalmente distinto, sino casi el inverso del proceso de elaboración de la matanza del 2 de octubre de 1968.

Vale la pena detenerse un poco para que quede claro. Cuando se produjo la masacre de Iguala, entre los actores

no había individuos sociohistóricos, es decir, no había sujetos que personificasen una colectividad superior. Ni los normalistas, ni la policía municipal, ni los miembros del grupo criminal de Iguala encarnaban categorías culturales inmediatamente reconocibles, no eran sujetos representativos —y por lo tanto sus acciones no tenían una carga simbólica inmediatamente identificable para cualquiera.

Sin embargo, el modo en que la noticia apareció en los medios permitió que fuese muy pronto asimilada a una posibilidad específica del repertorio cultural mexicano —lo que hemos llamado la cultura antagónica. En esa clave de interpretación, siempre se busca en cualquier masacre la masacre del 2 de octubre: todas son trasunto de la misma violencia. En el caso de Iguala, incluso en la confusión de los primeros días, la identificación se impuso de manera casi automática. La semejanza saltaba a la vista, no hacía falta saber más detalles, ningún detalle en realidad, ni era necesario explicar casi nada —más bien, pudo imponerse la identificación *precisamente* porque se desconocían los detalles del caso. Para verlo bastaba señalar el trazo mínimo, el más abstracto, que sintetiza el modelo: el Estado mató estudiantes.

Así, se produjo un fenómeno excepcional: el sentido general de los sucesos se entendió antes de que se hubiese asignado un valor simbólico a los actores; se entendió el significado de los hechos antes de saber qué había sucedido; se pudo ver la escenificación simbólica del crimen antes que la escena del crimen. Puesto en términos de Sahlins, en el caso de Ayotzinapa, la totalización del acontecimiento precedió a la instanciación. Se sabía el significado de lo que había sucedido antes de que se supiera concretamente qué había sucedido.

No es una cuestión académica: afecta el modo en que se recuerdan los hechos, el modo en que se explican, y finalmente afecta el modo en que aparecen en el espacio público. Y tiene repercusiones que llegan lejos.

Veamos. El significado del episodio se conoce de antemano, y corresponde a uno de los grandes motivos de la cultura antagónica: desde las primeras semanas, Ayotzinapa es un análogo de Tlatelolco. Pero para preservar ese significado, que es el motor de la indignación, hace falta modificar los hechos, ajustarlos, transfigurarlos de modo que efectivamente sean reproducción de Tlatelolco. Los hechos del 2 de octubre de 1968 y los del 26 de septiembre de 2014 son muy distintos, corresponden a configuraciones distintas, de modo que sólo se pueden equiparar en abstracto, sólo si se omiten todos los detalles concretos, y se descontextualiza lo que sucedió aquella noche en Iguala.

El primer indicio de esa descontextualización es el nombre mismo con que se identifica el acontecimiento. A diferencia de prácticamente todas las masacres anteriores (desde Acteal, Aguas Blancas y Atenco hasta Boca del Río, Cadereyta o San Fernando, o Tlatelolco), la masacre de Iguala no se bautizó por el lugar en que ocurrió, sino por el origen de algunas de las víctimas. Y la asociación entre los hechos y el nombre adquirió tal fuerza que se hizo habitual referirse a los sucedido “en Ayotzinapa”.

La descontextualización también significa eliminar los rasgos concretos de las víctimas, reducir la importancia de algunas, o eliminarlas por completo del recuerdo, y por otra parte hacer de los normalistas réplicas del “verdadero estudiante”. No es un problema moral, sino práctico, porque significa la exigencia de dejar fuera de cualquier investigación la organización y el funcionamiento concreto de las es-

cuelas normales rurales, y de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en particular, y significa también transformar los acontecimientos en una protesta política.

De modo análogo, significa también restar importancia a los criminales, llevarlos a un segundo plano (en el extremo, incluso negar su existencia), para resaltar la importancia de los agentes de la fuerza pública —responsables por lo que hicieron y por lo que no hicieron igualmente. Y significa finalmente sustituir el hecho concreto del Estado mexicano por una imagen monolítica, vertical, de racionalidad indudable, que puede identificarse con la voluntad del presidente.

La construcción del acontecimiento "Ayotzinapa" supone también, de manera fundamental, trasladar los sucesos al campo político —entiéndase, puramente político.<sup>1</sup> Es decir, sacarlos del contexto de la "guerra entre los cárteles", en que los puso el primer relato de la PGR. El movimiento implica que hay que buscar en otra parte a los "verdaderos responsables", y el mecanismo básico para eso consiste en agitar la suspicacia: "no sabemos si alguien más". Otra vez, eso tiene consecuencias. Porque una vez que la sospecha adquiere carta de naturaleza, una vez que arraiga la convicción de que hay "alguien más", la investigación oficial queda descalificada de antemano: como mucho puede producir culpables menores o inventados. A partir de entonces, la idea de los "verdaderos responsables" es inmune a la evidencia, imposible de refutar. No importa cuántos ni quiénes puedan ser investigados, procesados, ni con qué pruebas, puesto que siempre quedará la sospecha de que había "alguien más", a quien se quiere encubrir con las imputaciones. Y en el contexto de la cultura antagónica, solamente hace falta plantear la pregunta para escuchar la acusa-

ción, para que la falta de pruebas se convierta en evidencia del encubrimiento.

El hecho de que se conozca de antemano el sentido del acontecimiento significa también que los supuestos de la cultura antagónica se confirman conforme se desarrollan las investigaciones del caso y se averigua más sobre lo que pasó. Es inevitable: si se sabe que el Estado es el culpable, no sólo se evapora cualquier credibilidad posible de la investigación oficial, sino que cualquier otra versión resulta verosímil, por el simple hecho de contradecir las conclusiones del gobierno, de tal suerte que la "verdad" sólo puede ser aquello que corrobore lo que se sospechaba desde un principio.

La construcción del acontecimiento en los términos de la cultura antagónica se articula obviamente a partir de una dicotomía. Sus elaboraciones producen reflejos invertidos, basados en el binomio moral del Estado y el Pueblo como categorías culturales; por eso sus imágenes son simétricas: el estudiante martirizado, el gobierno represor. Ayotzinapa es sólo un episodio más en una larga serie que representa la vida pública como lucha.

En suma, el orden cultural transformó los sucesos de Iguala en el acontecimiento que se identifica como "Ayotzinapa", y les asignó un sentido claro, indudable, que se entiende sin dificultad, y que remite a la historia nacional —con lo cual condensa además diferentes registros culturales: la masacre bíblica de los inocentes, el pueblo mártir, la redención por los justos sufrientes, los Niños Héroes, la insurgencia.<sup>2</sup> El producto final de ese proceso fue, por supuesto, una nueva escenificación de la masacre de Tlatelolco. El mismo reparto, la misma trama: el Estado reprime al Pueblo.<sup>3</sup>

Nos interesa subrayar que el mecanismo mediante el que se construyó el acontecimiento garantiza que ése sea el resultado, forzosamente. Si se conoce de antemano el significado de los hechos, el orden cultural determina la explicación: de antemano se descarta, se desestima o se minimiza cualquier dato que pudiera contradecir el esquema de interpretación de la cultura antagónica. Sólo así puede preservarse el sentido del acontecimiento como reiteración del 2 de octubre, mediante un elaborado silogismo que empieza por la conclusión y termina con la premisa —que son, en realidad, una sola y la misma cosa.

Dicho en menos palabras, la cultura antagónica hace que la asociación entre las masacres de Iguala y de Tlatelolco sea intuitiva, de sentido común, pero la razón por la cual se parecen como acontecimientos es que una se construyó a imagen y semejanza de la otra. En una frase, equiparar los *sucesos* de Tlatelolco e Iguala es un automatismo, pero equiparar los *acontecimientos* de “Tlatelolco” y “Ayotzinapa” es una tautología.

El secuestro, la desaparición de más de 40 jóvenes tendría que ser motivo de indignación en sí misma. En el contexto de la “guerra contra el crimen organizado” no suele ser así. El enorme peso que adquirió el acontecimiento en la vida pública obedeció en buena medida a la elaboración simbólica que permitió que se viese como expresión concreta de uno de los relatos fundamentales del orden cultural: la abstracción épica del pueblo insurgente se materializó en un grupo de muchachos: con nombres, rostros, historias, que habían sido asesinados.

No sólo eso, desde luego. No es fácil saber qué otros factores intervinieron también ni con qué importancia. Proponemos una conjetura, una idea casi sólo especulativa. El

hecho básico en la sociedad mexicana de esos años era la violencia. En 2014 eran ya siete años de tener en titulares todos los días asesinatos, masacres, noticias de cuerpos torturados, mutilados, decapitados, en un despliegue de crueldad sin parangón en el pasado reciente. El impacto emocional de esa violencia acumulada tenía que encontrar una vía de expresión —más allá de las manifestaciones privadas de ira, miedo, impotencia.

Acaso la fórmula sea inexacta, pero parece razonable pensar que fuese necesaria alguna forma de duelo colectivo por tanta muerte. Ahora bien, ese duelo no había sido posible porque la violencia se había adscrito directamente al crimen organizado, en el entendido de que eran criminales los asesinos, pero también las víctimas —tanto así que era posible incluso que se festejasen las muertes.<sup>4</sup> Es decir, resultaba imposible un duelo en el espacio público porque era imposible sentir piedad por las víctimas. La masacre de Iguala ofreció súbitamente la oportunidad de un duelo colectivo, lamentar tanta violencia, porque hizo que fuese posible compadecerse de las víctimas —y que esas víctimas pudiesen representar a todas las víctimas: “Todos somos Ayotzinapa.” Por eso también era tan importante que los muchachos siguiesen siendo sólo víctimas, perfectamente inocentes.

En un aparte, vale la pena mencionar un texto que se publicó con motivo de las primeras manifestaciones de protesta, el 27 de octubre de 2014: “Nosotras no somos Ayotzinapa”.<sup>5</sup> Importa entre otras cosas porque pone en perspectiva una de las vetas en la construcción del acontecimiento. El texto, firmado por Dhalia, quería subrayar la diferencia en los recursos simbólicos para expresar solidaridad en casos como el de Iguala, y los muchos en que las víctimas son mujeres: “Yo no soy Ayotzinapa. Lamento romper abrupta-

mente sus románticos #hashtag, pero es necesario dejar en claro desde donde hablo. No soy Ayotzinapa porque no soy pobre, no soy indígena ni campesina y tampoco soy hombre.” Señalaba el abuso de ese empleo engañoso de la primera persona del plural, en contraste con la distancia con que se defienden las causas de las mujeres (“¿Por qué nos convertimos en ELLAS...?”). Y cerraba como sigue: “No todos somos Ayotzi. Ayotzinapa son ellos. Yo no soy Ayotzinapa. Nosotras no somos Ayotzinapa y no creo que sea necesario universalizar desde nuestra lógica inclusiva para compartir la rabia y el clamor de justicia.”

El análisis de ese mecanismo concreto (que acaso tiene su origen en uno de los lemas del 68 francés: “Todos somos judíos alemanes”) sería demasiado largo, y sin duda merece ser tratado aparte.<sup>6</sup> La nota discordante del texto de Dhalia importa también porque apunta también hacia esa necesidad de elaboración pública del dolor, con todos sus matices.

Quizá convenga repetirlo: no sabemos si una versión específica de los sucesos de Iguala es aceptada por la mayor parte de la población, menos aún qué porcentaje de gente piensa una cosa u otra, ni si han cambiado de opinión con el paso del tiempo. Tampoco es lo que nos interesa. Nuestro propósito es más simple y más modesto. Sólo hemos tratado de arrojar alguna luz sobre el lenguaje en que adquirió sentido el acontecimiento “Ayotzinapa”, el modo específico en que se discutió en los medios, en la opinión pública, las frases y las palabras con los que se habló del caso, y que sin lugar a dudas lo asocian con la matanza en la Plaza de las Tres Culturas.

Desde luego, que el hecho de que la matanza de Iguala se haya construido a partir del modelo de la masacre de Tlatelolco no implica que una mayoría de la población crea que

los sucesos del 26 de septiembre de 2014 son una reiteración exacta de 1968 —aunque hay muchas personas que así lo entienden, y no es algo insignificante. En todo caso, nos parece claro que el sistema cultural que hemos llamado la “cultura antagonica” puso el lenguaje, los supuestos, las valoraciones, las expectativas, la configuración a partir de la cual se elaboró y se discutió el tema en el espacio público —un sistema en que figuran las expresiones “Nos faltan 43”, “Ya me cansé”, “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” o “¡Ya supérenlo!”, “la verdad histórica”, “Fue el Estado” y el número 43. Eso significa que, sea cual sea la opinión de una persona, ése es el lenguaje a su disposición para pensar, para enunciar sus apreciaciones.

El problema más serio de todo esto es que la interpretación de la cultura antagonica no sirve para explicar, para entender lo que ocurrió en Iguala en septiembre de 2014. Es posible que esa lectura ofrezca un desahogo, es posible que haya ayudado a aliviar en algo la angustia producida por la exposición sistemática a la violencia extrema, una angustia que no había encontrado un modo de encauzarse en los años anteriores. Es posible que haya servido también para canalizar la indignación, la ira, el profundo disgusto por la situación del país. Nada de eso ayuda a entender lo que pasó.

La masacre de Iguala fue un hecho único, cuya dinámica sólo puede entenderse realmente a partir del orden local. Para comprender el episodio (comprenderlo no sólo como un hecho forense sino como hecho social) haría falta empezar por una descripción mucho más densa, matizada, más compleja, más atenta a los detalles absolutamente singulares. Por ejemplo, sería fundamental de entrada saber el motivo por el que los estudiantes fueron enviados a Iguala, mucho más lejos que Chilpancingo, Chilapa, Tixtla o Zum-

pango, saber cómo estaban organizados esa tarde y con qué propósito concreto, y sobre todo entender el sistema de comunicación o de protesta del que formaba parte esa acción. Y eso significa que habría que preguntar por la normal y su lugar en el sistema político regional, que incluye varias formas de violencia, organizaciones delictivas, grupos de auto-defensa y guerrillas.

No podemos decir nada nuevo al respecto. Otra vez: no es nuestro propósito explicar lo que sucedió, no tenemos recursos para decir nada nuevo sobre ello. Pero sí nos importa señalar que una explicación convincente tendría que incorporar toda la información posible acerca del contexto. Significativamente, en la mayoría de las interpretaciones se hizo lo contrario.

Es verdad que en algunos casos se señala en particular al director de la normal.<sup>7</sup> Pero son pocos en la prensa mexicana los que intentan poner la masacre en el contexto del sistema político de Iguala, de la montaña y la región central de Guerrero, y muy pocos, entre ellos notablemente Guillermo Sheridan, los que tratan de explorar con seriedad el funcionamiento de las normales, la lógica que pudo estar en el origen de los hechos, de la decisión de ir a Iguala.<sup>8</sup> Sin eso, la escuela normal, los estudiantes normalistas, son entidades abstractas, cuyas resonancias no tienen nada que ver ni remotamente con el contexto.

En el proceso de la investigación comienza pronto a mostrarse la operación concreta del sistema político de Iguala: aparece en algunos testimonios, en la lógica de algunas comunicaciones, que muestran un universo de una complejidad que parece inabordable. El problema es que esa complejidad no se presta para la elaboración ideológica en ningún sentido: podría ayudar a que se entendiera me-

jor lo sucedido, pero no permitiría que se le diese ningún significado moral. Y desde luego obligaría a hacer otras preguntas sobre la sociedad de Iguala,<sup>9</sup> sobre el sistema político, sobre la forma concreta del Estado mexicano como hecho histórico. En vez de eso, se buscó situar la masacre en dos contextos parejamente abstractos: el crimen organizado, la represión del Estado.

Ese efecto tiene la expresión “Fue el Estado”. En un sentido, podría haberse entendido como una crítica muy radical y muy sustantiva, que miraba al Estado como hecho, y lo identificaba con la trama informal, ilegal, criminal, del sistema de Iguala. Y hubiera sido una mirada de una originalidad verdaderamente revolucionaria. Pero en la práctica, tal como fue adoptada cuando se hizo de ella un lema, apuntaba hacia el Estado como idea, reducido mediante una sinécdoque al gobierno federal, y a fin de cuentas reducido al presidente de la república como su única encarnación efectiva. Según la expresión de Esteban Salmón, eso significa que el Estado (como idea) es la máscara detrás de la cual se esconde el Estado (como hecho).<sup>10</sup>

Pero avancemos un poco más. El esquema de interpretación que se impuso no sirve para entender la masacre de Iguala, pero eso no significa que carezca de utilidad; al contrario, el repertorio de la cultura antagónica puede ser muy aprovechable para muchas cosas, y expresado en un acontecimiento de la magnitud de “Ayotzinapa”, mucho más. A partir de su vida en el espacio público, “Ayotzinapa” se ha convertido en un inmenso polo de autoridad moral, y por eso un hecho básico del lenguaje político vigente —tanto o más que “Tlatelolco”.

Sólo un ejemplo. En julio de 2015, un grupo de celebridades acudió a “apadrinar” a la siguiente generación de es-

tudiantes de la escuela normal de Ayotzinapa. Participaron Elena Poniatowska, Juan Villoro, Marta Lamas, Luis Hernández Navarro, Héctor Bonilla, Gabriel Retes.<sup>11</sup> Con la excepción de Hernández Navarro, ninguno de ellos se había señalado en particular por su defensa de las normales rurales. Según lo más probable, como el resto de los mexicanos, la mayoría de ellos no habría oído hablar de la normal Raúl Isidro Burgos antes de la masacre de Iguala.

Ese apadrinamiento, por otra parte, no suponía ningún compromiso material, pero era importante. Para la escuela suponía mantener la visibilidad en el espacio público nacional, mejorar su imagen, y para las celebridades era una manera de significar su repudio de la masacre del año anterior, hacer exhibición de su solidaridad con las víctimas y cargarse por eso de autoridad moral.<sup>12</sup> El acto en sí mismo era una consagración de “Ayotzinapa” como acontecimiento: a la vez confería valor simbólico a la escuela, por la masacre, y confería valor simbólico a la masacre, por la presencia de las celebridades.

Es un asunto menor, pero no del todo irrelevante. Las celebridades tienen una función en nuestro espacio público, una función representativa discutible pero absolutamente real. Por eso era importante su presencia allí. Ahora bien, el crédito que se les concede depende en buena medida de su visibilidad en los medios, pero también de su independencia. Y no es del todo fácil hacer exhibición de independencia. Para eso sirve una expresión así de solidaridad con las víctimas de Iguala: la notoriedad del caso hace más notoria su postura, y permite que muestren una actitud crítica en un caso moralmente indudable —de modo que pueden representar el malestar general. También por eso era importante su presencia allí.

Es algo menor, no irrelevante. La función de los intelectuales en México está estrechamente integrada en la cultura antagonica.

Eso hay también en la insistencia con que se recuerda, según en qué tono, la noche de Tlatelolco. En las páginas finales de *El 68 y sus rutas de interpretación*, Héctor Jiménez Guzmán describe cómo, cada diez aniversarios de la masacre de Tlatelolco, se reimprimen las mismas obras, a menudo disfrazadas para hacerlas pasar como si fuesen nuevas:

El fenómeno es recurrente: ante la coyuntura del aniversario, algunos autores buscan la manera de hacerse presentes. Recopilan, editan y ordenan viejos textos. Los retitulan, los actualizan con referencias en torno a acontecimientos más recientes y, en el mejor de los casos, revalúan y reescriben lo dicho en el pasado, a través de breves notas introductorias o epílogos que hacen alusión a las coyunturas en las que aparecen. A veces modifican su estructura narrativa y llegan a incorporar reflexiones nuevas pero que, en esencia, no representan aportaciones significativas en el análisis de los acontecimientos.<sup>13</sup>

Una última reflexión, para concluir. Sahlins argumenta que lo que distingue a un acontecimiento histórico de uno ordinario es que cambia el orden de las cosas. En el orden cultural hay una serie de arquetipos, personajes y situaciones ejemplares, que sirven para explicar las cosas. Anticipan lo que ha de suceder, dicen lo que significa. Ahora bien, los episodios concretos no necesariamente reproducen los estereotipos, los sujetos no se comportan según podría esperarse a partir del relato que sirve de modelo para una situación cualquiera. Las cosas suceden de otra manera, o tienen

otras consecuencias: los reyes no se comportan como reyes, los sacrificios no tienen recompensa, lo que sea. Y entonces puede suceder que se modifique el relato mítico, que surja algo nuevo, puede suceder que el acontecimiento no sea una repetición, o puede ser que cambien las posiciones de los diferentes sujetos en la práctica.

Los sucesos de Iguala del 26 de septiembre de 2014 indudablemente se convirtieron en un acontecimiento, uno nacional, de enorme peso simbólico, pero el procedimiento por el cual adquirieron significado en el orden cultural hizo imposible que lo alterasen: “Ayotzinapa” se construyó justamente para asemejarse a la masacre del 2 de octubre, de modo que no pudo más que confirmar (y fortalecer) la vigencia de la cultura antagonica como sistema interpretativo. “Ayotzinapa” no hizo más que confirmar que en 50 años nada había cambiado.

La idea está en muchos textos de estos años. Epigmenio Ibarra, por ejemplo: “Las pancartas que llevaron los estudiantes en 1968, las consignas que gritaron en las calles [...] fueron las mismas que durante 51 años expresaron a lo largo y ancho del territorio nacional obreros, campesinos, ciudadanas y ciudadanos de todos los oficios y todas las clases sociales.”<sup>14</sup> Las mismas consignas, la misma lucha. Es la idea que permite a Jorge Volpi sostener que ya en el pliego petitorio del movimiento estudiantil de 1968 están contenidas las “consignas [que] podrían inspirar a los jóvenes de hoy a resolver la pesadilla en que se convirtió México”:<sup>15</sup> si entonces se exigía “la libertad de presos políticos”, así hoy se debe “luchar por un sistema de justicia independiente y eficaz”; entonces se clamaba “por la derogación de los delitos de disolución social” como hoy se debe “abrogar la Ley de Seguridad Interior”; entonces se deman-

daba “la desaparición del cuerpo de granaderos”, hoy “son el Ejército y la Marina quienes [...] se han visto involucrados en incontables violaciones de derechos humanos”; entonces se pedía “la destitución de los jefes policiacos responsables de la represión”, lo mismo que hoy “se impone que los miembros de nuestras fuerzas de seguridad que han violado derechos humanos sean enjuiciados y sentenciados”; entonces se quería que “se indemnizara a las víctimas de la represión”, hoy “lo mismo buscan las víctimas de la guerra contra el narco”. Y, desde luego, si entonces se pedía “conocer la verdad sobre la represión”, así hoy hace falta “conocer la verdad de la guerra contra el narco”.

Seguramente es obvio lo que nos interesa señalar: los dos momentos que Volpi presenta como análogos no tienen nada que ver el uno con el otro. Las comparaciones con las que pretende ilustrar semejanzas sirven solamente para revelar profundas diferencias. No podía ser de otro modo: fuera de su contexto histórico, las demandas del pliego peticionario de 68 no tienen, no pueden tener sentido —mucho menos medio siglo después de su publicación. Precisamente por eso llama tanto la atención el argumento; porque no es que las diferencias entre los dos momentos históricos le resulten invisibles al autor, no es que se diga que el México de 1968 y el de 2018 son idénticos en todo sentido, sino que esas diferencias —concretas, históricas— no importan.

Acaso sea ésa la consecuencia más seria de la cultura antagonica: que todas las características específicas que distinguen una masacre de otra, un periodo histórico de otro, resultan intrascendentes, ficticias, despreciables. Es grave porque significa que las personas, los sucesos, los hechos que configuran a México tal como concretamente existe son sencillamente sombras sobre el muro, reflejos de otra

cosa, que no es sino aquella lucha, que es siempre la misma lucha, entre el Estado y el Pueblo.

Y así, nada cambia, "la lucha sigue": aquellos estudiantes, estos estudiantes; aquel Estado, este Estado; aquel México, este México. En ese sentido, Tlatelolco sí es, como se ha dicho más de una vez, una noche interminable: pero no es el país el que no ha cambiado en el último medio siglo, sino los instrumentos para interpretarlo, lo que no ha cambiado es nuestro orden cultural. Y pagamos las consecuencias. El resultado es que no entendemos a los estudiantes normalistas ni al Estado, ni a Iguala ni a Ayotzinapa. Mientras eso no cambie, seguirá siendo cierto que en México, si se nos permite decirlo así, las noches que serán y las que han sido son una sola.

*Odradek es la forma que  
las cosas adoptan en el olvido.  
A saber: están desfiguradas*

**WALTER BENJAMIN**

Incluimos únicamente libros y artículos académicos, o relativamente extensos, que aparecen citados en las notas. Aparte de eso consultamos prensa periódica, fundamentalmente: *La Jornada*, *Reforma*, *Proceso*, *El Universal*, *Animal Político*, *El País*.

Aguayo, Sergio, *De Tlatelolco a Ayotzinapa*, México, Ediciones Proceso, 2015.

Aguilar Mora, Manuel y Claudio Albertani (coords.), *La noche de Iguala y el despertar de México*, México, Juan Pablos Editor, 2015.

Álvarez Junco, José, *A las barricadas. Cultura, identidad y movilización política*, Madrid, Ediciones Complutense, 2019.

Ascencio, Esteban, *1968: Más allá del mito*, México, Laberinto Ediciones, 2018.

Azuela, Antonio, *El derecho en movimiento. Once ensayos de sociología jurídica*, México, Tirant lo Blanc, 2019.

Beristain, Carlos Martín, *El tiempo de Ayotzinapa*, México, Akal, 2017.

Braun, Herbert, *The Assassination of Gaitan. Public Life and Urban Violence in Colombia*, Madison, The University of Wisconsin Press, 1985.

Bronner, Gerald, *La démocratie des crédules*, París; Presses Universitaires de France, 2013.

Burdeau, Georges, *La politique au pays des merveilles*, París, Presses Universitaires de France, 2015.

- Caro Baroja, Julio, *Terror y terrorismo*, Madrid, Plaza & Janés, 1989.
- Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, *Informe final: Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa*, 25 de noviembre de 2018.
- Comisión Nacional de los Derechos Humanos, *Estado de la investigación del "caso Iguala"*, 23 de julio de 2015.
- , *Recomendación n.15VG/2018 "Caso Iguala"*, México, CNDH, 2018.
- , *Reporte de la CNDH entorno [sic] a los hechos y circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa, fue privado de la vida*, México, CNDH, 2016.
- Deas, Malcolm (coord.), *Colombia. Mirando hacia dentro (1930-1960)*, Bogotá, Taurus-Fundación Mapfre, 2015, Historia Contemporánea de Colombia, t. 4.
- Escalante Gonzalbo, Fernando, "Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso", *Nexos*, enero de 2011.
- Fernández Menéndez, Jorge, *La noche de Iguala. Secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero*, México, Cal y Arena, 2018.
- Gibler, John, *Una historia oral de la infamia*, México, Grijalbo-Sur+, 2016.
- González Rodríguez, Sergio, *Los 43 de Iguala. México: verdad y reto de los estudiantes desaparecidos*, México, Anagrama, 2015.
- González, Luis, *El jefe*, Bogotá, Penguin Random House, 2018.
- Grecko, Témoris, *Ayotzinapa. Mentira histórica. Estado de impunidad, impunidad de Estado*, México, Ediciones Proceso, 2016.
- Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, *Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de*

- las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa.*
- , *Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas.*
- Hernández Ramírez, Greco, *La noche interminable: Tlatelolco 2/10/1968*, México, Siglo XXI Editores, 2018.
- Hernández, Anabel, *La verdadera noche de Iguala*, México, Grijalbo, 2017.
- Lomnitz, Claudio (ed.), 1968-2018. *Historia colectiva de medio siglo*, México, UNAM, 2018.
- López Castellanos, Nayar (comp.), *Ayotzinapa: un grito desde la humanidad*, México, Ocean Sur, 2015.
- Ramírez, Ramón, *El movimiento estudiantil de México*, México, Ediciones Era, 1969.
- Rodríguez Munguía, Jacinto, *La otra guerra secreta: los archivos prohibidos de la prensa y el poder*, México, Random House Mondadori, 2007.
- Sahlins, Marshall, *Historical Metaphors and Mythical Realities. Structure in the Early History of the Sandwich Islands Kingdom*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1981.
- , “The Return of the Event, Again”, en *Culture in Practice. Selected Essays*, Nueva York, Zone Books, 2000.
- , *Apologies to Thucydides. Understanding History as Culture and Viceversa*, Chicago, The University of Chicago Press, 2004.
- Sánchez Ferlosio, Rafael, *Babel contra Babel*, Barcelona, Debate, 2016.
- Segovia, Rafael, *La politización del niño mexicano*, México, El Colegio de México, 1975.
- Sheridan, Guillermo, *Paseos por la calle de la amargura y otros rumbos mexicanos*, México, Debate, 2018.

Valenzuela Arce, José Manuel, "1968: los sinuosos caminos de la memoria social", *Revista Mexicana de Sociología*, año 81, núm. 1 (enero-marzo de 2019), pp. 211-224.

VV. AA., *Ayotzinapa. La travesía de las tortugas. La vida de los normalistas antes del 26 de septiembre de 2014*, México, Ediciones Proceso, 2015.

<sup>1</sup> “Laureano Gómez tenía la mágica aptitud de transfigurar hechos, de tejer entre ellos una red tremendista de relaciones según sus hipótesis, dándoles el peso de una denuncia arrasadora.” Plinio Apuleyo Mendoza, “Un intelectual extraviado en la política por el milagro de una calumnia”, Bogotá, *Semana*, 7 de diciembre de 2007, consultado en [www.semana.com/on-line/articulo/un-intelectual-extraviado-politica-milagro-calumnia-plinio-apuleyo-mendoza/87009-3](http://www.semana.com/on-line/articulo/un-intelectual-extraviado-politica-milagro-calumnia-plinio-apuleyo-mendoza/87009-3) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>2</sup> “La II Guerra Mundial hizo inevitable las restricciones económicas y produjo una atmósfera de mucha especulación, propicia para el tipo de escándalo que era la especialidad de su contenedor principal, Gómez. El *affaire* de la Handel, un asunto bizantino de unas acciones holandesas de la cervecería Bavaria, por razones de la guerra ahora bajo control colombiano, era incomprensible para casi todo el mundo, pero involucró al hijo del presidente y grandes sumas en las bolsas, y su propia oscuridad lo hizo interminable. Igual de explotables eran el caso de la Trilladora Tolima y la cuestión de quiénes eran responsables por el homicidio del boxeador apodado *Mamatoco*. Y *El Siglo* ordeñaba todo, si no lo inventaba, hasta la última calumnia.” Malcolm Deas (coord.), *Colombia. Mirando hacia dentro (1930-1960)*, Bogotá, Taurus-Fundación Mapfre, 2015, Historia Contemporánea de Colombia, t. 4 [edición electrónica, formato mobi], p. 38.

<sup>3</sup> La idea de la conspiración tenía un atractivo irresistible. Y de hecho, sigue viva. Todavía en 2018 fue el motivo de una novela entretenida, muy bien tramada, de Luis González, *El jefe*, Bogotá, Penguin Random House, 2018.

<sup>4</sup> *Ibid.*, p. 33.

<sup>5</sup> Herbert Braun, *The Assassination of Gaitan. Public Life and Urban Violence in Colombia*, Madison, The University of Wisconsin Press, 1985, p. 36.

## CAPÍTULO 1. El acontecimiento

<sup>1</sup> Paris Martínez, “Instalan este martes en Segob la comisión presidencial para la verdad y justicia en el caso Ayotzinapa”, *Animal Político*, 15 de enero de 2019, consultado en [www.animalpolitico.com/2019/01/comision-verdad-instalacion-ayotzinapa-segob](http://www.animalpolitico.com/2019/01/comision-verdad-instalacion-ayotzinapa-segob) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>2</sup> No se pensó en comisiones semejantes para masacres de civiles obra de fuerzas federales, policía federal, ejército, marina, como las de Tlatlaya o Tanhuato, por ejemplo. El 30 de junio de 2014, en el municipio de Tlatlaya, Estado de México, fueron muertos 22 presuntos criminales, en un enfrentamiento con el ejército: Mayra Zepeda, “¿Qué ocurrió en Tlatlaya, minuto a minuto, según la CNDH?”, *Animal Político*, 22 de octubre de 2014, consultado en [www.animalpolitico.com/2014/10/la-matanza-del-ejercito-en-tlatlaya-segun-la-cndh](http://www.animalpolitico.com/2014/10/la-matanza-del-ejercito-en-tlatlaya-segun-la-cndh) el 1 de septiembre de 2019; el 22 de mayo de 2015, en la comunidad de Tanhuato, en Michoacán, fueron muertos 42 presuntos criminales, en enfrentamiento con la Policía Federal: “En Tanhuato hubo 22 ejecuciones extrajudiciales, concluye la CNDH”, *Animal Político*, 18 de agosto de 2016, consultado en [www.animalpolitico.com/2016/08/informe-la-cndh-tanhuato-michoacan](http://www.animalpolitico.com/2016/08/informe-la-cndh-tanhuato-michoacan) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>3</sup> La cita completa es la siguiente: “En febrero de 2015 la misma secretaría [de Relaciones Exteriores] firmó un Acuerdo de Asistencia Técnica con la que enviaran a México un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (Grupo) a elaborar un informe sobre lo que había sucedido en Ayotzinapa.” Sergio Aguayo, *De Tlatelolco a Ayotzinapa*, México, Ediciones Proceso, 2015, p. 161.

<sup>4</sup> Una precisión. La Escuela Normal Rural Raúl Isidro Bur-

gos se encuentra en las afueras de la ciudad de Tixtla, capital del municipio homónimo. Suele llamársele Ayotzinapa porque está construida sobre terrenos de la antigua hacienda de Ayotzinapa, sobre los cuales hay también un pequeño poblado, prácticamente absorbido por Tixtla, que también adoptó el nombre de la hacienda. Lo hacemos explícito porque hay al menos otras dos localidades llamadas Ayotzinapa en Guerrero —una en el municipio de Tlapa de Comonfort y otra en el municipio de Zitlala—, lo cual se puede prestar a confusiones. De aquí en adelante, cuando escribimos “Ayotzinapa”, nos referimos a la normal rural ubicada en Tixtla.

<sup>5</sup> Otra vez: no es el único significado posible del hecho, no sabemos si finalmente se fije con ese sentido en la memoria colectiva. Muy bien podría ser que la Fiscalía General presentase una versión nueva, que resultase creíble y que borrarse la identificación con Tlatelolco. Pero en los cuatro años que siguieron a la masacre, esa identificación fue sólida, insistente, muy generalizada. Y en las manifestaciones para conmemorar el 2 de octubre se ha aceptado como cosa natural la identificación de los dos acontecimientos.

<sup>6</sup> Noticieros Televisa, “Galería: así se vivió la marcha para recordar el 2 de octubre de 1968”, Televisa News, consultado en [noticieros.televisa.com/historia/galeria-asi-se-vivio-la-marcha-para-conmemorar-el-2-de-octubre-del-68](https://noticieros.televisa.com/historia/galeria-asi-se-vivio-la-marcha-para-conmemorar-el-2-de-octubre-del-68) el 8 de mayo de 2019.

<sup>7</sup> Laura Castellanos, “El camino del 68 a Ayotzinapa”, *Aristegui Noticias*, 2 de octubre de 2018, consultado en [aristeguinoticias.com/0210/mexico/el-camino-del-68-a-ayotzinapa](https://aristeguinoticias.com/0210/mexico/el-camino-del-68-a-ayotzinapa) el 1 de septiembre de 2019 (el subrayado es nuestro).

<sup>8</sup> Isaac Torres Cruz, “Ayotzinapa y Tlatelolco, casos emblemáticos por saldar: Juan Villoro”, *La Crónica de Hoy*, México, 27 de septiembre de 2018.

<sup>9</sup> La afirmación es muy sorprendente; la recogieron todos los medios. EFE, “El caso de los 43 de Ayotzinapa es ‘peor’ que matanza del 68, dice Poniatowska”, Agencia EFE, 6 de septiembre

de 2018, consultada en [www.efe.com/efe/america/sociedad/caso-de-los-43-ayotzinapa-es-peor-que-matanza-del-68-dice-poniatowska/20000013-3741489](http://www.efe.com/efe/america/sociedad/caso-de-los-43-ayotzinapa-es-peor-que-matanza-del-68-dice-poniatowska/20000013-3741489) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>10</sup> Desde luego, había varios motivos para ello. Para empezar, el hecho de que los normalistas estuviesen, según algunos de los testigos, secuestrando autobuses para trasladarse a la manifestación del 2 de octubre en la Ciudad de México ayudó a establecer la identificación. Pero es más complicado. Hablaremos de eso más adelante.

<sup>11</sup> Según la nota de prensa: “A 51 años de la matanza de Tlatelolco, la marcha en conmemoración por el 2 de octubre unió en sus luchas al Comité 68 y a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, quienes acompañaron la vanguardia del contingente. En el Zócalo, tras marchar por más de una hora, familiares de los normalistas subieron al templete y llamaron a unir las luchas para detener la violencia y generar un ‘cambio real en el país.’” Alberto Evangelista, “Comité del 68 y padres de los 43 normalistas se unen contra la desaparición”, *Milenio*, 3 de octubre de 2019, consultado en [www.milenio.com/politica/comunidad/comite-68-padres-43-normalistas-unen-desapariciones](http://www.milenio.com/politica/comunidad/comite-68-padres-43-normalistas-unen-desapariciones) el 3 de octubre de 2019.

<sup>12</sup> Alejandra Canchola y Pedro Villa y Caña, “¿Cómo cerrar Ayotzinapa si no hemos cerrado el 68?”, *El Universal*, México, 2 de octubre de 2019, consultado en [www.eluniversal.com.mx/nacion/como-cerrar-ayotzinapa-si-no-se-ha-cerrado-el-68](http://www.eluniversal.com.mx/nacion/como-cerrar-ayotzinapa-si-no-se-ha-cerrado-el-68) el 4 de octubre de 2019.

<sup>13</sup> Maciek Wisniewski, “Ayotzinapa: sólo pregunto”, *La Jornada*, México, 4 de octubre de 2019, consultado en [www.jornada.com.mx/2019/10/04/opinion/020a1pol](http://www.jornada.com.mx/2019/10/04/opinion/020a1pol) el 4 de octubre de 2019.

<sup>14</sup> Cámara de Diputados, LXIV Legislatura, Boletín 2 359, 4 de octubre de 2019, consultado en [www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Octubre/04/2359-Por-la-Paz-Nunca-mas-Tlatelolco-nunca-mas-Iguala-tema-de-un-foro-realizado-en-la-Camara-de-Diputados](http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Boletines/2019/Octubre/04/2359-Por-la-Paz-Nunca-mas-Tlatelolco-nunca-mas-Iguala-tema-de-un-foro-realizado-en-la-Camara-de-Diputados) el 5 de octubre de 2019.

<sup>15</sup> En lo que sigue nos apoyamos básicamente en las ideas de Marshall Sahlins, que se ha ocupado del tema en varias ocasiones: Marshall Sahlins, *Historical Metaphors and Mythical Realities. Structure in the Early History of the Sandwich Islands Kingdom*, Ann Arbor, The University of Michigan Press, 1981; Sahlins, "The Return of the Event, Again", en *Culture in Practice. Selected Essays*, Nueva York, Zone Books, 2000, y Sahlins, *Apolo-gies to Thucydides. Understanding History as Culture and Vice-versa*, Chicago, The University of Chicago Press, 2004.

<sup>16</sup> Y es algo que casi siempre sucede después. De eso se tratan las páginas memorables de *La cartuja de Parma*: metido en ella, Fabrizio del Dongo no sabe, no puede saber en realidad, que está en la batalla de Waterloo.

<sup>17</sup> M. Sahlins, "The Return of the Event, Again", *op. cit.*, pp. 342 y ss.

<sup>18</sup> Se entiende que el orden cultural contempla también el conflicto, incluso la guerra: algo reproduce la estructura cultural si las cosas suceden como se supone que deben suceder.

<sup>19</sup> M. Sahlins, "The Return of the Event, Again", *op. cit.*, p. 302.

<sup>20</sup> Seguramente no sobra aclarar que esa estructura cultural no es un edificio hecho de una vez, no una construcción acabada, completa, sino una trama de significados que evoluciona con el régimen a partir de una matriz básica que se dibuja en los primeros diez años.

## CAPÍTULO 2. El transcurso del tiempo

<sup>1</sup> Un ejemplo superficial pero elocuente: según una encuesta nacional comisionada por la Cámara de Diputados en diciembre de 2014, entre las personas que se habían enterado de los sucesos de Iguala, tres cuartas partes jamás habían oído hablar de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa antes de septiembre. Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública, *Encuesta nacional de opinión pública: caso de la Normal Rural Ayotzinapa*, diciembre de 2014 (sin día), consultado en [www55](http://www55).

diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-Nacional-de-Opinion-Publica-Caso-de-la-Normal-Rural-Ayotzinapa el 1 de septiembre de 2019.

<sup>2</sup> Rolando Aguilar, “Mueren 6 personas en tiroteos en Iguala”, *Excélsior*, México, 28 de septiembre de 2014; Redacción, “Reportan 8 muertos en ataques en Iguala”, *Reforma*, México, 27 de septiembre de 2014, y Sergio Ocampo, “Muerto, un alumno de Ayotzinapa”, *La Jornada*, México, 27 de septiembre de 2014.

<sup>3</sup> Jesús Guerrero, “Atribuyen a policías crímenes en Iguala”, *Reforma*, México, 29 de septiembre de 2014, y Sergio Ocampo, “Policías balean a normalistas de Ayotzinapa en Iguala; 5 muertos”, *La Jornada*, México, 28 de septiembre de 2014.

<sup>4</sup> No deja de llamar la atención que esta versión provenía principalmente de declaraciones del presidente municipal, José Luis Abarca. Sergio Ocampo, “Alguien contrató a los *ayotzinapos* para que vinieran a ‘hacer *desmadres*’, dice alcalde”, *La Jornada*, México, 28 de septiembre de 2014.

<sup>5</sup> Gustavo Castillo García, “Atrae PGR la investigación y envía más personal para identificar cuerpos de fosas”, *La Jornada*, México, 6 de octubre de 2014.

<sup>6</sup> De hecho, según el entonces gobernador de Guerrero, la atracción del caso por parte de la PGR era en sí misma sospechosa: “Yo siempre percibí un extraño interés de la autoridad federal por alejar al gobierno de Guerrero de las pesquisas [...] Sin duda, ya preparaban su acometida.” Ángel Aguirre Rivero, “Caso Ayotzinapa: luchar contra el olvido”, *Milenio*, México, 14 de septiembre de 2019, consultado en [www.milenio.com/opinion/angel-aguirre-rivero/columna-angel-aguirre-rivero/caso-ayotzinapa-luchar-contr-el-olvido](http://www.milenio.com/opinion/angel-aguirre-rivero/columna-angel-aguirre-rivero/caso-ayotzinapa-luchar-contr-el-olvido) el 6 de octubre de 2019.

<sup>7</sup> Una encuesta de Parametría reporta que ya en octubre de 2014, 92% de los mexicanos conocían de los hechos ocurridos en Iguala el 26 y el 27 de septiembre, y para agosto del año siguiente la cifra se había elevado a 97%. En otras palabras, la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, que antes de los sucesos en

Iguala era prácticamente desconocida para la opinión pública mexicana, pasó a formar parte de un acontecimiento del que prácticamente todos los mexicanos sabían. Véase Redacción, "Mayoría de mexicanos no cree en la versión de la PGR sobre el caso Ayotzinapa: Parametría", *Animal Político*, 13 de septiembre de 2015, consultado en [www.animalpolitico.com/2015/09/mayoria-de-mexicanos-no-cree-en-la-version-de-la-pgr-sobre-el-caso-ayotzinapa-parametria](http://www.animalpolitico.com/2015/09/mayoria-de-mexicanos-no-cree-en-la-version-de-la-pgr-sobre-el-caso-ayotzinapa-parametria) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>8</sup> Redacción, "Ya me cansé. Murillo Karam explica esa frase tres días después", *Animal Político*, 11 de noviembre de 2014, consultado en [www.animalpolitico.com/2014/11/ya-canse-murillo-karam-explica-esa-frase-tres-dias-despues](http://www.animalpolitico.com/2014/11/ya-canse-murillo-karam-explica-esa-frase-tres-dias-despues) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>9</sup> José David Estrada *et al.*, "Queman la puerta de Palacio Nacional", *Reforma*, México, 9 de noviembre de 2014.

<sup>10</sup> Arturo Ángel, "111 detenidos por el ataque a los normalistas, ¿quiénes son?", *Animal Político*, 21 de septiembre de 2015, consultado en [www.animalpolitico.com/2015/09/quienes-son-los-111-detenidos-del-caso-ayotzinapa](http://www.animalpolitico.com/2015/09/quienes-son-los-111-detenidos-del-caso-ayotzinapa) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>11</sup> Un normalista de Ayotzinapa, por dar un ejemplo, se expresó, días después de la masacre, en los siguientes términos: "No nos vengan con que fue culpa del crimen organizado. Nuestros compañeros fueron asesinados, levantados y desaparecidos por fuerzas municipales." A renglón seguido: "Fueron detenidos por el Estado, el Estado debe entregarlos." Citado por Benito Jiménez y Antonio Baranda, "Marchan en el país", *Reforma*, México, 9 de octubre de 2014.

<sup>12</sup> Redacción, "Peña Nieto ya sabe qué sucedió con los muchachos, sostiene López Obrador", *La Jornada*, México, 25 de octubre de 2014.

<sup>13</sup> Rosa Elvira Vargas, "Llama Peña a un cambio de fondo para 'superar la etapa de dolor'", *La Jornada*, México, 5 de diciembre de 2014.

<sup>14</sup> Redacción, “Ponen argentinos en duda versión”, *Reforma*, México, 8 de diciembre de 2014.

<sup>15</sup> El documento, titulado “Científicos desmienten a PGR”, consta de 23 páginas —de las cuales nueve son texto; el resto es bibliografía y apéndices visuales— y no implicó trabajo de campo. El escrito está disponible en [es.scribd.com/document/249920256/Estudio-Cientifico-asegura-que-es-imposible-la-cremacion-de-43-normalistas-en-el-basurero-de-Cocula#download](https://es.scribd.com/document/249920256/Estudio-Cientifico-asegura-que-es-imposible-la-cremacion-de-43-normalistas-en-el-basurero-de-Cocula#download), consultado el 1 de septiembre de 2019.

<sup>16</sup> Había razones para suponer que su análisis no era del todo incuestionable. Esteban Illades escribe en su libro sobre el caso Iguala: “Algo que vale la pena resaltar es que las piras funerarias indias [a partir de las cuales Montemayor basó sus cálculos] quemaban a las personas uno por uno, a diferencia de lo supuestamente sucedido en Cocula, cuando los cuerpos de los estudiantes fueron acomodados para formar una sola estructura. También cabe decir que no explicó claramente cómo dio con los números” (*La noche más triste*, México, Grijalbo, 2015, p. 145, n. 21).

<sup>17</sup> Redacción, “Refutan teoría de la incineración en Cocula”, *Reforma*, México, 12 de diciembre de 2014; Alfredo Méndez, “Científicos refutan versión de la PGR sobre calcinación de los normalistas”, *La Jornada*, México, 12 de diciembre de 2014, y Gonzalo Ortuño, “Versión de PGR sobre incendio en Cocula es una fantasía: científicos mexicanos”, *Animal Político*, 12 de diciembre de 2014, consultado en [www.animalpolitico.com/2014/12/version-de-pgr-sobre-incendio-en-cocula-es-una-fantasia-investigadores-cientificos](http://www.animalpolitico.com/2014/12/version-de-pgr-sobre-incendio-en-cocula-es-una-fantasia-investigadores-cientificos) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>18</sup> Gustavo Castillo García, “Guerreros Unidos asesinó a los 43 normalistas: Murillo”, *La Jornada*, México, 29 de enero de 2015.

<sup>19</sup> En la nota misma en *La Jornada*, en los subtítulos, las comillas sirven para poner en duda la declaración: “Presenta ‘la verdad histórica’ del caso Iguala, con base en pruebas científicas.”

<sup>20</sup> Redacción, “Deja Murillo PGR; Ramírez Marín, Sedatu”, *Reforma*, México, 27 de febrero de 2015.

<sup>21</sup> Alfredo Méndez, “Sube PGR a internet versión pública del caso”, *La Jornada*, México, 12 de octubre de 2015.

<sup>22</sup> “La Procuraduría General de la República (PGR) confirmó pericialmente que uno de sus detenidos clave para sostener su hipótesis de que los normalistas de Ayotzinapa fueron incinerados y arrojados a un río, Patricio Reyes Landa, alias *el Pato*, tenía huellas de tortura tras su captura. Pese a ello, el Ministerio Público validó su declaración y lo consignó.” Arturo Ángel, “Expediente Ayotzinapa: dictamen de la PGR revela indicios de tortura contra detenido clave”, *Animal Político*, 1 de octubre de 2015, consultado en [www.animalpolitico.com/2015/10/dictamen-de-pgr-revela-indicios-de-tortura-contra-detenido-clave-del-caso-ayotzinapa](http://www.animalpolitico.com/2015/10/dictamen-de-pgr-revela-indicios-de-tortura-contra-detenido-clave-del-caso-ayotzinapa) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>23</sup> Un Grupo Colegiado de Expertos en Materia de Fuego entregó a la PGR un tercer peritaje en abril de 2016; corroboraba los primeros resultados de la investigación. Pero la duda ya no se podía eliminar. “Sí hubo fuego de grandes dimensiones en Cocula: grupo de expertos”, *Milenio*, México, 1 de abril de 2016.

<sup>24</sup> El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dice literalmente: “persisten dudas sobre el posible involucramiento de militares —incluso algunos del 27 Batallón en Iguala— con Guerreros Unidos, esta situación requiere una mayor profundidad en la investigación”, CIDH, *Informe final: Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto Ayotzinapa*, 25 de noviembre de 2018, p. 90.

<sup>25</sup> Se habla de un antiguo militar, alias *El Satánico*, que había recibido entrenamiento en Guatemala, que no es posible identificar, y se dice que “se estima relevante una mayor investigación que determine la identidad y posible involucramiento de algunos miembros del 27 Batallón con Guerreros Unidos...”, *ibid.*, p. 92.

<sup>26</sup> En general, y como es perfectamente lógico, la prensa in-

ternacional tendió más a declaraciones categóricas, a exageraciones que apelaban a los lugares comunes de, por así decirlo, el México bárbaro. Algunos ejemplos son casi cómicos. Francisco Goldman, por elegir uno, reportaba para *The New Yorker* a inicios de 2015 que, “en diciembre, una revolución parecía posible en México”, “Crisis in Mexico: Who is Really Responsible for the Missing Forty-Three”, *The New Yorker*, 7 de febrero de 2015, consultado en [www.newyorker.com/news/news-desk/crisis-mexico-really-responsible-missing-forty-three](http://www.newyorker.com/news/news-desk/crisis-mexico-really-responsible-missing-forty-three) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>27</sup> Sólo algunos ejemplos: Anita Chabria, “Parents of Missing Mexican Students Tour US to Push for New Investigation”, *The Guardian*, Londres, 10 de abril de 2015; Jo Tuckmann, “Investigation into Mexico’s Missing Students Dismisses Official Story”, *The Guardian*, Londres, 6 de septiembre de 2015; AFP, “Etudiants disparus au Mexique: des Experts internationaux dénoncent l’obstruction des autorités”, *Le Monde*, París, 25 de abril de 2016; Frederic Saliba, “Deux ans après, la disparition de 43 étudiants au Mexique reste un mystère”, *Le Monde*, París, 27 de septiembre de 2016.

<sup>28</sup> En 2018, con más de cien procesados por el caso, Amnistía Internacional denuncia que el crimen sigue impune: el gobierno mexicano, dice AI, “lleva cuatro años tratando de ocultar la verdad” y exige que se integre una comisión de investigación “para descubrir la verdad de lo que sucedió”; es un comunicado de 400 palabras en que la palabra *verdad* aparece seis veces (“La disparition des 43 étudiants au Mexique reste impunie”, Amnistía Internacional, 27 de septiembre de 2018, consultado en [www.amnesty.fr/justice-internationale-et-impunite/actualites/la-disparition-des-43-etudiants-au-mexique-reste-impunie](http://www.amnesty.fr/justice-internationale-et-impunite/actualites/la-disparition-des-43-etudiants-au-mexique-reste-impunie) el 1 de septiembre de 2019).

### CAPÍTULO 3. La cultura antagónica

<sup>1</sup> Redacción, “Debaten sobre movimiento estudiantil”, *Reforma*, México, 2 de octubre de 2014.

<sup>2</sup> Abel Barrera, “Del 2 de octubre al 26 de septiembre”, *La Jornada*, México, 3 de octubre de 2014.

<sup>3</sup> Lourdes Zambrano, “Repasa Meyer la tragedia mexicana”, *Reforma*, México, 12 de octubre de 2014.

<sup>4</sup> Guadalupe Irizar, “La condena internacional del caso Iguala”, *Reforma*, México, 13 de octubre de 2014.

<sup>5</sup> “Las masacres de Tlatelolco y Ayotzinapa. Similitudes, diferencias y consecuencias”, 17 de octubre de 2014, consultado en [www.youtube.com/watch?v=Qs1u4m9ny\\_o](http://www.youtube.com/watch?v=Qs1u4m9ny_o) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>6</sup> Rafael Segovia, *La politización del niño mexicano*, México, El Colegio de México, 1975, p. 52.

<sup>7</sup> Es significativo que el estudio biográfico más “político” de Juárez, que modifica mucho su imagen, el de Brian Hamnett (*Juarez*, Londres, Longman, 1994), no haya sido traducido en México. Sólo en 2006 se publicó una versión en español (Brian Hamnett, *Juárez. El benemérito de las Américas*, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006), pero en España.

<sup>8</sup> José Álvarez Junco, “Magia y ética en la retórica política”, en *A las barricadas. Cultura, identidad y movilización política*, Madrid, Ediciones Complutense, 2019, p. 123 y *passim*.

<sup>9</sup> “El llamado a la historia rinde sus frutos y con ello acude tanto a consolidar la nacionalidad como a legitimar a los gobiernos que la expresan”, R. Segovia, *op. cit.*, pp. 93, 95.

<sup>10</sup> Por supuesto, existe también una veta contrarrevolucionaria, desde los años veinte, pero sólo adquiere verdadera relevancia en el espacio público, como alternativa de crítica a los gobiernos revolucionarios a partir de los años noventa, cuando se emprende desde el gobierno la demolición de algunos de los pilares de la mitología del régimen.

#### CAPÍTULO 4. Tlatelolco como modelo

<sup>1</sup> *Sexto informe de gobierno del presidente Adolfo López Mateos*, consultado en [www.biblioteca.tv/artman2/publish/1964\\_](http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1964_)

91/Sexto\_Informe\_de\_Gobierno\_del\_presidente\_Adolfo\_L\_1234.shtml el 1 de septiembre de 2019.

<sup>2</sup> *Discurso de toma de protesta como presidente de Gustavo Díaz Ordaz*, consultado en [www.biblioteca.tv/artman2/publish/1964\\_91/Discurso\\_de\\_Toma\\_de\\_Protesta\\_como\\_Presidente\\_de\\_Gu\\_1235.shtml](http://www.biblioteca.tv/artman2/publish/1964_91/Discurso_de_Toma_de_Protesta_como_Presidente_de_Gu_1235.shtml) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>3</sup> La consagración definitiva: en 2018, para conmemorar el quincuagésimo aniversario de la masacre, se inscribió con letras de oro, en el Muro de Honor del salón de sesiones de la Cámara de Diputados, la frase “Al movimiento estudiantil de 1968”.

<sup>4</sup> Las cifras exactas son 14.66% para los alumnos de la clase obrera y 2.85% para los provenientes del campesinado. El 82.49% restante pertenecía a la clase “burguesa”. Ramón Ramírez, *El movimiento estudiantil de México*, México, Ediciones Era, 1969, p. 29.

<sup>5</sup> Las justificaciones de Ramírez, por supuesto, se derivan de la teoría marxista y, por lo tanto, son básicamente un intento por integrar a los estudiantes a la clase trabajadora. Dejamos en manos del lector el juicio del argumento: “Subjetivamente, [la incorporación del estudiantado] a la clase trabajadora está justificada por la dolorosa convicción que los estudiantes de las diversas escuelas o facultades tienen al comprobar que las actuales relaciones de producción [...] ofrecen profesionalmente perspectivas poco halagüeñas.” *Loc. cit.* y ss.

<sup>6</sup> Esteban Ascencio, *1968: más allá del mito*, México, Laberinto Ediciones, 2018, p. 28.

<sup>7</sup> *Ibid.*, p. 46.

<sup>8</sup> Greco Hernández Ramírez, *La noche interminable: Tlatelolco 2/10/1968*, México, Siglo XXI Editores, 2018, p. 46.

<sup>9</sup> *Ibid.*, p. 66.

<sup>10</sup> José Manuel Valenzuela Arce, “1968: los sinuosos caminos de la memoria social”, *Revista Mexicana de Sociología*, año 81, núm. 1 (enero-marzo de 2019), p. 214.

<sup>11</sup> Sahlins, de hecho, ofrece un ejemplo perfectamente aná-

logo a éste en una (brevísimas) discusión sobre la complejidad temporal de un acontecimiento: “Uno puede imaginarse con facilidad otras instancias históricas, instancias de martirio, por ejemplo, en que el acto, por así decirlo, crea la instancia-ción y, al mismo tiempo, la totalización. Pero el mismo ejemplo sugeriría el valor de separar analíticamente los tres momentos del acontecimiento.” M. Sahllins, “The Return of the Event, Again”, *op. cit.*, p. 351, n. 34.

<sup>12</sup> Sobra decir que la interpretación oficial de los hechos muy pronto resultó irrelevante. La idea de una conjura comunista para desestabilizar al país pretendía poner al movimiento en el contexto de las guerras nacionales —no tuvo ninguna credibilidad.

<sup>13</sup> Carlos Monsiváis, *El 68. La tradición de la resistencia*, México, Ediciones Era, 2008, p. 237.

<sup>14</sup> E. Ascencio, *op. cit.*, p. 43.

<sup>15</sup> *Ibid.*, p. 177.

<sup>16</sup> *Ibid.*, p. 51.

<sup>17</sup> *Ibid.*, p. 172.

<sup>18</sup> La historia de cómo esta interpretación de la masacre de Tlatelolco se estableció como dominante tiene su interés, pero está más allá de nuestros propósitos. Véase Héctor Jiménez Guzmán, *El 68 y sus rutas de interpretación*, México, FCE, 2018, *passim*.

<sup>19</sup> “Las masacres de Tlatelolco y Ayotzinapa. Similitudes, diferencias y consecuencias”, 17 de octubre de 2014, consultado en [www.youtube.com/watch?v=Q5tU4m9ny\\_o](http://www.youtube.com/watch?v=Q5tU4m9ny_o) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>20</sup> La mayoría lo eran, pero, según los propios documentos de Doyle, diez de las víctimas —es decir casi la cuarta parte— estaban fuera del rango de edad que establece la Ley del Instituto Mexicano de la Juventud como jóvenes (12-29 años), por tomar un criterio conocido: Leonardo Pérez González tenía 30 años de edad; José Ignacio Caballero González tenía 36; Gloria Valencia Lara de González, 38; Octavio Rodríguez Cid, 45;

Antonio Solórzano Gaona, 47; Jorge Ramírez Gómez, 59; Agustina Matus de Campos, 60; Reynaldo Monzalvo Soto tenía 68 años; y dos víctimas no identificadas tenían 30 y 35. Véase Kate Doyle (ed.), “Los muertos de Tlatelolco”, *The National Security Archive*, 1 de octubre de 2006, consultado en [nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB201/muertos.htm](http://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB201/muertos.htm) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>21</sup> Gustavo López Hernández, por ejemplo, tenía 22 años y era soldado del 44<sup>o</sup> batallón de infantería del ejército, y Melitón Pérez Vitel, de 17 años, era mecánico. De hecho —quedándonos con la investigación de Doyle—, si a la cifra total de 44 se le restan las diez víctimas de más de 29 años de edad y las nueve que no se dedicaban al estudio (cuatro soldados, tres profesionistas y dos domésticas), el número de *jóvenes estudiantes* se reduce a 25, es decir algo más cercano a la mitad del número total de muertos. Y más: dos de esa cifra tenían 12 y 13 años de edad, algo pequeños para encajar en el arquetipo del estudiante universitario al que se recuerda en el 2 de octubre. *Ibid.*

<sup>22</sup> E. Ascencio, *op. cit.*, p. 171.

<sup>23</sup> G. Hernández Ramírez, *op. cit.*, p. 10.

<sup>24</sup> *Ibid.*, p. 67.

<sup>25</sup> S. Aguayo, *op. cit.*, p. 103.

<sup>26</sup> La imagen no es infrecuente para aludir al ejército: “como contraejemplo de imagen inequívocamente descriptiva y especificadora propongo la de que el ejército sea la zarpa de la nación o del Estado, pues su papel particular [...] parece ser indiscutiblemente el de órgano especializado en la función de ataque y defensa, como lo son las zarpas en el cuerpo del animal de presa.” Rafael Sánchez Ferlosio, “El ejército nacional”, en *Babel contra Babel*, Barcelona, Debate, 2016, p. 65. La imagen del gorila en particular se generalizó en los años setenta, como imagen de los gobiernos dictatoriales de América del Sur.

<sup>27</sup> Algunos dirigentes del movimiento se quejan de esta abstracción. Federico Emery dice que “los participantes del 68 no éramos un grupo estudiantil puro sin ideologías, que luchó

inocentemente y a quien masacraron. Éste es un mito [...] Para mí muchos compañeros hacen esto para seguir 'formando parte' de las historia [sic] como los puros, los inocentes que se enfrentan a la violencia del poder." E. Ascencio, *op. cit.*, p. 71.

<sup>28</sup> No es nada nuevo, por cierto, ni original. Al contrario, Julio Caro Baroja lo encuentra de manera bastante general, un producto, dice, de la "hybris" juvenil: "dentro del mundo greco-latino arrancaremos de la descripción que Aristóteles hace de los jóvenes y de su carácter general, descripción que se convirtió en lugar común y que fue resumida por Plutarco. Aunque sea excesivamente favorable no deja de atribuirles *una particular falta de medida que conduce a acciones violentas*", Julio Caro Baroja, *Terror y terrorismo*, Madrid, Plaza & Janés, 1989, p. 32.

<sup>29</sup> G. Hernández Ramírez, *op. cit.*, p. 27.

<sup>30</sup> Citado por Jacinto Rodríguez Munguía en su libro *La otra guerra secreta. Los archivos prohibidos de la prensa y el poder*, México, Random House Mondadori, 2007, p. 96.

<sup>31</sup> Redacción, "Cadena de pizzas indigna con comentarios sobre normalistas", *Excélsior*, México, 10 de noviembre de 2014, y Redacción, "Cadena de pizzerías también desata indignación por tuits contra normalistas", *Proceso*, 10 de noviembre de 2014, consultado en [www.proceso.com.mx/387265/cadena-de-pizzerias-tambien-desata-indignacion-por-tuits-contranormalistas](http://www.proceso.com.mx/387265/cadena-de-pizzerias-tambien-desata-indignacion-por-tuits-contranormalistas) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>32</sup> En los años siguientes, en la retórica de los gobiernos de Echeverría y López Portillo hay un retorno a los motivos revolucionarios, un intento de recuperar el lugar del pueblo insurgente. Y de ahí en adelante un esfuerzo constante por distanciar al gobierno de Tlatelolco, que se traduce en una fuerte resistencia a emplear la fuerza pública.

## CAPÍTULO 5. Avatares de la cultura antagónica

<sup>1</sup> La extraordinaria complejidad del conflicto de Atenco, y los varios niveles en que se discutió su significado, ha sido expuesta con claridad insuperable por Antonio Azuela, "Enfren-

tamientos públicos, dilemas privados. El conflicto por Atenco y su productividad social”, en Antonio Azuela, *El derecho en movimiento. Once ensayos de sociología jurídica*, México, Tirant lo Blanc, 2019, pp. 113 y ss.

<sup>2</sup> Es una interpretación del proceso histórico que subsiste, como cosa de sentido común. Lorenzo Meyer, por ejemplo, considera que el “antiguo régimen” fue “un sistema que duró un tiempo largo —de 1917 a 2018”, Lorenzo Meyer, “Régimen nuevo, medios veteranos”, *El Universal*, México, 28 de abril de 2019.

<sup>3</sup> José Woldenberg, “La historia borrada”, *El Universal*, México, 19 de febrero de 2019.

<sup>4</sup> J. Woldenberg, “Lo inapreciable”, *El Universal*, México, 4 de diciembre de 2018. Añadamos algo más. La cultura antagonica se ha nutrido también de la extensión del lenguaje de los derechos humanos. En principio, sólo representantes del Estado pueden violar los derechos humanos, pero el precepto de responsabilidad por omisión —es decir, que la inacción del Estado se entienda como violación de derechos— implica que se pueda responsabilizar al gobierno por transgresiones en las que sólo está presente de manera indirecta, o sólo como parte del contexto. De ese modo, la responsabilidad del Estado se extiende, y hay un lenguaje en que se le puede denunciar.

<sup>5</sup> Mencionamos sólo algunas: Tampico, 5 de octubre de 2007, 15 civiles muertos; Arcelia, Guerrero, 7 de diciembre de 2008, 10 civiles muertos; Samalayuca, Chihuahua, 10 de febrero de 2009, 15 civiles muertos; San Miguel Tololoapan, Guerrero, 15 de abril de 2009, 15 civiles muertos; Acapulco, 6 de junio de 2009, 16 civiles muertos; Santiago Papasquiario, Durango, 12 de agosto de 2010, 12 civiles muertos; Ciudad Mier, Tamaulipas, 15 de septiembre de 2010, 22 civiles muertos. Y siguen otras muchas, de ahí en adelante. Fernando Escalante Gonzalbo, “Homicidios 2008-2009. La muerte tiene permiso”, *Nexos*, enero de 2011.

<sup>6</sup> Es frecuente, por ejemplo, que en las caricaturas de pren-

sa se caracterice al presidente Peña Nieto, y por extensión a su gobierno, como un dinosaurio.

<sup>7</sup> No está de más insistir en que la incompatibilidad entre un episodio de la serie represiva y uno de la “guerra contra el crimen organizado” es el resultado de cierta clasificación cultural, que no necesariamente responde a la complejidad de los sucesos. Los casos concretos rara vez son tan nítidos como las categorías en los cuales se les encasilla. Y esa clasificación opera solamente dentro de cierta esfera de discusión. En Guerrero, como ha señalado Miguel Ángel Berber, un acontecimiento puede inscribirse en otro esquema, donde pertenezca, por ejemplo, a un relato en que coexisten la violencia política y la criminal.

<sup>8</sup> A nadie se le ha ocurrido, por ejemplo, organizar una manifestación para protestar por las muertes en Tlatlaya, que no aparecen como parte de la serie represiva en los años siguientes.

<sup>9</sup> Redacción, “El resbalón ‘le pudo haber ocurrido a cualquiera’: Peña Nieto”, *Animal Político*, 5 de diciembre de 2011, consultado en [www.animalpolitico.com/2011/12/pena-nieto-pasa-momento-duro-en-la-fil-y-en-twitter](http://www.animalpolitico.com/2011/12/pena-nieto-pasa-momento-duro-en-la-fil-y-en-twitter) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>10</sup> Rocío Jardínez, “Estudiantes recomiendan libros a Peña Nieto”, *W Radio*, 5 de diciembre de 2011, consultado en [wradio.com.mx/radio/2011/12/05/nacional/1323127740\\_588306.html](http://wradio.com.mx/radio/2011/12/05/nacional/1323127740_588306.html) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>11</sup> Redacción, “131 alumnos de la Ibero responden al PRI y al PVEM, en video y con credenciales en la mano: ‘no somos acarreados ni porros’”, *Sin Embargo*, 14 de mayo de 2012, consultado en [www.sinembargo.mx/14-05-2012/233335](http://www.sinembargo.mx/14-05-2012/233335) el 1 de septiembre de 2019. En 2016, por ejemplo, Ricardo Raphael escribía: el movimiento #YoSoy132 “estuvo a punto de descarriar la campaña priista. Han transcurrido cuatro años y, sin embargo, sobrevive el resentimiento que la actual administración tiene para con esa universidad [la UIA].” Ricardo Raphael, “El papa, los jesuitas y Peña Nieto”, *El Universal*, México, 1 de fe-

brero de 2016. No importa saber qué fundamento tuviera la afirmación; lo interesante es la vigencia de la idea de una hostilidad del presidente hacia los universitarios.

<sup>12</sup> Fernando Camacho y Laura Poy, “Siete horas de disturbios en el DF; daños severos a comercios y mobiliario urbano”, *La Jornada*; México, 2 de diciembre de 2012.

<sup>13</sup> Gibrán Ramírez Reyes, “2012: el clima anarquista”, en Claudio Lomnitz (ed.), *1968-2018. Historia colectiva de medio siglo*, México, UNAM, 2018.

<sup>14</sup> La noticia salió a la luz dos días después de la primera conferencia de prensa del procurador Murillo Karam para informar de los avances de la investigación. Redacción, “La casa blanca de Enrique Peña Nieto (investigación especial)”, *Aristegui Noticias*, 9 de noviembre de 2014, consultado en [aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto](http://aristeguinoticias.com/0911/mexico/la-casa-blanca-de-enrique-pena-nieto) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>15</sup> “Peña Nieto, de plagiador a presidente”, *Aristegui Noticias*, 21 de agosto de 2016, consultado en [aristeguinoticias.com/2108/mexico/pena-nieto-de-plagiador-a-presidente](http://aristeguinoticias.com/2108/mexico/pena-nieto-de-plagiador-a-presidente) el 1 de septiembre de 2019.

## CAPÍTULO 6. Las otras versiones

<sup>1</sup> Buendía y Laredo, *Caso Ayotzinapa: encuesta nacional trimestral*, 8 de noviembre de 2014, consultado en [www.buendiaylaredo.com/encuestaspublicas\\_detalle.php?idpublicacion=298](http://www.buendiaylaredo.com/encuestaspublicas_detalle.php?idpublicacion=298) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>2</sup> Juan Villoro, “El ABC del fuego”, *Reforma*, México, 14 de noviembre de 2014.

<sup>3</sup> Sergio Ocampo Arista, “Increpan familiares a funcionarios por nulos avances en la búsqueda”, *La Jornada*, México, 22 de noviembre de 2014.

<sup>4</sup> Redacción, “Acusan padres a gobierno de carpetazo”, *Reforma*, México, 27 de enero de 2015.

<sup>5</sup> Carlos Martín Beristain, *El tiempo de Ayotzinapa*, México, Akal, 2017, pp. 10-11.

<sup>6</sup> *Ibid.*, pp. 205-206.

<sup>7</sup> *Loc. cit.*

<sup>8</sup> L. Meyer, *Distopía mexicana*, México, Debate, p. 293.

<sup>9</sup> Por supuesto que no se sabía “si alguien más” había participado, o más exactamente, no se sabía de nadie más que hubiese participado; el asunto es si había motivos para suponer que hubiera alguien más. El único sentido que puede tener la expresión es ése, afirmar que había motivos para suponer que alguien más había participado. En un texto posterior es explícito, pide “que se investigue, por ejemplo, al ejército, ya que la desaparición pudiera ser responsabilidad” suya, *ibid.*, p. 302.

<sup>10</sup> “Se puede demostrar que algo existe, pero es imposible demostrar de manera definitiva que algo no existe. Es precisamente lo que exige el desconfiado extremo a toda declaración oficial: demuéstrenme que no ha habido un complot...” Gerald Bronner, *La démocratie des crédules*, París, Presses Universitaires de France, 2013, p. 8.

<sup>11</sup> C. M. Beristain, *op. cit.*, p. 206.

<sup>12</sup> Citada por Rafael Croda en “Les llegó la hora a los autores de la ‘verdad histórica’”, *Proceso*, 8 de julio de 2019, consultado en [www.proceso.com.mx/591464/les-llego-la-hora-a-los-autores-de-la-verdad-historica?fbclid=IWAROWioyXBB3X4SJxftNDnLY7gfpptIkIoIdd-mr8BVOC5ypPYOscDQlOWAU](http://www.proceso.com.mx/591464/les-llego-la-hora-a-los-autores-de-la-verdad-historica?fbclid=IWAROWioyXBB3X4SJxftNDnLY7gfpptIkIoIdd-mr8BVOC5ypPYOscDQlOWAU) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>13</sup> Manuel Aguilar Mora y Claudio Albertani, “La noche de Iguala y el despertar de México”, en M. Aguilar Mora y C. Albertani (coords.), *La noche de Iguala y el despertar de México*, México, Juan Pablos Editor, 2015, p. 18.

<sup>14</sup> Témoris Grecko, *Ayotzinapa. Mentira histórica. Estado de impunidad, impunidad de Estado*, México, Ediciones Proceso, 2016, p. 116.

<sup>15</sup> Sergio González Rodríguez dice literalmente: “De acuerdo con fuentes de la inteligencia del gobierno mexicano, la investigación sobre los 43 detectó la presencia de agentes de la CIA entre los participantes en los hechos de Iguala”, y en la nota

a pie de página para indicar su fuente dice: “A petición de la fuente, se omite su nombre y ocupación exacta.” Sergio González Rodríguez, *Los 43 de Iguala. México: verdad y reto de los estudiantes desaparecidos*, México, Anagrama, 2015, p. 104.

<sup>16</sup> En la portada de esa edición del semanario se leía textualmente: “Policías federales y miembros del ejército se unieron a los agentes municipales en la agresión del 26 de septiembre contra los normalistas de Ayotzinapa”. Véase Anabel Hernández y Steve Fisher, “Iguala: la historia no oficial”, *Proceso*, 14 de diciembre de 2014.

<sup>17</sup> T. Grecko, *op. cit.*, p. 299.

<sup>18</sup> C. M. Beristain, *op. cit.*, p. 31.

<sup>19</sup> *Ibid.*, p. 205.

<sup>20</sup> Anabel Hernández, *La verdadera noche de Iguala*, México, Grijalbo, 2017.

<sup>21</sup> Pedro Miguel, “43 preguntas”, *La Jornada*, México, 27 de septiembre de 2016. El normalista al cual se refiere el periodista se llama Alexander Mora Venancio, no Alexander Zamora Venancio.

<sup>22</sup> Blanche Petrich y Emir Olivares, “No los quemaron”, *La Jornada*, México, 7 de septiembre de 2015; Arcelia Maya, “Ven que informe desacredita al gobierno”, *Reforma*, México, 6 de septiembre de 2015, y Nayeli Roldán, “Es científicamente imposible que los normalistas hayan sido incinerados en el basurero de Cocula”, *Animal Político*, 6 de septiembre de 2015, consultado en [www.animalpolitico.com/2015/09/normalistas-de-ayotzinapa-no-fueron-incinerados-en-el-basurero-de-cocula-expertos-independientes](http://www.animalpolitico.com/2015/09/normalistas-de-ayotzinapa-no-fueron-incinerados-en-el-basurero-de-cocula-expertos-independientes) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>23</sup> Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, *Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa*, p. 156. Éste y todos los documentos que produjo el GIEI están disponibles en [prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa](http://prensagieiayotzi.wixsite.com/giei-ayotzinapa), consultados el 1 de septiembre de 2019.

<sup>24</sup> Paris Martínez, “3 descubrimientos clave de los expertos independientes vs. la ‘verdad histórica’ de la PGR”, *Animal Político*, 7 de septiembre de 2015, consultado en [www.animalpolitico.com/2015/09/tres-descubrimientos-clave-de-los-expertos-independientes-que-refutan-la-verdad-historica-de-pgr](http://www.animalpolitico.com/2015/09/tres-descubrimientos-clave-de-los-expertos-independientes-que-refutan-la-verdad-historica-de-pgr) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>25</sup> Juan Villoro, “Acontecimiento centinela”, *El País*, Madrid, 26 de febrero de 2016.

<sup>26</sup> Dennis A. García, “La verdad ya está escrita en el informe del GIEI”, *El Universal*, México, 25 de septiembre de 2015.

<sup>27</sup> Santiago A. Cantón, “De Ayotzinapa a Tlatelolco”, *El País*, Madrid, 7 de septiembre de 2015.

<sup>28</sup> El informe explícitamente aclara en sus primeras páginas que “el GIEI lamenta no poder ofrecer a los familiares, al Estado y la sociedad mexicana o al mundo, un diagnóstico definitivo de lo sucedido con los 43 normalistas desaparecidos”. Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, *Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa*, p. 5.

<sup>29</sup> El informe del GIEI dice, textualmente: “el negocio [de droga] que se mueve en la ciudad de Iguala *podría* explicar la reacción extremadamente violenta y el carácter masivo del ataque, su duración en el tiempo e incluso el ataque posterior contra Los Avispones, al existir un autobús tomado por los estudiantes que no había sido detenido. A pesar de esto, esta línea de investigación no se ha explorado hasta ahora.” *Informe Ayotzinapa. Investigación y primeras conclusiones de las desapariciones y homicidios de los normalistas de Ayotzinapa*, p. 321. El subrayado es nuestro.

<sup>30</sup> Benito Jiménez, “Quemaron a 17 en Cocula: expertos”, *Reforma*, México, 1 de abril de 2016.

<sup>31</sup> Dennis A. García, “Ahora pelean PGR y GIEI por tercer peritaje”, *El Universal*, México, 2 de abril de 2016; Laura Poy y Gustavo Castillo, “Orilla la PGR a rompimiento con expertos del GIEI”, *La Jornada*, México, 2 de abril de 2016, e Igna-

cio Alzaga, "Ratifican fuego en Cocula", *Milenio*, México, 2 de abril de 2016.

<sup>32</sup> Denise Dresser, "SOS", *Reforma*, México, 16 de mayo de 2016.

<sup>33</sup> Elizabeth Oglesby, "Mexico after Ayotzinapa: A Conversation with the International Investigatory Group", *LASA Forum*, vol. XLVII (2016), p. 2.

<sup>34</sup> En su segundo informe sobre el caso, el GIEI dedicó un apartado a impugnar la credibilidad del nuevo peritaje sobre el basurero, tanto su sustento científico como el modo en que fue presentado ante la opinión pública, y afirmó que sus miembros permanecían convencidos de que no había ocurrido un incendio en Cocula. Justamente por eso llama la atención que Berristain no haga mención de él al exponer el caso. Véase GIEI, *Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas*, pp. 256-284.

<sup>35</sup> Comisión Nacional de los Derechos Humanos, *Estado de la investigación del "caso Iguala"*, CNDH, México, 2015. Éste y todos los reportes de la comisión en torno al caso Iguala están disponibles en [www.cndh.org.mx/Caso\\_Iguala](http://www.cndh.org.mx/Caso_Iguala), consultados el 1 de septiembre de 2019.

<sup>36</sup> Silvia Garduño, "Reprueba CNDH a PGR por indagatoria de Iguala", *Reforma*, México, 24 de julio de 2015, y César Martínez, "Dicen padres de 43 que no irán a casa", *Reforma*, México, 26 de julio de 2015.

<sup>37</sup> Emir Olivares Alonso, "Fue posible evitar la desaparición de los normalistas, afirma CNDH", *La Jornada*, México, 29 de noviembre de 2018, y Mariluz Roldán, "Hubo vínculo entre autoridades y criminales", *El Universal*, México, 29 de noviembre de 2018.

<sup>38</sup> Mariluz Roldán, "Al menos 19 personas fueron incineradas en basurero de Cocula, señala la CNDH", *El Universal*, México, 28 de noviembre de 2018.

<sup>39</sup> César Martínez, "Revive la CNDH 'verdad histórica'", *Reforma*, México, 29 de noviembre de 2018.

<sup>40</sup> La cita proviene de Redacción, “Peritos argentinos rechazan conclusiones de CNDH sobre restos hallados en el basurero de Cocula”, *Animal Político*, 29 de noviembre de 2018, consultado en [www.animalpolitico.com/2018/11/equipo-forense-argentino-ayotzinapa-cndh](http://www.animalpolitico.com/2018/11/equipo-forense-argentino-ayotzinapa-cndh) el 1 de septiembre de 2019. Véanse también Emir Olivares Alonso, “Discrepan forenses argentinos de la CNDH”, *La Jornada*, México, 30 de noviembre de 2018; Mariluz Roldán, “Forenses argentinos responden a la CNDH por caso Ayotzinapa”, *El Universal*, México, 30 de noviembre de 2018, y César Martínez, “Critican sesgo en caso Iguala”, *Reforma*, México, 30 de noviembre de 2018.

<sup>41</sup> Jesús Guerrero, “Marchan contra CNDH por caso Iguala”, *Reforma*, México, 30 de noviembre de 2018.

<sup>42</sup> César Martínez, “Basa CNDH informe en dichos invalidados”, *Reforma*, México, 3 de diciembre de 2018, y Gloria Leticia Díaz, “Indigna a familiares la recomendación de la CNDH sobre el caso Ayotzinapa”, *Proceso*, 2 de diciembre de 2018, consultado en [www.proceso.com.mx/562137/indigna-a-familiares-la-recomendacion-de-la-cndh-sobre-el-caso-ayotzinapa](http://www.proceso.com.mx/562137/indigna-a-familiares-la-recomendacion-de-la-cndh-sobre-el-caso-ayotzinapa) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>43</sup> El informe de la CNDH, por ejemplo, incluía un apartado en donde se leía lo siguiente: es el “Secretario General del Comité Estudiantil, identificado por todos como ‘La Parka’, quien, más allá de resolver el problema, toleraba esta situación y consentía que en la escuela se distribuyera, vendiera y consumiera droga”. *Animal Político* dedicó un artículo específicamente a criticar y desechar los fundamentos de esa parte de la investigación de la comisión. Véanse Comisión Nacional de los Derechos Humanos, *Recomendación n.15VG/2018 “Caso Iguala”*, México, CNDH, 2018, p. 304 (en adelante *Recomendación*), y Paris Martínez, “CNDH acusó a normalistas de Ayotzinapa de trabajar para el narco; se basó en testimonios bajo tortura”, *Animal Político*, 15 de enero de 2019, consultado en [www.animalpolitico.com/2019/01/ayotzinapa-normalistas-narco-cndh](http://www.animalpolitico.com/2019/01/ayotzinapa-normalistas-narco-cndh) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>44</sup> “Es imperativo para esta Comisión Nacional dejar perfectamente establecido que la información relativa al autobús 3 278 siempre estuvo en el expediente de la PGR, tan es así que la CNDH dio cuenta de ello en su primer reporte parcial sobre el caso, del 23 de julio de 2015 contabilizando ese autobús como una de las 6 unidades de transporte público relacionada con la sucesión de hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014, aunque cierto es que la PGR no había dado hasta ese momento alguna explicación sobre el uso y el traslado de esa unidad durante la sucesión de los acontecimientos. Cabe reiterar que fue la CNDH quien en primera instancia hizo referencia no sólo a cinco, sino a seis autobuses involucrados en los hechos de Iguala.” Comisión Nacional de los Derechos Humanos, *Recomendación*, pp. 1 321-1 322 y 1 340.

<sup>45</sup> *Ibid.*, p. 1 349.

<sup>46</sup> Christel Rosales, “Ayotzinapa: cómo no fallarle de nuevo a las víctimas”, *Proceso*, 4 de julio de 2019, consultado en [www.proceso.com.mx/590920/ayotzinapa-como-no-fallar-le-de-nuevo-a-las-victimas](http://www.proceso.com.mx/590920/ayotzinapa-como-no-fallar-le-de-nuevo-a-las-victimas) el 1 de septiembre de 2019. Otro ejemplo. En una entrevista con el ex procurador Murillo Karam publicada en *La Jornada* en septiembre de 2019, una de las preguntas que el entrevistador decidió plantearle fue: “¿Qué hay respecto al quinto autobús?” Gustavo Castillo García, “‘Increíble’, que se libere a inculpados de caso Ayotzinapa”, *La Jornada*, México, 17 de septiembre de 2019.

<sup>47</sup> Mariluz Roldán, “CNDH: Recomendación 15VG/2018 es lo más aproximado a la verdad en el caso Ayotzinapa”, *El Universal*, México, 4 de diciembre de 2018.

<sup>48</sup> Arturo Cano, “Aterrado, Julio César Mondragón se echó a correr; al otro día apareció sin rostro”, *La Jornada*, México, 2 de octubre de 2014.

<sup>49</sup> Francisco Goldman, “Crisis in Mexico: The Disappearance of the Forty-Three”, *The New Yorker*, 24 de octubre de 2014, consultado en [www.newyorker.com/news/news-desk/crisis-mexico-disappearance-forty-three](http://www.newyorker.com/news/news-desk/crisis-mexico-disappearance-forty-three) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>50</sup> Luis Hernández Navarro, “La matanza de Iguala y el ejército”, en M. Aguilar Mora y C. Albertani (coords.), *op. cit.*, p. 126.

<sup>51</sup> Véanse *Reporte de la CNDH entorno [sic] a los hechos y circunstancias en las que Julio César Mondragón Fontes, normalista de Ayotzinapa, fue privado de la vida*, México, CNDH, 2016, p. 9, y *Recomendación*, pp. 424-459.

<sup>52</sup> Jorge Volpi, “El rostro de Julio César”, *Reforma*, México, 18 de noviembre de 2017. Poco después de la publicación de los hallazgos de la CNDH, el Equipo Argentino de Antropología Forense emitió un comunicado en que rechazaba las conclusiones de la comisión en el caso de Mondragón. El grupo también había realizado un dictamen pericial del cuerpo del normalista, y reportó que no era posible concluir de forma definitiva si había sido desollado o no. Lo que nos interesa es el hecho de que la imagen de Mondragón persistió en el imaginario del caso —precisamente a pesar de las patentes contradicciones entre análisis forenses. Véase David Ordaz, “Refutan peritos argentinos conclusiones de CNDH sobre Julio César Mondragón”, *Aristegui Noticias*, 11 de julio de 2016, consultado en [aristeguinoticias.com/1107/mexico/refutan-peritos-argentinos-conclusiones-de-cndh-sobre-julio-cesar-mondragon](http://aristeguinoticias.com/1107/mexico/refutan-peritos-argentinos-conclusiones-de-cndh-sobre-julio-cesar-mondragon) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>53</sup> “Con AMLO, ahora sí se investigará bien el caso Ayotzinapa: Gibrán Ramírez Reyes”, video, *Milenio*, México, 26 de septiembre de 2019, consultado en [www.msn.com/es-mx/noticias/ciencia/con-amlo-ahora-s%C3%AD-se-investigara%C3%A1-bien-el-caso-ayotzinapa-gibr%C3%A1n-ram%C3%ADrez-reyes/vp-AAHTmxw](http://www.msn.com/es-mx/noticias/ciencia/con-amlo-ahora-s%C3%AD-se-investigara%C3%A1-bien-el-caso-ayotzinapa-gibr%C3%A1n-ram%C3%ADrez-reyes/vp-AAHTmxw) el 2 de octubre de 2019.

<sup>54</sup> Ricardo Raphael, “EU esconde información sobre Ayotzinapa (II)”, *El Universal*, México, 30 de septiembre de 2019.

## CAPÍTULO 7. La descontextualización

<sup>1</sup> En este apartado, inevitablemente, tenemos que referirnos a los hechos. Pero nos limitamos a los hechos absolutamente indudables, que aparecen idénticos en todas las versiones y no

son objeto de discusión: el lugar de la agresión, el número de víctimas, la identidad de las víctimas, la participación de policías municipales y de un grupo criminal, el que los estudiantes provenían de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. Sobre los demás hechos que se asientan en las varias investigaciones no podemos decir nada.

<sup>2</sup> “El hecho político en sí no existe. Eso quiere decir que no hay un hecho político que no sea a la vez un hecho social, y que no hay ningún fenómeno social que no sea susceptible de adquirir un aspecto político. Ese aspecto resulta de una coloración de los hechos.” Georges Burdeau, *La politique au pays des merveilles*, París, Presses Universitaires de France, 2015 [1978], p. 16. Y la distinción entre lo que se reconoce como político y lo que se identifica como criminal es, en México, moralmente decisiva.

<sup>3</sup> Ni siquiera tuvo un impacto trascendente la masacre de 72 migrantes en San Fernando, Tamaulipas, el 23 de agosto de 2010, y tampoco, a pesar de implicar a fuerzas federales, las de Tlatlaya, con 22 víctimas (30 de junio de 2014) o la de Tlaxiaco, con 43 (22 de mayo de 2015).

<sup>4</sup> La intervención completa de Krauze está disponible en “Enrique Krauze en #foroporlapaz2014”, 8 de diciembre de 2014, consultado en [www.youtube.com/watch?v=AVD4Y4ILMMk](http://www.youtube.com/watch?v=AVD4Y4ILMMk) el 1 de septiembre de 2019. La prensa recogió las palabras de Krauze, pero las citas exactas varían. Nosotros citamos directamente del video de su ponencia. Véase Juan Carlos Talavera, “Pasa México por ‘momento crucial’: Enrique Krauze”, *Excelsior*, México, 11 de noviembre de 2014.

<sup>5</sup> Citado por Niza Rivera en “Inicia la FIL Guadalajara con exigencia de justicia por Ayotzinapa”, *Proceso*, 29 de noviembre de 2014, consultado en [www.proceso.com.mx/389424/inicia-la-fil-guadalajara-con-exigencia-de-justicia-por-ayotzinapa](http://www.proceso.com.mx/389424/inicia-la-fil-guadalajara-con-exigencia-de-justicia-por-ayotzinapa) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>6</sup> Oxfam International, “México: justicia para Ayotzinapa”, 1 de diciembre de 2014, consultado en [www.oxfam.org/es/](http://www.oxfam.org/es/)

mexico/mexico-justicia-para-ayotzinapa el 1 de septiembre de 2019.

<sup>7</sup> Hernando Calvo Ospina, “Statu quo, narcotráfico y guerra sucia”, en Nayar López Castellanos (comp.), *Ayotzinapa: un grito desde la humanidad*, México, Ocean Sur, 2015, p. 48.

<sup>8</sup> Maciel Silva García, “A propósito de verdades históricas... una crónica de cuando Ayotzinapa llegó a la ciudad”, *ibid.*, p. 88. Más ejemplos: “Nada de lo ocurrido en Ayotzinapa encontrará justicia y castigo bajo las condiciones actuales”; “En Ayotzinapa se tocaron todos los límites. Se cazó con total impunidad...”; “el terror adoptaba en Ayotzinapa una forma superior”. Las citas provienen de Ana Esther Ceceña, “Ayotzinapa, emblema del ordenamiento social del siglo XXI”; Buen Abad Domínguez, “Ayotzinapa, un dolor que recorre las venas de la historia”, y Katu Arkonada, “Ayotzinapa, fase superior del capitalismo del siglo XXI”, todas en *ibid.*, pp. 16, 37 y 76, respectivamente. El énfasis es nuestro.

<sup>9</sup> Amnistía Internacional, “México: Peña Nieto insiste en cubrir la verdad sobre los 43 estudiantes desaparecidos forzosamente”, 30 de agosto de 2018, consultado en [www.amnistia.org/ve/noticias/2018/08/7603/mexico-pena-nieto-insiste-en-cubrir-la-verdad-sobre-los-43-desaparecidos](http://www.amnistia.org/ve/noticias/2018/08/7603/mexico-pena-nieto-insiste-en-cubrir-la-verdad-sobre-los-43-desaparecidos) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>10</sup> En caso de que la gramática de la OEA resulte confusa, aclaremos que el convenio se firmó en la Ciudad de México. OEA, “Ayotzinapa”, consultado en [www.oas.org/es/cidh/actividades/giei.asp](http://www.oas.org/es/cidh/actividades/giei.asp) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>11</sup> Gina Zabludovsky Kuper, “Crecer con el 68”, *Revista de la Universidad de México*, núm. 841 (octubre de 2018), p. 101.

<sup>12</sup> Denise Dresser, *Manifiesto mexicano*, México, Aguilar, 2018, p. 215.

<sup>13</sup> Eduardo Febbro, “Se lucra con el terror”, *Página12*, Buenos Aires, 24 de junio de 2018.

<sup>14</sup> Luis Pablo Beauregard, “Un gobierno cargado de símbolos que tropieza con las formas”, *El País*, Madrid, 26 de marzo de 2019.

<sup>15</sup> Jorge Fernández Menéndez, *La noche de Iguala. Secuestro, asesinato y narcotráfico en Guerrero*, México, Cal y Arena, 2018, *passim*.

<sup>16</sup> J. Fernández Menéndez, “Si sabemos qué pasó en Ayotzinapa”, *Excélsior*, México, 26 de septiembre de 2018.

<sup>17</sup> Un ejemplo. En una columna de octubre de 2014, Sergio Sarmiento se refiere a los desplazamientos de los normalistas en Guerrero y afirma que Chilpancingo “está relativamente cerca de Ayotzinapa, a 156 kilómetros, quizá dos horas en auto. La distancia a Iguala, en cambio, es de 258 kilómetros.” En realidad, la Normal Rural Raúl Isidro Burgos se encuentra a menos de 20 kilómetros de Chilpancingo y a poco más de 125 kilómetros de Iguala. El periodista confunde la normal rural de Ayotzinapa en Tixtla con el mucho más distante poblado de Ayotzinapa en el municipio de Tlapa de Comonfort. Lo que nos interesa subrayar es el carácter nebuloso de Ayotzinapa como lugar concreto, que podría estar en cualquier parte de Guerrero. Véanse Sergio Sarmiento, “Dudas de Ayotzinapa”, *Reforma*, México, 17 de octubre de 2014, y la nota 4 del capítulo 1 (p. 132).

<sup>18</sup> Comisión Nacional de los Derechos Humanos, *Recomendación*, pp. 1 475-1 480.

<sup>19</sup> La cifra 43 como símbolo del caso, por otra parte, es llamativa porque resulta sumamente impersonal, como ha señalado Esteban Salmón. El carácter inerte del número contrasta con los esfuerzos por individualizar a las víctimas, como se proponían las protestas al presentar retratos de los normalistas desaparecidos, al pasar lista con sus nombres.

<sup>20</sup> Ana Colchero, “Ayotzinapa, la expresión más contundente del terrorismo de Estado en México”, en N. López Castellanos (comp.), *op. cit.*, p. 7.

<sup>21</sup> Miguel Concha Malo, “Solidaridad social nacional e internacional con Ayotzinapa”, en *ibid.*, p. 99.

<sup>22</sup> Josefina Morales, “Ayotzinapa en el corazón de la encrucijada de México”, en *ibid.*, p. 68.

<sup>23</sup> Paris Martínez, “¿Por qué fueron los normalistas a Iguala

la, a dos horas de su plantel?”, *Animal Político*, 27 de octubre de 2014, consultado en [www.animalpolitico.com/2014/10/entramos-igual-a-para-llevarnos-dos-autobuses-normalista-sobreviviente-el-1-de-septiembre-de-2014](http://www.animalpolitico.com/2014/10/entramos-igual-a-para-llevarnos-dos-autobuses-normalista-sobreviviente-el-1-de-septiembre-de-2014).

<sup>24</sup> La intervención completa de Aguirre está disponible en “CoIVJ-Ayotzinapa (Santiago Aguirre) 15-01-19”, 15 de enero de 2019, consultado en [www.youtube.com/watch?v=cbo8wTGHULI&feature=youtu.be](http://www.youtube.com/watch?v=cbo8wTGHULI&feature=youtu.be) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>25</sup> Ai Weiwei, *Restablecer memorias*, México, MUAC, 2019, p. 18 y *passim*.

<sup>26</sup> J. Villoro, “‘Yo sé leer’: vida y muerte en Guerrero”, *El País*, Madrid, 29 de octubre de 2014.

<sup>27</sup> Lugo Ortiz, el chofer del camión en que viajaba el equipo Los Avispones, tenía 50 años. El caso de Montiel Sánchez, quien tenía 40, es aún más llamativo porque resulta un sujeto tan inapropiado e irrelevante para el modelo de Tlatelolco que la prensa y los libros suelen referirse a ella simplemente como “mujer que viajaba en un taxi”. John Gibler, *Una historia oral de la infamia*, México, Grijalbo-Sur+, 2016, p. 223.

<sup>28</sup> El acto en que un conjunto de figuras públicas apadrinó a la siguiente generación de estudiantes de la normal hace explícita la diferencia: a quienes se recuerda es a los estudiantes. Elena Poniatowska: “Faltan 48; además de los 43 desaparecidos, hay tres asesinados: David Solís Gallardo, Julio César Mondragón, Julio César Ramírez Nava, y dos heridos de gravedad: Aldo Gutiérrez Solano, inconsciente desde entonces, y Édgar Andrés Vargas, sometido a numerosas operaciones para reconstruirle parte del rostro y ayudarle a recuperar funciones.” Sergio Ocampo Arista, “Por los que faltan, ustedes deben seguir de pie, dijo Poniatowska a normalistas”, *La Jornada*, México, 19 de julio de 2015. Nuevamente se omite de la cuenta a la mitad de las víctimas fatales, pero sobre todo es claro que pertenecen a otra categoría.

<sup>29</sup> Además de los 43 retratos de los desaparecidos, en el primer capítulo se dedica un apartado a cada uno de los tres nor-

malistas que murieron el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. A estas alturas no sorprenderá que ninguna de las otras tres víctimas —David Josué García, Víctor Manuel Lugo y Blanca Montiel— figura entre las biografías. Sólo aparecen mencionados en el prólogo, sin nombres.

<sup>30</sup> VV. AA., *Ayotzinapa. La travesía de las tortugas. La vida de los normalistas antes del 26 de septiembre de 2014*, México, Ediciones Proceso, 2015, *passim*.

<sup>31</sup> Un amigo de uno de los estudiantes “intuye que el narcotráfico ha corrompido a la normal de Ayotzinapa” (*ibid.*, p. 100), otro dice que a su amigo “la maña le exigía que con todo y motocicleta trabajase para ellos” (*ibid.*, p. 186). Son las únicas referencias, en 43 historias de vida.

<sup>32</sup> *Ibid.*, p. 169.

<sup>33</sup> El resultado era previsible. Como dice Sahlins en su análisis del episodio de Elián González (*Apologies...*, *op. cit.*, p. 174), la virtud estructural del relato es mucho más importante que el carácter de los actores históricos a los que inviste.

<sup>34</sup> Enrique Krauze, “Mexico’s Barbarous Tragedy”, *The New York Times*, Nueva York, 10 de noviembre de 2014.

<sup>35</sup> Por cierto que la misma lógica opera a la inversa, es decir, afirmar que alguien es estudiante automáticamente implica que no es, que no puede ser delincuente. Los normalistas de Ayotzinapa lo confirman en los testimonios que compiló John Gibler en torno a los sucesos de Iguala. Un alumno asegura que “se dieron cuenta [unos militares que interpellaron a los normalistas] de que no éramos delincuentes, que éramos estudiantes...”, y otro, más adelante: “nosotros empezamos a decirle [al comandante de los soldados] que éramos estudiantes aquí de la Normal. Y él nos decía que no, que para él éramos unos delincuentes...” J. Gibler, *op. cit.*, pp. 139 y 141.

<sup>36</sup> El informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no deja lugar a dudas sobre eso: “el control estructural y funcional de las normales, incluida la ‘Raúl Isidro Burgos’, ha sido prácticamente dejado en manos de los estudiantes.” Comi-

sión Nacional de los Derechos Humanos, *Recomendación*, pp. 299 y ss.

<sup>37</sup> Sin embargo, el mismo hecho de que los normalistas puedan insertarse con mayor fluidez en la categoría cultural del Pueblo sugeriría que son, en algún sentido, distintos de los estudiantes de 1968, los cuales requieren una justificación más elaborada para incorporarse al conjunto. No parece una diferencia trivial.

<sup>38</sup> Noticias Telemundo, "Omar García: sobreviviente de masacre de estudiantes en Ayotzinapa | Noticias | Noticias Telemundo", consultado en [www.youtube.com/watch?v=w2yBb-4B5FI](http://www.youtube.com/watch?v=w2yBb-4B5FI) el 1 de septiembre de 2019. Contrasta notablemente esta declaración ante la prensa con los testimonios de los normalistas en el libro de Gibler. Otro estudiante de Ayotzinapa, refiriéndose al mismo día: "Nosotros estábamos trabajando allá en las segundas tierras y nos gritaron '¡Paisa, jálense! ¡Actividad! ¡Va a haber una toma, van a secuestrar autobuses!'". J. Gibler, *op. cit.*, p. 35.

<sup>39</sup> M. Aguilar Mora y C. Albertani, "La noche de Iguala y el despertar de México", en M. Aguilar Mora y C. Albertani (coords.), *op. cit.*, p. 17.

<sup>40</sup> No deja de llamar la atención el lenguaje casi jurídico con que los normalistas justifican sus acciones. Uno de ellos explica que, cuando devuelven un autobús después de haberlo secuestrado, "hay lo que nosotros llamamos una carta de liberación, donde se especifica 'Normal Rural de Ayotzinapa, dirigido a la empresa tal', se le dice 'se retuvo los días ta ta ta, por el motivo tal, por lo que solicitamos le reembolse al chofer los gastos que hemos hecho. Por su cooperación muchas gracias'", citado por Esteban Illades en *op. cit.*, p. 36.

<sup>41</sup> M. Aguilar Mora y C. Albertani, "La noche de Iguala y el despertar de México", en M. Aguilar Mora y C. Albertani (coords.), *op. cit.*, p. 25.

<sup>42</sup> Guillermo Sheridan, "La FECSM en las normales: servicio a la carta", *Letras Libres*, octubre de 2015.

<sup>43</sup> M. Aguilar Mora y C. Albertani, “La noche de Iguala y el despertar de México”, en M. Aguilar Mora y C. Albertani (coords.), *op. cit.*, p. 40.

<sup>44</sup> *Ibid.*, p. 192.

<sup>45</sup> César Navarro, “Ayotzinapa: justicia pendiente”, en Nayar López Castellanos (comp.), *op. cit.*, p. 34.

<sup>46</sup> T. Grecko, *op. cit.*, p. 120.

<sup>47</sup> J. Gibler, *op. cit.*, p. 33.

<sup>48</sup> C. M. Beristain, *op. cit.*, pp. 29-30.

<sup>49</sup> Mariel Ibarra, “Miguel Ángel Hernández: las tres tragedias del Ángel Aventurero”, en VV. AA., *op. cit.*, p. 190.

<sup>50</sup> S. A. Cantón, *art. cit.*

<sup>51</sup> La normal rural Lázaro Cárdenas está a 102 kilómetros de la capital, la Benito Juárez a 122 y la Emiliano Zapata a 134. Las distancias representan el recorrido más corto en carretera que ofrecen los mapas de Google.

<sup>52</sup> En el caso contrario, costaría mucho trabajo descifrar en qué métrica estaba pensando el autor al estimar que la normal rural de Ayotzinapa está cerca de la Ciudad de México.

<sup>53</sup> Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, *Informe Ayotzinapa II. Avances y nuevas conclusiones sobre la investigación, búsqueda y atención a las víctimas*, p. 22.

<sup>54</sup> *Loc. cit.*

<sup>55</sup> La expresión que utiliza Doyle en inglés delata con aún más claridad la poca importancia que atribuye a la presencia de los normalistas en Iguala: “as the buses *passed through* the town of Iguala...”. Kate Doyle, “Transcripts of Intercepted Cell Phones Open New Lines of Investigation in Ayotzinapa Case”, *Unredacted*, 16 de abril de 2018, consultado en [unredacted.com/2018/04/16/transcripts-of-intercepted-cell-phones-open-new-lines-of-investigation-in-ayotzinapa-case](http://unredacted.com/2018/04/16/transcripts-of-intercepted-cell-phones-open-new-lines-of-investigation-in-ayotzinapa-case) el 1 de septiembre de 2019. El énfasis es nuestro.

<sup>56</sup> Es un párrafo sumamente enredado. A primera vista, Huerta parece decir que los normalistas planeaban manifestarse en conmemoración del 2 de octubre en *Chilpancingo*,

cuando en realidad la marcha ocurriría en la Ciudad de México. De ser el caso, resulta aún más confuso que Huerta diga que los estudiantes secuestraron autobuses en Chilpancingo y después se dirigieron a Iguala (que está a más de 100 km). Haciendo una lectura contraintuitiva del texto, podría entenderse que los normalistas fueron a la capital guerrerense con el objetivo de tomar camiones y después viajar a la capital del país, pero eso implicaría nuevamente que la ida a Iguala fue absolutamente incidental. David Huerta, *La violencia en México*, Madrid, La Huerta Grande, 2015, p. 99.

<sup>57</sup> Citado por Arcelia Maya en “No fueron sicarios, afirman normalistas”, *Reforma*, México, 5 de octubre de 2014.

<sup>58</sup> “La entrevista por Adela Madres y familiares de Víctimas en el Caso Ayotzinapa”, 7 de octubre de 2016, consultado en [www.youtube.com/watch?v=Pol5c9idQ4Q](http://www.youtube.com/watch?v=Pol5c9idQ4Q) el 1 de septiembre de 2019 (min. 48:27).

<sup>59</sup> Héctor Raúl González, “‘Sí fue un crimen de Estado’: Sicilia”, *Reforma*, México, 7 de noviembre de 2014.

<sup>60</sup> N. López Castellanos, “Introducción”, en N. López Castellanos (coord.), *op. cit.*, pp. 2-3.

<sup>61</sup> A. Hernández, *op. cit.*, pp. 324-325.

<sup>62</sup> M. Aguilar Mora y C. Albertani (coords.), *op. cit.*, pp. 97 y 216. Es el mismo motivo que justifica la denuncia de un grupo de estudiantes que durante la ceremonia del grito, el 15 de septiembre de 2015, desplegaron en una serie de camisetas la frase: “Peña asesino”, y que al día siguiente declaraban: “Cualquiera que se atreva a protestar en contra del gobierno puede ser secuestrado... o desaparecido como hoy lo están los 43 normalistas...” Rocío Méndez, “Denuncian estudiantes persecución tras protesta contra Peña Nieto en el Zócalo”, *MVS Noticias*, 16 de septiembre de 2015, consultado en [mvsnoticias.com/noticias/nacionales/denuncian-estudiantes-persecucion-tras-protesta-contra-pena-nieto-en-el-zocalo-831](http://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/denuncian-estudiantes-persecucion-tras-protesta-contra-pena-nieto-en-el-zocalo-831) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>63</sup> Beristain, *op. cit.*, p. 35; las cursivas son nuestras. Alguno

nas páginas antes, Beristain describe los intentos infructuosos de los normalistas por secuestrar autobuses en Chilpancingo el 26 de septiembre del modo siguiente: “primero salen a Chilpancingo, Chilpo, que así es más nuestra. Pero, al llegar cerca de la estación de autobuses, la Policía Federal les agua la fiesta”, *ibid.*, p. 30.

<sup>64</sup> A. Hernández, *op. cit.*, p. 73. Otra vez: el “verdadero rostro”, que se manifiesta.

<sup>65</sup> José Miguel Candia, “26 de septiembre de 2014: del estupor a la conciencia colectiva”, en N. López Castellanos (comp.), *op. cit.*, pp. 64-65.

<sup>66</sup> C. M. Beristain, *op. cit.*, p. 38.

<sup>67</sup> S. González Rodríguez, *op. cit.*, p. 102.

<sup>68</sup> A. Hernández, *op. cit.*, p. 95.

<sup>69</sup> *Ibid.*, pp. 18-19.

<sup>70</sup> Ezequiel Flores Contreras, “Proceso y la historia del normalista-soldado infiltrado en Ayotzinapa”, *Proceso*, 14 de marzo de 2019, consultado en [www.proceso.com.mx/575263/proceso-y-la-historia-del-normalista-soldado-infiltrado-en-ayotzinapa](http://www.proceso.com.mx/575263/proceso-y-la-historia-del-normalista-soldado-infiltrado-en-ayotzinapa) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>71</sup> José Manuel Valenzuela Arce, art. cit., *passim*. El subrayado es del autor.

## CAPÍTULO 8. Nocturno en que nada se oye

<sup>1</sup> Ya lo hemos dicho, pero seguramente no sobra repetirlo: lo “político” y lo “criminal” son categorías culturales. No hay nada que sea esencialmente político, ni nada que impida que un hecho criminal sea también político. Pero las convenciones del tiempo, de la “guerra contra el crimen organizado”, hacen que la distinción en México sea fundamental, y cargada de consecuencias.

<sup>2</sup> No dejan de llamar la atención las transparentes resonancias religiosas de la cultura antagónica. El acto que define al Pueblo, por ejemplo, el que consagró a los estudiantes de 1968 como sus representantes, es el martirio: sufrir, morir violentamente.

tamente a manos del Estado. El hecho de que los arquetipos de este campo cultural “no son de este mundo”, por así decirlo, seguramente contribuye a la necesidad de la descontextualización —pero mejor será no desviarnos a estas alturas del argumento.

<sup>3</sup> Estamos considerando aquí las formas en que los sucesos de Iguala se interpretaron para asemejarse a la masacre de Tlatelolco, pero no parece disparatado preguntarse también en qué sentidos el acontecimiento “Tlatelolco” suprimió o exaltó ciertos rasgos de los hechos del 2 de octubre de 1968. Ésa, sin embargo, es harina de otro costal.

<sup>4</sup> Un ejemplo, entre muchos: “El presidente de México, Felipe Calderón, felicitó hoy a la Marina Mexicana por la muerte del líder de los Zetas, Heriberto Lazcano Lazcano”. Redacción, “Calderón confirma la muerte de ‘El Lazca’; celebra que se han neutralizado a 25 de los 37 criminales más buscados”, *Sin Embargo*, 9 de octubre de 2012.

<sup>5</sup> Dhalia, “Nosotras no somos Ayotzinapa”, 27 de octubre de 2014, en *El Barrio Antiguo*, consultado en [www.elbarrioantiguo.com/nosotras-somos-ayotzinapa](http://www.elbarrioantiguo.com/nosotras-somos-ayotzinapa) el 6 de octubre de 2019.

<sup>6</sup> En el extremo, puede ser una forma de capitalizar la autoridad moral de las víctimas, pero también, como dice Dhalia, puede significar que la solidaridad depende de esa posibilidad de identificación inmediata. Pero es tema para otro ensayo.

<sup>7</sup> Según Jorge Fernández Menéndez, Sidronio Casarrubias señaló “al entonces director de la Normal de Ayotzinapa, José Luis Hernández Rivera, como parte de la banda rival de Los Rojos”. J. Fernández Menéndez, *op. cit.*, p. 148.

<sup>8</sup> Guillermo Sheridan, “Ayotzinapa: la pregunta de don Epifanio”, en *Paseos por la calle de la amargura y otros rumbos mexicanos*, México, Debate, 2018.

<sup>9</sup> Lo primero sería preguntar por quienes votaron por el alcalde José Luis Abarca, apenas dos años antes, porque no era un desconocido ni para los partidos políticos ni para la gente de Iguala. Y sus vínculos criminales, que eran muy conocidos

allí, entonces, no estorbaron a su popularidad. Ganó la elección con más de 21 mil votos —más de 40% del voto efectivo. No parece insignificante. Véase Instituto Electoral del Estado de Guerrero, *Cómputo distrital de la elección de ayuntamiento 2012*, consultado en [web.archive.org/web/20121004161947/http://ieegro.org.mx/PDFs/Resultados/Res%20CompDist%20Aytos%202012.pdf](http://web.archive.org/web/20121004161947/http://ieegro.org.mx/PDFs/Resultados/Res%20CompDist%20Aytos%202012.pdf) el 1 de septiembre de 2019.

<sup>10</sup> “El Estado no es la realidad que se planta detrás de la máscara de la práctica política. Es en sí mismo la máscara que impide que veamos la práctica política tal y como existe. Es, casi podría decirse, la mente de un mundo sin mente, el propósito de condiciones sin propósito, el opio de los ciudadanos.” Philip Abrams, “Notes on the Difficulty of Studying the State (1977)”, *Journal of Historical Sociology*, vol. 1, núm.1 (marzo de 1989), p. 82.

<sup>11</sup> Vania Pigeonutt, “Apadrinan intelectuales a generación de Ayotzinapa”, *El Universal*, México, 18 de julio de 2015.

<sup>12</sup> El tema es importante, para tratarlo en otra parte. Es precisamente su notoriedad la que permite que se les atribuya autoridad moral, y ese hecho es el que les permite acumular autoridad moral mediante el uso de su notoriedad. Muchísima otra gente podría repudiar la masacre, pero eso no significaría nada ni merecería una consideración especial.

<sup>13</sup> H. Jiménez Guzmán, *op. cit.*, pp. 347-348.

<sup>14</sup> Epigmenio Ibarra, “2 de octubre no se olvida”, *Milenio*, México, 2 de octubre de 2019. Desde luego, la tesis del artículo es que la elección de 2018 canceló ese pasado, porque la elección del presidente López Obrador fue la culminación de esa lucha.

<sup>15</sup> Jorge Volpi, “Lecciones del 68”, *Reforma*, México, 27 de octubre de 2018.

La primera edición de *De Iguala a Ayotzinapa. La escena y el crimen*, de Fernando Escalante Gonzalbo y Julián Canseco Ibarra, se terminó de imprimir en Litográfica Ingramex, SA de CV, Centeno 162-1, Granjas Esmeralda, 09810, Ciudad de México, en noviembre de 2019, con un tiraje de 2 000 ejemplares. La composición tipográfica se llevó a cabo en el taller de Libros Grano de Sal, SA de CV, empleando la familia Marco PE, que es un diseño de Toshi Omagari.



**Grano de Sal promueve el debate abierto y plural, favorece cambios individuales y colectivos, aporta datos y contexto para alcanzar una mejor comprensión del presente... manteniendo siempre vivo el sano escepticismo**

[www.granodesal.com](http://www.granodesal.com)

---

**OTROS TÍTULOS**

*Vaquita marina  
Ciencia, política  
y crimen organizado  
en el golfo de California*

**BROOKE BESSESEN**

*De México  
para América entera  
Pequeñas historias  
del Fondo de Cultura Económica*

**RAFAEL VARGAS ESCALANTE**

*La trayectoria póstuma  
de Emiliano Zapata  
Mito y memoria en  
el México del siglo XX*

**SAMUEL BRUNK**

*Salvemos a la infancia  
La lucha de un hombre  
contra la explotación infantil*

**KAILASH SATYARTHI**

Entre el 26 y el 27 de septiembre de 2014 ocurrieron hechos de extrema violencia en la población de Iguala, en Guerrero. Ahí desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, asentada donde estuvo la hacienda de Ayotzinapa, y varias personas más perdieron la vida o sufrieron daños severos. Ésa es la escena, ése fue el crimen. A los confusos sucesos de esa larguísima noche, en los que participaron policías municipales y miembros de un grupo criminal, siguió una investigación sin precedentes a cargo de las autoridades federales y, sin embargo, pronto fraguó en la opinión pública la certeza de que algo unía esa tragedia con la del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. En este breve volumen, Fernando Escalante Gonzalbo y Julián Canseco Ibarra se interesan no en los sucesos mismos, sino en la construcción simbólica que se desarrolló en la prensa, los informes de expertos, las expresiones callejeras, así como en los efectos que la “cultura antagónica” —un marco de referencia basado en la sospecha ante cualquier acción del Estado— tiene en la comprensión de la realidad social e histórica de nuestro país. Apoyados en un modelo propuesto por Marshall Sahlins, los autores encuentran los mecanismos de interpretación que permitieron colocar ambos acontecimientos, toscamente distorsionados, en una misma cadena de ultrajes.

Lo que nos interesa en este libro es explorar el orden cultural que hizo posible (y al final, casi obvio) que se viese en el suceso de Iguala una reiteración de la masacre en la Plaza de las Tres Culturas.

FERNANDO ESCALANTE GONZALBO  
Y JULIÁN CANSECO IBARRA

[www.granodesal.com](http://www.granodesal.com)

Tras leer este ensayo, uno no puede más que sentir molestia y preocupación por la brecha entre los cambios radicales de México en las últimas décadas y lo pobres y anacrónicos que son nuestros instrumentos intelectuales y nuestras maneras de pensar la realidad.

MARCO ESTRADA,  
EL COLEGIO DE MÉXICO



ISBN 978-607-98611-4-8



9 786079 861148

**C** EL COLEGIO  
**M** DE MÉXICO

GRANO DE SAL •